



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE POSGRADO

**LOS DIARIOS *LA NACIÓN* Y *O ESTADO DE SÃO PAULO* Y SUS
ROLES EN LA LEGITIMACIÓN DEL NEOLIBERALISMO EN
ARGENTINA Y EN BRASIL (1989-1991)**

DOUGLAS LIMA OLIVEIRA

Tesis para optar por el grado de Magíster en Historia y Memoria

Director Daniel Badenes, UNQ/UNLP

La Plata, octubre de 2020

RÉSUMEN

El objetivo de este trabajo es comprender el rol desempeñado por la prensa escrita en el ascenso de las políticas neoliberales en Argentina y Brasil entre los años 1989 y 1991. Para fines analíticos serán utilizados como fuentes historiográficas los diarios *La Nación* y *O Estado de São Paulo*, más específicamente sus editoriales. A partir de los estudios de Historia Reciente, Historia y Memoria y Análisis Crítico del Discurso, se pondrá en relieve cómo la miradas política y social de estos diarios representaron un aspecto muy importante para que el neoliberalismo en ambos países pudiera consolidarse discursivamente.

Palavras-clave: prensa; neoliberalismo; Argentina; Brasil, Análisis Crítica del discurso; Historia Reciente.

ABSTRACT

The purpose of this work is to understand the role played by the written press in the rise of neoliberal policies in Argentina and Brazil between 1989 and 1991. For analytical purposes, the newspapers *La Nación* and *O Estado de São Paulo* will be used as historiographic sources, more specifically their editorials. From the studies of Recent History, History and Memory and Critical Discourse Analysis, it will be highlighted how the political and social views of these newspapers represented a very important aspect for neoliberalism in both countries to be able to consolidate discursively.

Keywords: press; neoliberalism; Argentina; Brazil; Critical Discourse Analysis; Recent History

RESUMO

O objetivo deste trabalho é compreender o papel da imprensa escrita na ascensão das políticas neoliberais na Argentina e no Brasil entre 1989 e 1991. Para fins analíticos, os jornais *La Nación* e *O Estado de São Paulo* serão utilizados como fontes historiográficas, mais especificamente seus editoriais. A partir dos estudos de História Recente, História e Memória e Análise Crítica do Discurso, será destacado como as visões políticas e sociais desses jornais representaram um aspecto muito importante para que o neoliberalismo nos dois países pudesse se consolidar discursivamente.

Palavras-chave: imprensa; neoliberalismo; Argentina; Brasil; Análise Crítica do Discurso;
História Recente

Índice

Agradecimientos.....	5
Introducción.....	6
Capítulo I.....	19
1.1 La asociación con el gobierno militar en Papel Prensa SA.....	21
1.2 La Reforma Financiera de 1977.....	24
1.3 Conflictividad con el régimen y el fin del Proceso.....	26
1.4 La redemocratización.....	29
1.5 La grave crisis económica.....	31
1.6 El Plan Austral y los conflictos con el movimiento obrero.....	33
1.7 Las leyes pro-militares y los alzamientos de los carapintadas.....	35
1.8 El plan primavera, la crisis hiperinflacionaria y el traspaso anticipado de poder.....	36
Capítulo II.....	40
2.1 La asunción anticipada del peronismo renovador.....	40
2.2 Los bonos sociales.....	43
2.3 Reforma laboral.....	44
2.4 Movimientos de los Derechos Humanos.....	49
2.5 Brasil.....	54
2.6 La flexibilización de los derechos.....	60
Capítulo III.....	66
3.1 El golpe de Estado de 1964.....	66
3.2 O Estado de São Paulo ante la dictadura.....	67
3.3 El histórico de la crítica liberal de O Estado de São Paulo a la corrupción.....	69
3.4 El año de 1968 y el recrudecimiento de la represión.....	71
3.5 Más un atentado bomba.....	73

3.6 El “milagro económico”, la Copa de 1970 y la campaña ufanista.....	74
3.7 La crisis del “milagro” y la fragilidad del régimen.....	75
3.8 Redemocratización.....	77
3.9 Las elecciones indirectas y el gobierno Sarney.....	79
3.10 Constitución de 1988.....	82
3.11 Las elecciones de 1989.....	84
Capítulo IV.....	87
4.1 El gobierno Collor de Mello.....	87
4.2 CUT.....	94
4.3 Argentina.....	108
Conclusión.....	115
Fuentes trabajadas.....	117
Bibliografía.....	119

Agradecimientos

A a mi padres Helena y Douglas que me dieron todo el soporte necesario durante la maestría y me acompañaron por todas las dificultades y avances.

A mi esposa Stephany Sousa por haberme apoyado en los momentos más difíciles de la escritura de esta tesis y por ser una compañera maravillosa.

A mi director Daniel Badenes que tan pacientemente me guió, aportó, dedicó un tiempo precioso para que esta investigación pudiera concretarse. Quisiera agradecerle también por lidiar con tanta calma y amabilidad con mis barreras lingüísticas, en especial con mi limitada redacción.

Me gustaría agradecer a todos(as) mis profesores(as) de la maestría en Historia y Memoria, por nuestras clases, discusiones e intensos aprendizajes. Les agradezco especialmente a los(as) docentes Daniel Badenes, Leandro Sessa, Ludmilla Catela, Daniel Lvovich, Victoria D'amico que se preocuparon con mi situación de estudiante no-hispano hablante y ofrecieron todo el soporte para que yo pudiera acompañar bien las clases.

Les agradezco a mis amigos de la maestría por el compañerismo dentro y fuera de nuestras clases, por las charlas que tuvimos en el buffet, y por todos los comentarios constructivos acerca de esta tesis. Agradezco especialmente a Iván Knopoff, a Diana Novoa, a Samanta Rodríguez y a Daniel Preciado.

Agradezco con mucho cariño a Fernanda Tocho y Laura Codaro que facilitaron enormemente el manejo de los diversos documentos y trámites burocráticos necesarios para mi ingreso a la maestría en 2017 y que me aclararon todas las dudas durante estos años.

Quisiera agradecer a Tomás Bergh que pese no estar vinculado a esta maestría es un gran amigo que tengo en Argentina y por el cual tengo un gran cariño. Le agradezco por nuestras divertidas charlas, por las actividades que participamos con las compañeras de Barrio Nuevo y con el colectivo Surcos (actualmente Siembra) y por el soporte emocional que me ofreció durante mi estadía en Argentina.

Introducción

La investigación propuesta buscará comprender el rol que los diarios *La Nación* y *O Estado de São Paulo* desempeñaron en Argentina y en Brasil, respectivamente, para la legitimación de los proyectos neoliberales que se desarrollaron en ambos países durante la década de 1990 y como los usos políticos del pasado por parte de esos diarios fueron un elemento fundamental para la construcción de esa legitimación.

El período que comprende el año de 1989 (que señaló la victoria presidencial de Carlos Saúl Menem, en Argentina, y Fernando Collor de Mello, en Brasil) y el de 1991 (que selló el acuerdo del Mercosur, plan de integración regional de orientación librecambista muy esperado por los grandes sectores económicos argentino y brasileño) será adoptado como recorte temporal de este estudio.

Para llegar a este objetivo general y recortes espaciales y temporales, entretanto, creo que sería importante explicar brevemente mi recorrido académico. Inicié la maestría en Historia y Memoria en el primer semestre de 2017, poco después del término de mi licenciatura en Historia. Como obligación final del curso de grado, presenté una tesina que abordó el liberalismo y el darwinismo social en la obra de Sílvio Romero, un intelectual brasileño decimonónico. Me interesaba mucho la historia política y económica brasileña.

Cuando terminé la licenciatura preferí cambiar un poco mis rumbos académicos para analizar recortes temporales más contemporáneos y también abarcar otras dimensiones geográficas. Fue así que cuando estuve en La Plata en marzo de 2017 (inicialmente para propósitos no-académicos), conocí el programa de Maestría en Historia y Memoria de la UNLP. Aunque no tuviera hasta entonces contacto con los estudios de memoria, pensé que podrían ser muy provechosos los aportes intelectuales del cuerpo docente del programa de posgrado y la bibliografía trabajada en el posgrado en lo que concierne la historia reciente.

En los primeros seminarios de la maestría tuve contacto con un artículo titulado “Pensando la historia más allá de la nación: La historiografía de América Latina y la perspectiva transnacional” de la historiadora Barbara Weinstein, traducido por dos docentes de la UNLP para la revista *Aletheia*. Tras haberlo leído otras veces más, pensé en la posibilidad de desarrollar una investigación que fuera más allá que el recorte nacional, con el cual yo estaba más familiarizado. Lo menciono porque, aunque haya adoptado una perspectiva de historia comparada, y no de una perspectiva transnacional de Weinstein, este artículo fue muy importante para que iniciara el proyecto de tesis.

De esa manera, como a mi me interesó comprender fenómenos de historia reciente más allá de los tradicionales recortes nacionales, busqué relacionar las enseñanzas del cuerpo docente de la Maestría que, por razones obvias, abordan más profundamente el contexto argentino, y las contribuciones académicas que mis profesores de la licenciatura en Historia en Brasil. Visto que el tema de mi tesina estaba relacionada con el liberalismo en Brasil durante el siglo XIX, el desarrollo de mis lecturas me llevaron a comprender el fenómeno del neoliberalismo en ambos países¹.

Con este breve explicación de como llegué a este tema, puedo pasar a explicar el trasfondo del recorte temporal y espacial que propongo. Durante los años 80, una considerable parte de la América Latina experimentó una profunda crisis económica y social que convergió con transiciones formales o, si se quiere, institucionales, de dictaduras cívico-militares hacia regímenes democráticos en algunos países, en especial los del cono sur².

La redemocratización no trajo consigo las expectativas que muchos tenían, en especial las organizaciones de derechos humanos y los sindicatos de trabajadores(as), como el encarcelamiento de represores y demás cómplices, bien como la reversión del deterioro de las condiciones de trabajo. Los fuertes cambios con respecto a las crisis de deuda en el subcontinente conllevaron a una oleadas de saqueos en algunos países, como Brasil, Argentina y Venezuela, por la profundización de las desigualdades sociales heredadas de las dictaduras, que impusieron una fuerte reestructuración capitalista en menor o mayor grado, bien como por el incremento del desempleo, rebajas de salario real, etcétera.

El período que se sigue a esta crisis generalizada, que no es solamente económica sino también social, se caracterizó por la asunción de gobiernos con agendas neoliberales. La condición necesaria según los portavoces de estos gobiernos sería la adopción de medidas conocidas como *ajuste estructural* (denominación utilizada principalmente por organismos

1 Además de académico, la maestría en Historia y Memoria y sus docentes me trajeron un enorme aprendizaje lingüístico. Como soy un estudiante lusófono, he tenido considerables dificultades con la escritura de la tesis en español y de comunicarme en las presentaciones orales de los seminarios (pese que lo estaba estudiando hacía un año antes de irme a Argentina). Sin la amabilidad y atención de los funcionarios administrativos y de mis profesores de la maestría (muchos de los cuales me preguntaban si yo estaba realmente acompañando el ritmo de las clases) los aportes académicos no habrían sido tan provechosos.

2 La descripción general, por supuesto, amerita algunas salvedades. En Chile, por ejemplo, la transición de la apertura democrática vino a ocurrir solamente a inicios de 1990, mientras que reestructuración del Estado y políticas neoliberales ya habían empezado con la dictadura de Pinochet (1974-1990, como presidente de facto). En Colombia, por otro lado, estas políticas no vinieron acompañadas con una transición democrática, visto que experimentaba una relativa continuidad de democracia representativa desde 1958. El caso de México también es paradigmático si se considera que fue el Partido Revolucionario Institucional, históricamente formado con el apoyo de grandes masas trabajadoras y con una orientación socialista, lo que llevó adelante dichas reformas. Con esto se quiere decir que las reformas estructurales no siguieron una lógica lineal en los países latinoamericanos, aunque sí las compartieron en puntos determinados.

internacionales de crédito, como el FMI), compuesto, de forma simplificada, de tomadas de decisión con el fin de tornar posible la renegociación de las deudas en *default*, incrementar las inversiones extranjeras directas (IED), recomponer la rentabilidad de los sectores más concentrado de las economías regionales, como el agropecuario y las industrias oligopólicas, bien como la banca extranjera, y reducir los salarios reales y flexibilizar el mercado laboral.

Los años 90 fueron un período donde, de modo general, los gobiernos nacionales del cono sur adoptaron una serie de medidas afín de reducir el déficit en la balanza de pagos, promover una estabilidad general en los precios y refuncionalizar³ la participación del Estado nacional en los diversos sectores económicos.

Estos fenómenos poseen un marco que no está cerrado en los contextos nacionales, a pesar de que estos juegan un rol imprescindible. Tras lo que se convino llamar la “crisis de la deuda latinoamericana”⁴, los organismos de financiación multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, condicionaron sus préstamos a los países que incumplieron con sus pagos a partir de un programa de amplio alcance conocido como *Consenso de Washington*.

Grosso modo, serían los recortes de gasto público, devaluaciones de monedas, los aumentos de impuestos para el consumo, disminución de impuestos para la producción y el derrumbe de aranceles para comercialización las políticas gubernamentales principales que estos fondos esperaban que los jefes de Estado/gobierno adoptasen cuando asumiesen sus mandatos. Estas medidas pasarían a ser conocidas como “ajustes”⁵ y constituyen un rasgo característico y recurrente de la *historia reciente* de nuestros países.

Cabe destacar, entretanto, que cada país experimentó un grupo de políticas distintas. En Argentina, por ejemplo, la concesión de servicios públicos y la privatización de empresas económicamente estratégicas fue un elemento más destacado que las fuertes devaluaciones de monedas impulsadas por el gobierno de Fernando Collor en Brasil. En realidad, como lo

3 Este mecanismo, que se puede ver en Cantamutto y Wainer (2013) cuando analizan las dimensiones de las luchas sociales en torno al régimen de Convertibilidad- adoptado en la Argentina en 1991 y que vigió hasta 2001- se trata de un “cambio de funciones del Estado, en que éste se enfoca, más que en la redistribución social favorable a los trabajadores, en el subsidio y protección al capital” (pp. 13-14). Vale decir que a pesar de la contribución semántica, este recorte temporal de la Convertibilidad no estará contemplado acá.

4 Para un interesante trabajo colectivo sobre la crisis de la deuda latinoamericana desde una perspectiva histórica, ver Ocampo et al (2014).

5 La palabra ajuste es una traducción literal del inglés adjustment (de Economic Adjustment Program), que es como los propios organismos multilaterales de financiamiento denominan las medidas compensatorias de la ‘asistencia’ financiera. El propio carácter valorativo del término en favor de las medidas propuestas como compensatorias de los programas no será tratado, obviamente, en el presente estudio de forma acrítica o ahistórica.

sostiene Cantamutto y Wainer (2013), la Argentina adoptó de forma jurídica (a través de la Ley de Convertibilidad) un modelo cambiario que ancló en valor del peso al dólar estadounidense, controlando la proporción entre las emisiones monetarias y las reservas internacionales, por además de otros mecanismos.

Esos procesos de ajuste estructural fueron planeados, proyectados, implementados, apoyados por unos, rechazados por otros, resistidos, flexibilizados por entidades, bien como por sujetos, autoridades y diversos actores sociopolíticos; dentro ellos la prensa escrita. Además de proveer informaciones, ésta también moldea opiniones, toma partido y crea representaciones sociales sobre el pasado⁶. En esta investigación, la prensa es tomada como actor político a partir de la concepción de Borrat (1989) para quien ella sería todo actor colectivo o individual capaz de afectar el proceso de toma de decisiones en el sistema político. A partir de ello, él considera que

“el periódico pone en acción su capacidad de afectar el comportamiento de ciertos actores en un sentido favorable a sus propios intereses: influye sobre el gobierno, pero también sobre los partidos políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de su audiencia.” (Borrat, 1989, p. 67)

Cabe señalar también que el interés por los años 1990 está relacionado con la importancia de los estudios de historia reciente, subcampo que ha aportado sustancialmente para la comprensión del presente. En este sentido, esta investigación también está orientada en situar la historia reciente como subcampo para comprender las relaciones que se entablan entre medios de comunicación y gobiernos para objetivos comunes y cómo se hacen usos políticos del pasado en las narrativas periodísticas.

Marco teórico-conceptual

Una conceptualización de los términos más relevantes en el punto de vista analítico será fundamental en la medida que el conjunto de herramientas teóricas propuestas deberán nortear también el modo como se tratarán las significaciones dadas para las categorías utilizadas, a pesar de la diferencia entre autores y/o escuelas, resultando en el marco teórico conceptual.

Para tanto, resulta menester comprender cómo se va trabajar inicialmente conceptos como *memoria*, *discurso*, *memoria discursiva* y *Reforma del Estado*. A pesar de que algunos de estos están insertos en un número más limitado de trabajos académicos y que, por lo tanto,

6 Véase Saiz (1996) para una discusión acerca de las posibilidades de la prensa escrita como objeto y/o fuente de investigación en la historiografía.

ofrecen un significado más delimitado y un poco menos problemático, otros presentan una destacable polisemia en las ciencias sociales. Cabe observar, entretanto, que las definiciones tomadas siempre serán delimitadas a los marcos del presente trabajo bien como serán temporarias.

Primeramente, se toma *discurso* dentro de las discusiones promovidas por el Análisis Crítico del Discurso, que lo considera como una práctica social en la cual se considera el *uso* del lenguaje por *sujetos reales en situaciones reales*, o si se quiera, como una “acción entre las personas que se articula a partir del *uso lingüístico contextualizado*, ya sea oral o escrito.” (Blancafort y Valls, 1999: 15) Este uso es condicionado por las estructuras sociales a la vez que las condiciona. Según Fairclough y Wodak:

Describir el discurso como práctica social implica una relación dialéctica entre un evento discursivo particular y la situación, la institución y la estructura social que lo configuran. Una relación dialéctica es una relación en dos direcciones: las situaciones, las instituciones y las estructuras sociales dan forma al evento discursivo, pero también el evento les da forma a ellas. Dicho de otra manera: el discurso es socialmente *constitutivo* así como está socialmente constituido: constituye situaciones, objetos de conocimiento, identidades sociales y relaciones entre personas y grupo de personas. Es constitutivo tanto en el sentido de que ayuda a mantener y a reproducir el *statu quo social*, como en el sentido de que contribuye a transformarlo. (1997: 258, apud Blancafort y Valls, 2001)

Comprendiendo el discurso como una práctica social que involucra el uso del lenguaje, vale reforzar que la posibilidad que él tiene para mantener y o reforzar las relaciones sociales de control o dominación será tomado como base para su utilización en los objetivos trazados en la presente tesis, sin desconsiderar su capacidad de transformación de la realidad social, aunque la misma no va a ser aquí contemplada. Por lo tanto, cuando fuere mencionado el término *discurso periodístico*, se lo entenderá como el uso del lenguaje (en este caso, uso escrito) específicamente por los diarios *La Nación* y *O Estado de São Paulo*.

Definida temporariamente esta noción de discurso, vale establecer su interrelación conceptual con la *memoria*, lo que desemboca en la definición de *memoria discursiva*. Al contrario una función puramente psicológica de la memoria, se está en total acuerdo sobre como la literatura de los estudios sociales sobre la memoria la percibe, es decir, como una *representación o conjunto de representaciones colectivas/sociales sobre el pasado* (Jelin, 2002; Halbwachs, 2004a; 2004b).

Este entendimiento sobre qué es la memoria proporciona una adecuación para desarrollar la comprensión sobre la mencionada *memoria discursiva*. Michel Pêcheux,

lingüista representante de la escuela francesa de Análisis del Discurso (AD), ofrece una relevante interpretación sobre el fenómeno:

“La memoria discursiva sería lo que, ante un texto que surge como acontecimiento a leer, viene a establecer los <<implícitos>> (es decir, más técnicamente, los pré-construidos, elementos citados y relatados, discursos transversos, etc.) de los que su lectura necesita: la condición del legible con relación al propio legible” (Pêcheux, 1999: 52)

El discurso, así, se entrelaza con la memoria en la medida que el uso del lenguaje por sujetos reales en situaciones reales es condicionado por representaciones sociales sobre el pasado que configuran las posibilidades y límites de este uso a la vez que el discurso produce transformaciones o consolida visiones de mundo sobre las representaciones sociales, o memoria.

La memoria discursiva hace que el texto se ponga en diálogo con otros textos ya existentes, cambiándolos, reproduciéndolos o transformándolos. Este elemento servirá para poner de manifiesto como los diarios a ser trabajados se utilizan de los textos “ya dichos” (es decir, otras representaciones sobre el pasado que refieren a las inestabilidades político-económicas e histórico-sociales en Argentina y en Brasil) para elaborar su enunciación de carácter liberal conservador.

Los textos “ya dichos” en este caso pueden ser entendidos como condiciones de posibilidad para el surgimiento del liberalismo conservador en el contexto internacional, como por ejemplo la emergencia de fuerzas sociales conservadoras, o neoconservadoras, en los países centrales, bien como la creciente participación de los organismos de crédito internacionales en la definición de políticas públicas de los países latinoamericanos.

Este escenario de fondo permite pensar la rearticulación que las fuerzas sociales tradicionales y dominantes argentinas y brasileñas, -las cuales han organizado sus discursos a través de los periódicos como *La Nación* y *O Estado de São Paulo*,- emprendieron a fin de adecuar sus mecanismos de control social a los nuevos actores y a los cambios históricos.

Dentro de los términos centrales propuestos en este marco teórico-conceptual, cabe hacer una última breve caracterización de lo que se quiere decir con *Reforma del Estado*. Aunque no se la conceptúe de forma esquemática en la literatura sobre las reformas estructurales de los años 90, basándose en la misma puede establecerse algunos aspectos elementares.

Aunque haya diversas formas de comprenderse el relativamente problemático concepto de Estado, se lo puede demarcar como una *relación social* y como una *cristalización de luchas y contradicciones sociales pasadas* (Jessop, 2015). Así, la *Reforma del Estado* se podría considerarla como una reestructuración de las varias fuerzas sociales dentro de determinado espacio y período histórico orientada a un cambio de relación entre el Estado y los diversos agentes histórico-sociales.

Es allí donde el Estado neoliberal se establece en cuanto reforma de un Estado anterior y donde una amplia parcela poblacional, sea la parte organizada en movimientos sociales o no, se somete a un tipo de relación en la cual los sujetos que detentan el capital político y financiero (miembros de las élites tradicionales y nuevos actores dominantes) se imponen a través de un mercado reificado, en cuanto mecanismo discursivo.

Basado en la bibliografía especializada, los estudios de sociología, ciencia política, economía y comunicación social son los más numerosos y académicamente sustanciales en lo que se refiere a estas reformas estructurales de la década de 1990. Sus aportes serán imprescindibles, visto que en la mayoría de las veces se tratan de estudios de caso o de profundizaciones acerca de las realidades sociopolíticas nacionales y estas pueden no estar tan contempladas en un trabajo que utiliza la comparabilidad como método.

Los aportes teóricos oriundos de la comunicación social, teniéndola como ejemplo, son sustanciales para la comprensión de estos fenómenos relacionados a la consolidación del neoliberalismo en ambos países. No se debe ignorar que los instrumentos y mecanismos intelectuales que los diarios utilizan para construir una visión sobre la realidad social son distintos de otras posibles fuentes para trabajar este mismo tema. Para eso, cabría poner brevemente el alcance de dos términos que atañen a esos aportes: *agenda setting* y *framing*.

La noción de *agenda setting* se asocia con la capacidad que tienen los medios de comunicación de transferir la relevancia de una noticia de su propia agenda a la del conjunto de la sociedad (McCombs, 1996). Obviamente no se puede aprehender de eso que los medios logran imponer totalmente su agenda de intereses a un público desposeído de cualquier agenda, sino que el establecimiento del *agenda setting* es un intento sistemático de convergir ambas agendas en favor de la primera, logrado parcialmente dada la asimétrica relación de poder entre los medios y su público lector.

Este mecanismo de poner en destaque determinadas noticias involucradas en una agenda específica, es combinado con otro, el *framing* o encuadre. Para Entman (1993) encuadrar significa

“seleccionar algunos aspectos de una dada realidad y tornarlas más salientes en un texto comunicativo, de forma a promover la definición de un problema particular, de una interpretación causal, de una evaluación moral, y o de una recomendación de tratamiento para el tema descrito.” (p. 52, traducción propia.)

Aruguete (2011) considera a los *frames* herramientas fundamentales para aumentar las perspectivas, relevar entendimientos particulares sobre los eventos además de transformar la forma de pensar del público sobre determinado asunto. Así, el *agenda setting* y el encuadre (*framing*) hacen parte del proceso de abordaje de un fenómeno noticioso.

La importancia de comprenderse el encuadre desde la perspectiva de definición de problemas, bien como los diagnósticos de los mismos, es lo que nos permitirá percibir a los periódicos como agentes en la elaboración de encuadres, es decir, como agentes que definen pautas y cuestiones de discusión (*agenda setting*), bien como la mirada que se construye sobre las mismas.

Con estos principales términos parcialmente conceptualizados (es decir, *memoria*, *discurso*, *memoria discursiva*, *reforma del estado*, *framing* y *agenda setting*) se podrá tener un avance en los conceptos secundarios que se extenderán por este trabajo, bien como un más adecuado desarrollo del marco teórico conceptual.

Los diarios trabajados

La Nación

Creado el 4 de enero de 1870 por Bartolomé Mitre, La Nación sucede al periódico La Nación Argentina en cuanto “órgano del pensamiento gubernamental del país entre 1862 1868”, período que Mitre gobernó la Argentina. La diferencia entre los dos diarios se basa en el primer editorial de La Nación, que dice: “La nación Argentina era un puesto de combate. La Nación será una tribuna de doctrina (...) La Nación Argentina fue una lucha, La Nación será una propaganda”.

Fundado como una sociedad anónima, más allá de Mitre, por los nombres de José María Gutierrez, Antonio Lezica, Anacarsis Lanús, Rufino de Elizalde, Cándido Galván, Delfín Huergo, Juan Agustín García, Francisco de Elizalde y Adriano Rossi, La Nación muy rápidamente pasa totalmente a la familia Mitre por medio de compra de títulos y valores. Poseyendo accionistas de las clases altas y estos escribiendo para sus iguales,

El matutino fundado por Bartolomé Mitre acompañó desde sus inicios las ideas de las clases dominantes, los grandes empresarios, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina y jugó un papel muy importante, si se tiene en cuenta que no hay ninguna institución –salvo la Iglesia– (porque otros medios fueron censurados en el peor momento al igual que los partidos políticos) que haya podido hablar durante 130 años seguidos sin interrupción. Su lema será: “Credibilidad, objetividad y pluralismo”. Sus directores son siempre de la misma familia: Bartolomé Mitre y Vedia y Emilio Mitre, hijos ambos de Mitre; Luis Mitre y Jorge A. Mitre, nietos del fundador; Bartolomé Mitre, biznieto del general; y el último Bartolomé Mitre, tataranieto. (Baschetti, sin año, p. 3)

El diario sigue una propuesta de que el futuro y el desarrollo argentino era “lógico y predecible” (Baschetti, p. 4). El historiador Tulio Halperin Donghi considera que Mitre tenía una visión optimista de la Argentina que se contraponía a una perspectiva “obsesionada por el riesgo del fracaso” (Halperin Donghi, 1996) de sus predecesores. Es así que ese diario, por lo menos hasta el ascenso del primer peronismo, va a creer en una visión lineal de un futuro promisorio para el país, considerando su marco liberal conservador.

Entretanto, en tiempos más recientes, el diario experimenta una consolidación de posición dominante con la instalación de la empresa Papel Prensa SA. Esta tiene sus orígenes en la creación, por parte del gobierno *de facto* de Onganía, del Fondo para el desarrollo de la producción de papel prensa y celulosa, en 1969. En ese momento se estableció que todos los diarios del país pagarían un recargo de 10% sobre la importación de papel a partir del 1 de agosto de 1970 y; este Fondo tendría como objetivo lograr una “soberanía” (ya que hasta entonces el papel prensa era totalmente importado) de este insumo básico para las actividades periodísticas.

El diario *La Nación*, en conjunto con los diarios *Clarín* y *La Razón*, pasarían a ser socios de Papel Prensa SA, por medio de una compra irregular de acciones. Irregular, visto que la entonces controladora de las acciones, Lidia Papaleo, fue obligada por la Junta Militar a ceder su participación en la empresa⁷ (Borelli, 2008). De esta forma *La Nación* se transforma en uno de los grandes beneficiarios de esta política estatal de industrialización.

7 Esta participación en Papel Prensa que la tenía Papaleo se debía al aporte millonario que la organización peronista Montoneros logró a su marido, el banquero platense David Graiver, por el secuestro extorsivo de los hermanos Born.

Considerando que el Estado tenía el 25% de las acciones y poder de veto sobre los entes privados, *La Nación* resultaría en un verdadero socio de la última dictadura. A Papel Prensa SA le fue otorgado privilegios como la aplicación de hasta 53% en aranceles sobre el papel importado (Borelli, 2008). Dentro de dichas circunstancias, *La Nación* alcanza un rol preeminente para llegar a la apertura democrática con un poderío considerable para la legitimación de las políticas neoliberales en Argentina.

Son especialmente esas discontinuidades que serán consideradas en este trabajo al abordar cómo en la historia reciente este mismo sujeto histórico social, *La Nación*, se posiciona y estructura su discurso más de un siglo después de su creación y en condiciones muy diversas (apertura democrática, ascenso del neoliberalismo, concentración de los medios de comunicación) de las que Argentina que no hacía mucho se “independizara”. No sorpresivamente, atender a esas discontinuidades no será hecho sin problemas y de forma completa. Será un ejercicio más que un proyecto sistematizado.

O Estado de São Paulo

El periódico *O Estado de São Paulo* se funda en 1875 cuando se llamaba *A Província de São Paulo*. Formado por miembros del entonces *Partido Republicano Paulista*, fue durante un largo período controlado por la familia Mesquita, y después conjuntamente con la familia Pestana, por además de varios otros socios accionistas.

A pesar de no haberse posicionado explícitamente como un vocero del partido republicano, defendió los intereses de las elites agrarias tradicionales, una mayor autonomía para las provincias, y el derrumbe de la monarquía en sus momentos finales de existencia.

“En realidad, A Província de São Paulo [nombre anterior a *O Estado de São Paulo*] defendió desde el inicio los intereses de la elite agraria, combatiendo la centralización política y administrativa impuesta por el *Poder Moderador* al largo del Imperio. El periódico reivindicaba igualmente elecciones directas para el Senado y para la presidencia de las provincias, la separación entre la Iglesia y el Estado, la institución del matrimonio y de los registros civiles, bien como la progresiva sustitución del trabajo esclavo por lo libre.” (Saul, 2009, traducción libre del original en portugués)

Siendo el sistema monárquico desmantelado por un golpe militar y con la instauración de un sistema republicano de gobierno, el diario pasa a adoptar una línea oficialista, a pesar de que teóricamente *O Estado de São Paulo* pasa a representar por además de los intereses

agrarios, los de los republicanos disidentes descontentos con el carácter militar y que exigían una participación cívica en el gobierno bien como el fin de la *política do café com leite*⁸.

De esta forma, ese periódico actuaba de forma a apoyar en la mayoría de los casos las candidaturas de los civiles a la presidencia y a hacer una oposición a los candidatos y presidentes militares y a eventuales censuras de imprenta y violencia policial a lo largo de este período que la historiografía brasileña conviene denominar *Primeira República*.

Con el ascenso de Getulio Vargas al poder, *O Estado de São Paulo* no presenta una oposición tan destacada, como la de *La Nación* al gobierno de Perón. Esto abre una reflexión para el cuidado dentro de la historia comparada que se propone en este momento para que no se produzca una asociación ligera y superficial sobre los diversos agentes involucrados en procesos políticos sociales que pueden en un primer momento ser percibidos como similares, pero que muestran matices y posicionamientos distintos en diferentes coyunturas históricas.

Favorable a la creación de las leyes laborales que hasta hoy preservan muchos de su contenido y que perjudicaron muchos intereses de las élites agrarias y de los crecientes industriales, *O Estado* la vio como “un instrumento de combate a la locura del comunismo” (traducción libre). Por lo tanto, el diario hace un esfuerzo de conciliación de intereses cuando se depara con un cambio en las conquistas sindicales para el mantenimiento del control social.

Con la profundización de las conquistas sociales y con las restricciones que los sectores de la burguesía nacional experimentaron durante el gobierno de João Goulart, el diario participa de reuniones con los altos comandos militares y con las patronales para la difusión de la amenaza comunista en sus editoriales a fin de obtener apoyo público a la derrocada de Goulart⁹.

A pesar del apoyo, *O Estado de São Paulo* se encontraría en una situación extrema por la censura y detenciones de funcionarios que sufrirían durante la última dictadura. Así, las denuncias producidas por el diario adoptaron un tono más sutil para escapar al control del régimen. A pesar de que este diario no va a beneficiarse de la misma forma o tan directamente como *La Nación* y su estrecho vínculo con el Estado dictatorial, utilizará su discurso de

8 Literalmente “política del café con leche” se basaba en la negociación entre instancias gubernamentales en la cual el presidente daba a los gobernadores una mayor autonomía en cambio de apoyo de los diputados de estos estados (el equivalente a las provincias en Argentina) en el Congreso.

9 La “rama” militar de este complot estaba representada por la ESG (Escola Superior de Guerra), donde los altos oficiales obtenían una formación basada en la Doctrina de Seguridad Nacional, y la empresarial por el IPES (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais). Para un abordaje más profundo sobre este tema véase Figueiredo (2005)

resistencia a la dictadura para encubrir su apoyo al golpe y a los sectores más representativos del diario que igual lo apoyaron.

Decisiones metodológicas

El abordaje propuesto se basa en el análisis de los datos de las fuentes en una perspectiva sincrónica y diacrónica de Historia Comparada. Es decir, en el sentido que las fuentes primarias (los diarios La Nación y *O Estado de São Paulo*) fueron, durante el recorte temporal propuesto, producidas virtualmente sin distancia de tiempo, se propone un análisis que priorice el desarrollo de las estrategias periodísticas *conjuntas*, comprendiendo como *conjuntos* los aspectos de sintonía y compartición ideológicas, durante el recorte de 1989-1991. Sincrónico porque atañe al problema de investigación con respecto a Argentina y a Brasil y diacrónico porque se busca justamente percibir el *proceso* o, mejor dicho, la perspectiva procesual histórica del uso de las representaciones sobre el pasado para la construcción de la visión del ajuste como inevitable. Las perspectivas sincrónicas y diacrónicas, por lo tanto, son indisociables, a pesar de que analíticamente pasibles de delimitación, del objetivo del presente estudio.

Dentro de los editoriales que abarcan el período de julio de '89 a abril de '91 (La Nación) y de marzo de '90 a abril de '91 (*O Estado de São Paulo*) serán pertinentes los siguientes elementos: *cómo los periódicos elaboran las representaciones sociales sobre el pasado como forma de justificar o legitimar las políticas neoliberales y cómo los sujetos beneficiados y perjudicados, o si se quiere, los favorables y los contrarios, son clasificados discursivamente.*

Así como la Historia Comparada, es importante considerar que los aportes traídos por el Análisis Crítico del Discurso, en especial el *enfoque histórico* de la lingüista Ruth Wodak (2003), serán parte constitutiva de la estrategia metodológica trazada. Esto se da en vista que esta línea de investigación propone analizar *cómo el lenguaje puede ser aprehendido como un mecanismo del establecimiento y mantenimiento de las relaciones sociales de dominación o, grosso modo, como el lenguaje puede ser ideológico* (comprendiéndose ideológico acá como *visión de mundo ideológica*, como la utiliza Löwy (2010). No sorpresivamente este aporte metodológico tendrá una sustancial contribución para el desarrollo de la investigación, visto que los periódicos se valen principalmente del lenguaje (en sus diversas formas de expresión) para obtener sus fines inmediatos y/o históricos de los grupos y/o clases que representan.

El corpus documental se definió en torno al período 1989-1991, que explicamos anteriormente. Para el caso argentino, la propuesta es iniciar los análisis de los editoriales de La Nación a partir de 8 de julio de 1989, cuando asume formalmente Carlos Menem; y para el caso brasileño 1 de marzo por la misma razón. La explicación del mismo se basa en el interés despertado por investigar el ascenso y consolidación de neoliberalismo en ambos países de forma sincrónica hasta el momento de la creación del Mercosur, entendido acá como una concretización de los intereses de los grupos económicos más concentrados en ambos países.

Sobre los editoriales de La Nación tratados en esta investigación por lo general se situaban en la página siete de cada edición. Los textos no fueron firmados por cualquier periodista, transmitiendo una idea general compartida por el grupo propietario. Lo mismo se dio con O Estado de São Paulo, cuyos editoriales no estuvieron firmados. La diferencia de este último es que los editoriales se situaron principalmente en la página 3.

Acercándose a los números detrás de las fuentes, hay que aclarar que La Nación y O Estado de São Paulo son diarios que entre 1989-1991 publicaron editoriales casi todos los días, aproximadamente 5 editoriales cada 7 días. Dado los meses abarcados por el recorte temporal, eso totaliza entre 700 y 750 editoriales leídos a lo largo de estos 4 años de escritura. De este total, analizaron un poco menos de 10%.

Editoriales que hablaban sobre cuestiones de las municipalidades, problemas sanitarios, libertad de prensa, reformas de alquileres, etcétera, fueron descartados del análisis. Es decir: como los ejes de la tesis están formados por la legitimación de las políticas neoliberales, por la visión que se creó sobre los sectores en contra de estas políticas y por la representación que los diarios elaboraron sobre el pasado, el total de editoriales estudiados -que se detalla en el apartado de Fuentes- fue más acotado.

Capítulo I- El *Proceso de Reorganización Nacional*, la redemocratización y el ascenso de los grandes grupos económicos en la Argentina (1976-1989)

Considerando que una mayor comprensión sobre la actuación política del diario *La Nación* durante el ascenso neoliberal en Argentina se la puede obtener a través de un análisis de las condiciones históricas y sociales de emergencia de esa actuación, este capítulo está orientado a hacer un recorrido no exhaustivo sobre dos procesos históricos previos, es decir, la última dictadura cívico-militar y el período de ‘redemocratización’ de los años 1980. Ese recorrido se justifica en dos perspectivas.

La primera es que el autodenominado *Proceso de Reorganización Nacional* impuso una profunda reestructuración política, social y económica al país; y la segunda es que los años 80 fueron marcados por una intensa crisis (también política, social y económica) que posibilitó el ascenso de las ideas neoliberales, primeramente en el marco del gobierno de Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical y posteriormente, y con mayor éxito, por el de Carlos Saúl Menem del Partido Justicialista. Partiendo de la primera perspectiva, se puede decir que el golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas, que inauguró una dictadura que duró de marzo de 1976 a diciembre de 1983, fue

“[...] la combinación de una política económica desindustrializadora, aperturista y orientada por los intereses de las fracciones más concentradas del capital y una política represiva dirigida selectivamente a desactivar el campo de conflictividad social y política que había caracterizado a la Argentina durante las décadas anteriores, [y esto] determinó cambios de una intensidad desconocida en nuestro país”. (Canelo, 2001)

En este sentido, la última dictadura puede ser entendida como ofensiva multifacética de estas fracciones más concentradas del capital, sectores militares y de la Iglesia católica contra una serie de grupos sociales movilizados y poseedores de proyectos de poder en conflicto con los del *statu quo*: los sindicatos y las organizaciones guerrilleras, como así también, el movimiento de mujeres y el de los pueblos indígenas, entre otros¹⁰.

El diario de los Mitre no solamente no frena esta ofensiva, sino que *participa activamente* de ella desde su inicio. La preocupación por la forjada representación de la “amenaza subversiva” hizo que *La Nación* estuviera atento a una serie de ámbitos sociales donde esa amenaza pudiera manifestarse. La propia explicación de que el golpe de Estado no fuera llamado “revolución”, como en anteriores denominaciones de tomas militares, puede

10 Para un mayor acercamiento a la actuación de los movimientos feministas y de los pueblos tradicionales en dictadura, véase Di marco (2010) y Iribarren (2016).

estar asociada a crear una imagen de que la junta militar no estaba derrocando autoridades preexistentes, sino que estaba llenando un “vacío de poder” (Sidicaro, 1993:398).

La Nación participó de un proceso de legitimación por lo cual se iba a reestructurar muchos aspectos de la realidad social argentina. No se debe olvidar, entretanto, que el periódico no se ponía discursivamente dentro de la estructura estatal, sino por arriba de las disputas políticas ya desde 1909, según el sociólogo Ricardo Sidicaro. Por *discursivamente*, lo que se quiere apuntar en este trabajo, en realidad, es que la puesta discursiva es fundamental para comprender el rol que el diario se reserva ya en dictadura para cuando llegue el momento de elaborar una *memoria discursiva*, lo que observaremos en la coyuntura de la crisis hiperinflacionaria que dará lugar en 1989.

La evaluación, si se puede decir más general y macro, por parte del diario sobre la interrupción constitucional se direcciona en presentarle al público lector que se había de reformar los mecanismos democráticos, bien como los partidos políticos. La dictadura sería legitimada como un período de maduración institucional y de “reorganización”. A pesar de las persecuciones sufridas por la prensa, y denunciadas por el diario, la “lucha contra la subversión” servía como una argumentación que moldeaba el accionar represor del régimen. Las denuncias a los “excesos” de la represión no dejaban de ser hechas, pero como había un enemigo común, la subversión, esta debería ser eliminada a cualquier costo.

Para lograr eso, el ámbito educativo el énfasis puesto en el sistema educativo ilustra bien el carácter multifacético del *proceso*. *La Nación* defendía una revisión del programa de la escuela secundaria y la reconstrucción de una nueva visión sobre la sociedad. Según Sidicaro (1993), el diario

“[...] argumentaba que mediante el uso de conceptos tales como “dependencia extranjera”, “grupos sociales opresores” o “minorías dirigentes”, se había construido “un razonamiento ideológico donde todo se presentaba exactamente del revés, y la verdad y la mentira se confundían inextricablemente en las mentes ingenuas de niños y adolescentes.” (p. 399)

A fin de que se posibilite problematizar ese tema, cabe preguntarse: por qué es insuficiente decir que la participación activa de *La Nación* mencionada anteriormente se resume en explicar qué sería el *Proceso*, ordenarlo en sus motivos de existir, bien como orientar la junta sobre que caminos seguir. ¿Por qué las persecuciones a profesionales de prensa no repercutían tan fuertemente en sus intereses como influyente medio de prensa, además del tema de la censura estatal? ¿Qué controversias involucraban el diario de los Mitre

en este entramado de elementos que pone la dictadura como un complejo campo de intereses poderosos?

La asociación con el gobierno militar en Papel Prensa SA

Mencionada brevemente en la introducción, Papel Prensa SA es una empresa argentina de producción de insumos para diarios. Aunque haya sido creada en 1971, pasó a operar en 1978, durante la presidencia *de facto* del militar Jorge Videla. Hasta aquel entonces, el grupo Graiver detenía una parcela razonable de las acciones de la empresa, 26%. Como mencionado en la introducción, David Graiver fue un banquero nacido en La Plata hijo de inmigrantes polacos.

Por haber tenido vínculos de las autoridades del gobierno de María Estela de Perón y administrado los fondos del rescate millonario del secuestro de los hermanos Born, ocurrido en 1974, por parte de la agrupación política Montoneros, terminó por atraer el interés de la junta militar en incautar los bienes y valores de su grupo financiero. Falleció controvertidamente en un accidente de avión cuya motivos nunca fueron bien determinados. Tras su muerte, restaba saber a quién(es) direccionar sus participaciones en *Papel Prensa SA*.

Había dos ideas distintas sobre quienes deberían ser los nuevos dueños de las acciones del grupo Graiver. El presidente *de facto* Jorge Videla y su ministro de Economía Martínez de Hoz¹¹ defendían que esos fueron los mayores medios de comunicación (*Clarín*, *La Nación* y *La Razón*) por su capacidad de legitimar la “refundación” de régimen. Por otro lado, el militar Emilio Massera (integrante de la junta militar) prefería que el propietario del Banco de Intercambio Regional, José Rafael Trozzo fuera el beneficiario.

A pesar de los procedimientos formales de compra venta de acciones pertenecientes a Lidia Papaleo de Graiver, viuda del banquero Graiver, hubo maniobras por parte del Estado para lograrlo. De acuerdo con Gasparini (2007):

“El Estado advirtió con suficiente antelación a los accionistas privados que no iba a dar quórum para la Asamblea General prevista para el 3 de noviembre de 1976. En esa reunión se discutiría el futuro de la empresa, seriamente comprometido por la iliquidez que padecía el grupo Graiver, su principal fuente financiera, aparte del Estado. Ante la evidencia de que el gobierno retiraba el imprescindible auxilio para

11 Cabe decirlo de antemano que Martínez de Hoz era un empresario que había ocupado puestos de dirigencia en los sectores de electricidad, seguros, petroquímico y acería. Presidió la compañía de aceros Acindar, por la cual obtuvo extraordinarios beneficios del régimen militar, tanto utilizándose de represión arbitraria cuanto por vías de enriquecimiento ilícito. Azpiazu (2004) hace un importante estudio de esos empresarios que se beneficiaron del Proceso.

seguir adelante, el día antes la viuda fue convencida por la persona apropiada a inclinarse y firmar el pre-boleto de venta sin protestar.” (p. 253)

Esa maniobra se debe principalmente al poco tiempo que el régimen tenía retirar la participación del grupo. Las investigaciones judiciales que avanzaban en aquel entonces apuntaban a un gran esquema de lavado de dinero en bancos suizos por parte de Graiver. Si hubiera una incautación de bienes y valores del grupo, los activos de *Papel Prensa SA* no podrían ser vendidos, pasando al control de la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (CONAREPA) (Saborido y Borelli, 2012).

Ya en aquel momento *La Nación* y los otros grandes medios estaban organizados en una empresa llamada *FAPEL SA*, creada en 1974 y que tenía como propuesta fabricar insumos de papel, por el recelo de que la puesta en funcionamiento de *Papel Prensa SA* no estuviera planeada para el corto plazo. Al momento de concretarse la compraventa del paquete accionario, *La Nación* y los otros medios la hacen a través de su empresa (esta que tenía solamente una creación formal, sin actividades económicas ni administrativas).

El Estado actuó por los diarios de *FAPEL SA* no solamente para intermediar el traspaso de acciones. A partir del inicio de operaciones de *Papel Prensa SA* se les otorgó a los accionarios exención de impuestos nacionales por 10 años, la retirada de estudios técnicos para conocer la capacidad de los diarios para el financiamiento del proyecto, la retirada de plazos para finalización de obras, la ausencia de solicitud de aval de patrimonio personales. Además, se debe mencionar que se le aplicó aranceles al papel importado inicialmente al orden de 20%, después 45% y finalmente 53%, considerando que nunca hubo abono de aranceles al papel importado anteriormente. (Saborido y Borelli, 2012).

Cuesta un poco a comprender esta especie de choque de convicciones tanto por parte de un gobierno que buscó, a través de su ministro de economía Martínez de Hoz, una política más cerca del librecambismo; y de *La Nación* (que aunque haya repensado más sus posturas librecambistas ya por los años 1920, igual era contra privilegios políticos y económicos de varios sectores junto al Estado) de mantener una relación tan cómodamente corporativa.

Aunque el Estado haya permanecido como accionario mayoritario, con 25% según Borelli (2008), los grandes grupos de prensa como los diarios *Clarín*, *La Nación* y *La Razón* ocuparon una posición privilegiada sobre otros medios, visto que *Papel Prensa SA* continúa hasta hoy como única proveedora de insumos de papel en el país¹². Esa fuerte relación con el

12 Daniel Badenes, en su artículo *Papel de regalo*, demuestra bien cómo la problemática alrededor de *Papel Prensa SA* está lejos de encontrar una solución política que pugna judicialmente las presuntas y documentadas violaciones a los derechos humanos perpetradas por *La Nación* en conjunto con sus otros

poder Estatal fue objeto de renuncia y recriminaciones por los medios menores que se quedaron afuera de la disputa por la apropiación de la empresa que monopolísticamente produce el principal insumo de los diarios del país.

Algunos “vieron en la asociación entre el Estado y los mencionados diarios un mecanismo potencialmente capaz de limitar la libertad de opinión de los mismos (Sidicaro, 1993). Las empresas que quedaron afuera del negocio de *Papel Prensa SA*, como *La Prensa* (que había rehusado la invitación), *Ámbito Financiero*, *Buenos Aires Herald* y el platense *El Día*, manifestaron su rechazo a través de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), de la cual *La Nación*, *Clarín* y *La Razón* se retiraron temporalmente por los crecientes tonos en su contra.

Lo que torna el ejercicio de análisis de esta asociación entre *La Nación* y el Estado dictatorial más dinámico y matizado es percibir que la junta militar también crea mecanismos de vinculación con el diario que va mucho más allá de restricciones de editoriales e informaciones que pudieran afectar a intereses primordiales del régimen. Uno de estos mecanismos se puede ilustrar con lo que pasó tras la repercusión pública del traspaso de las acciones de *Papel Prensa SA* por parte del grupo Graiver a los diarios *La Nación*, *Clarín* y *La Razón*. Para anticiparse a cualquier cuestionamiento sobre la posible ilicitud del emprendimiento, los tres diarios elaboraron la siguiente nota conjunta:

“La Nación, Clarín y La Razón adquirieron las acciones clases “A” de Papel Prensa S.A. previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe. Esta conformidad fue luego ratificada por el voto afirmativo del Estado en la asamblea del 18 de enero de 1977 que aprobó las transferencias accionarias a favor de los tres diarios” (Secretaría de derechos humanos, sin año, p. 1)

A pesar de esa iniciativa, la junta militar aprovecha los cuestionamientos a la compraventa de acciones y designa un veedor para *Papel Prensa SA*. El gesto no es tan simple de explicar. El apoyo por parte de *La Nación* y los otros grandes medios al golpe de Estado

socios de la entonces Fapel SA, bien como las irregularidades de la compra del paquete accionario de la familia Graiver. En diciembre de 2011, los socios mayoritarios de la empresa Papel Prensa SA sufrieron un revés cuando se aprobó la Ley 26.736. Dicha ley declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios, creó regulaciones sobre este sector, y estableció el control parlamentario a través una comisión bicameral permanente para analizar planes de inversión y fiscalizar el acceso igualitario a los precios de los insumos. Además del trámite legislativo, se inició una demanda en contra los diarios del bloque de control de Papel Prensa SA por presuntas irregularidades durante la adquisición del paquete accionario de la empresa y porque supuestamente ellos provocaron violaciones a los derechos humanos que se insertarían en el marco de los crímenes de lesa humanidad. Los parlamentarios afines a los socios de Papel Prensa Sa, los cuales el diario Tiempo Argentino denominó “Bloque Clarín” (Badenes, 2018), lograron revertir los efectos de la Ley 26.736 en diciembre de 2018. Con la revocación de varios artículos, el bloque logró el fin del acceso igualitario a los precios de los insumos de pasta celulosa y papel y el fin de la obligación que Papel Prensa SA operara en su plena capacidad operativa, para mencionar algunos cambios. Además, los diarios mayoritarios de la empresa fueron sobreseídos de la causas de presuntas apropiaciones ilegales del paquete accionario y de crímenes contra la humanidad.

estaba gradualmente siendo garantizado. ¿Por qué tomar una medida como supervisar los socios de *Papel Prensa SA*, aunque la necesidad de transparencia de procedimientos no era una constante en el *Proceso*? La reflexión de Sidicaro (1993) sobre esta operación se orienta en calificarla como una “presión objetiva” y con capacidad de “condicionar la opinión de *La Nación*” (pp. 408-409).

La Reforma Financiera de 1977

La Nación, a pesar de su intento de distanciarse corporativamente de los sectores empresariales, se hacía eco de sus reclamos en no pocos momentos. Apoyó por lo general la política económica del ministro Martínez de Hoz, reflexionando sobre la necesidad de que las entidades de empresarios no fueran impactadas por impuestos de emergencia, controles de precios, bien como por retenciones a las exportaciones y en lo posible, que tuvieran alivios tributarios.

En 1977, tras un año de culminado el golpe de Estado, la junta militar implementó una profunda reforma financiera en el país¹³. Según el economista Juan Santacárgelo, cuatro fueron los pilares que sostuvieron esa reforma. El primero de ellos es que a partir de aquel momento el Banco Central tendría una libre flotación de la tasa de interés y no más un estricto control sobre ese mecanismo. El segundo es que los capitales no estaban más sometidos a controles y restricciones dentro del sistema bancario y financiero, bien como los bancos tendrían autonomía para direccionar las actividades crediticias.

El tercero está relacionado a la creación de la Cuenta Regulación Monetaria, por la cual el Banco Central se utilizaba de los montos que, por ley, que las entidades financieras deberían mantener inamovibles, para que hubiera un esquema de compensaciones ante espirales inflacionarias y para equilibrar las rentabilidades de depósitos a vista y las de a plazo. El cuarto y último pilar fue la formalización del sistema de garantías, por el cual el Estado daba el aval sobre los depositantes que invertían en deudas corporativas y la tasa de interés pudiera ser fijada por el mercado.

El efecto principal de esas medidas fue fragilizar la capacidad estatal de frenar desbalances económicos, además de generar una participación sin precedentes a las entidades financieras sobre el Producto Bruto Interno, cambiar la lógica previa de acumulación de la

¹³ El corpus documental jurídico de dicha reforma está mayormente expreso por las leyes 21.495, referente a desnacionalización y descentralización de depósitos bancarios, 21.572, que crea la Regulación Monetaria, y las leyes 21.364, 21.547 y 21.571. Para una discusión más extensiva de las mismas, véase Santacárgelo (2017).

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), y ejercer un control sobre la posibilidades de éxito de políticas económicas de los gobiernos siguientes.

Junto con la Reforma Financiera, el gobierno nacional implementó un esquema que se le convino llamar *tablita cambiaria*. Ese esquema consistía en organizar los porcentajes de devaluación del peso argentino frente al dólar estadounidense al medio plazo. La propuesta fuera que esa devaluación planeada lograra reducir su grado en el tiempo y que la inflación y las tasas de interés dentro de la Argentina se equilibraran con las internacionales, de acuerdo con Azpiazu *et al* (2004: 87-88).

La *Reforma* y la *Tablita* vinieron acompañadas, además, de una gradual quita de aranceles a productos importados. En resumen, todas esas medidas estarían orientadas a lograr ese equilibrio de variables económicas internas y externas. El resultado, entretanto, fue una quiebra en serie de pequeñas y medianas empresas que no lograron sobrevivir a una tasa de interés que no paraba no subir, a una competencia exorbitante de los bienes y productos importados y a una deuda creciente en el exterior a medida que aceleraba el proceso inflacionario.

Dado este escenario, se puede pensar cuál era el posicionamiento del diario de los Mitre. Inicialmente se debe pensar que, no obstante *La Nación* pasa a alinearse con algunos de los intereses de grandes financistas internos y externos (en el recorte temporal propuesto para ese trabajo de 1989-1991), en ese momento no se puede decir que esa alianza ya estaba consolidada. Sidicaro (1993) menciona que el posicionamiento del diario frente a la situación económica fue que el gobierno no debería utilizarse del mecanismo de endeudamiento en larga escala para seguir con el proyecto del *Proceso*.

No sería durante el *Proceso* que el diario se alejaría de su propuesta de analizar los fenómenos de orden político y social por arriba los intereses sectoriales. El problema es que ese intento de alejarse se muestra cada vez más frágil e inconsistente a la medida en que nuevos grupos, aquí se menciona las entidades financieras, vienen ocupando más espacio en los procesos de decisión políticos. ¿Qué elementos ya se pueden ver acá que ayudarán a explicar el fenómeno de la crisis de enormes proporciones de 1989? No se debe olvidar que ese proceso temporal del la última dictadura también compondrá la representación que el diario va a elaborar sobre la crisis de 1989 en sus editoriales (analizados en el próximo capítulo).

Conflictividad con el régimen y el fin del *Proceso*

Pese a los enormes beneficios materiales y políticos logrados por el diario durante la última dictadura, no fueron pocos los momentos en los cuales la relación con la Junta no resultó ser la más amigable. Y acá se puede hacer algunas ponderaciones. Por el recorrido histórico que hace Ricardo Sidicaro sobre las ideas de *La Nación* que empieza en 1909, es posible notar que los mecanismos de censura y otras adversidades enfrentadas por el diario tienen una dimensión no comparable con la que él experimenta pos-1976.

Significa decir, por otro lado, que su capacidad de imponer su agenda política editorial estuvo razonablemente limitada incluso en ocasiones de muertes o persecución del terrorismo de Estado. Eso pasó en alguna medida cuando se produjo, en Argentina, el secuestro del embajador argentino en Venezuela Hidalgo Solá (miembro de la Unión Cívica Radical). El diario pasó reclamar una mayor agilidad en dirección al restablecimiento democrático, relacionando su desaparición a la exposición de la imagen de Argentina en el exterior.

Si el accionar represivo del Estado ya presentaba cuestionamientos entre sus socios, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979 va a profundizar aún más el alejamiento de *La Nación* a las políticas del régimen. El discurso de la “amenaza subversiva”, aunque todavía persistía, pasaba a estar acompañada de una ponderación de consecuencias de los “excesos de fuerza” perpetrados por la Junta y sobre la necesidad de implementar medidas concretas para el retorno constitucional.

Y es justo en ese momento que se nota algunas debilidades de los lazos del matutino con el gobierno. Es cierto decir que cuando la CIDH empieza su investigación *in loco*¹⁴, *La Nación* busca hacer un análisis de cuño histórico al explicar las condiciones sociales resultantes del *Proceso*. Al mantener la narrativa sobre la “amenaza subversiva” y sobre la legitimidad que las Fuerzas Armadas supuestamente tenían para restablecer el orden social, el diario buscaba amenizar las denuncias internacionales sufridas por la junta, incluso por funcionarios de los Estados Unidos (en aquel entonces bajo la administración de Jimmy Carter).

La coyuntura política involucraba tantas complejidades que mientras los diarios menores y los mayores que quedaron afuera de *Papel Prensa SA* denunciaban una serie de violaciones a los derechos humanos en el país (Sidicaro, 1993), como *Buenos Aires Herald*,

14 El resultado de esa investigación, a través del informe elaborado por la organización puede verse en: <http://desaparecidos.org/nuncamas/web/document/internac/cidh79/index.htm>

*La Opinión*¹⁵ y *El Día*, para citar algunos, *La Nación* opera por otra estrategia. En su caso, cada día más va a aumentar el tono de las críticas a las arbitrariedades del régimen, pero también se va a defender de las críticas que la ADEPA le hace por el negocio de la empresa papelera.

Es decir, a la vez que actúa como una voz que va más allá de los sectores en pugna y que le orienta a la dirigencia estatal sobre varios aspectos político-sociales (como la necesidad de frenar los excesos de la represión, la apertura de los canales de participación ciudadano, el restablecimiento constitucional) necesita del apoyo de la junta para protegerse de las acusaciones de los otros medios de prensa.

Concretamente, ese apoyo surge en el cambio de opiniones públicas de un específico funcionario del gobierno. Juan Alemann se desempeñaba como secretario de Hacienda (dentro del ministerio de Martínez de Hoz) y se posicionaba públicamente en contra de las ventajas arancelarias de la empresa papelera. Tras los cruces con el diario de los Mitre, y por la intervención de la junta, Alemann apoya al emprendimiento, no critica al trato preferencial que el sector paplero tenía sobre los otros en la economía y defiende al diario ante acusaciones de los otros medios.

Dichas acusaciones, es fundamental decir, tuvieron impactos internacionales, visto que la Sociedad Interamericana de Prensa hacía eco a los reclamos de ADEPA. Ello también afectó la relación de *La Nación* con el gobierno. A pesar de este le ofreció una serie de privilegios y soportes institucionales, los crecientes cuestionamientos dentro y fuera de la Argentina a la propia existencia de la dictadura.

El desgaste institucional de la junta adquiere mayor dimensión al momento del traspaso del poder presidencial al militar Roberto Viola. Su continuidad a la política de persecución a medios de prensa ya se mostraba agotada. Cuando el diario *La Prensa* perdió lugar en la distribución de la pauta de publicidad estatal, incluso *La Nación* (los dos vehículos de prensa ya hacía mucho que se atacaban por el tema de *Papel Prensa SA*) le apoyó en el reclamo contra la arbitrariedad dirigida al “cuarto poder” (Sidicaro, 1993: 453)

El matutino de los Mitre ya hacía durante la presidencia de Viola significativos llamamientos al restablecimiento constitucional y del sistema de partidos. A medida que las contradicciones entre facciones militares y las del área económica se acentuaban, la opinión pública (entendida acá principalmente como los cuestionamientos de líderes políticos y

¹⁵ La situación de este diario llega a tal punto que su director en la época, Jacobo Timmerman, es preso y torturado, además de que la junta pasa a controlar la parte de edición de dicho diario.

sindicales, representantes de organizaciones de Derechos Humanos y editorialistas), tomaba mayor presión política y propició una salida anticipada del dictador y su consecuente traspaso de poder.

El teniente general Leopoldo Galtieri surgió como la última elección de la junta para asumir al país. Los sectores militares que habían tomado el poder en 1976 ya se encontraban en un momento extremadamente delicado y buscaban sobrevivir políticamente a través de un intento de legitimación de las Fuerzas Armadas a largo plazo y su consecutiva permanencia en el gobierno. El año de 1982 pasó a registrar unos de los movimientos más ambiciosos del *Proceso*: aprovecharse del histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas para retomar el territorio a través de una guerra.

La guerra iniciada el 2 de abril de 1982 se presentaba al régimen como una apuesta efectiva para la manutención de la junta. Los apoyos a esa acción armada no se limitaron a los círculos militares. Con excepción de algunas voces, un amplio espectro de partidos políticos y organizaciones estaban a favor de la acción, a pesar de posicionamientos más complejizados que rechazaban el protagonismo de las Fuerzas Armadas en esa toma. De acuerdo con Nievas y Bonavena (2012):

“Es interesante señalar que Raúl Alfonsín fue de los pocos dirigentes políticos miembros de los partidos tradicionales que abiertamente se opuso a la invasión desde un espacio dentro de la UCR que compartía con quien luego fuera su canciller, Dante Mario Caputo, que en ese momento calificó de “estafa” a la actitud tomada por la dictadura “para quedarse en el poder”. La Multipartidaria (integrada por el Partido Justicialista, el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano, la Unión Cívica Radical y el Movimiento de Integración y Desarrollo) en cambio apoyó la acción llevada a cabo por la dictadura. Con algo más de mesura, pero en la misma dirección, se pronunciaron los Partidos Socialistas y la CGT.” (p. 15)

El resultado de esa ofensiva fue completamente desastroso, si se considera las centenas de muertos, vejaciones y humillaciones contra los que decidieron no participar de la guerra. El intento fallido de recuperar Malvinas y perpetuarse en el poder agilizó aún más el término del *Proceso* y la junta fue obligada a fijar una fecha para elecciones formales. El 30 de octubre de 1983 fue negociado el acuerdo entre los comandantes en jefe y la Multipartidaria.

Ante el derrumbe de la dictadura, *La Nación* demostró su más abierto rechazo al gobierno. Era favorable que la apertura se diera de forma más rápida posible, que los mecanismos de censura fueran prontamente eliminados y que los jueces asumieran el rol que juzgar culpables incluso entre autoridades militares. Según el diario:

“La incoherencia política e ideológica y la impotencia para la toma de decisiones concretas han sido una de las modalidades permanentes del gobierno en esos siete

años. Ello se acentuó progresivamente (...) la mayor parte de los principios y objetivos expresamente declarados por el gobierno militar surgido el 24 de marzo de 1976 no fueron probablemente asumidos como tales por la totalidad de sus miembros.” (*La Nación*, 24/3/83, p. 8, apud Sidicaro, 1993)

Sin embargo, el diario todavía se mostraría receloso sobre las investigaciones judiciales que se destinaran a juzgar los crímenes del terrorismo de Estado. Nuevamente el factor de la “amenaza subversiva” sería levantado a fin de que el accionar represivo pudiera ser comprendido como una actitud necesaria y legítima. Sería esa una de las pocas medidas que *La Nación* adoptaría para proteger a su socio militar que tanto lo privilegió.

Las elecciones se concretarían el día fijado por el gobierno con la disputa entre el candidato Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR), e Ítalo Luder, del Partido Justicialista (PJ). A pesar de no haber hecho ninguna defensa abierta por uno de los candidatos, pero considerando también la asociación que el diario hacía entre el PJ y la violencia política por parte de la guerrilla peronista, el candidato de la UCR recibió su respaldo implícito.

La redemocratización

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume formalmente la presidencia de la república. El primer mandatario se encontraba desde ya ante una serie de cuestiones de orden política, social y económica que deberían ser abordadas. El tema militar era uno de los temas más controvertidos, dadas las graves consecuencias del accionar represivo sobre el conjunto de la sociedad argentina, como las torturas, estupros y desapariciones de personas para citar algunos ejemplos.

Alfonsín presentaba públicamente su rechazo a la dictadura recién desmantelada formalmente y su compromiso con la debida investigación judicial y punición a los responsables de mayor escala jerárquica. Inicia movimientos en esta dirección a partir del quinto día de su asunción, a través del decreto 158/83 que disponía del enjuiciamiento de los representantes de las tres juntas, alegando que

“la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y los mandos orgánicos de las fuerzas armadas que se encontraban en funciones a esa fecha concibieron e instrumentaron un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales.”¹⁶

16 Decreto disponible en: <http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/document/nacional/decr158.htm>

Esta decisión fue recibida positivamente incluso por *La Nación* que apoyaba y estimulaba todas las medidas legales de este nuevo período histórico que contribuyeran a responsabilizar los perpetradores de violencia política. Para el diario, infelizmente ya no había terreno favorable para legitimar las violaciones a los derechos humanos con base a la amenaza subversiva y así socorrer a su socio de fracción militar.

Entretanto, el matutino fue uno de los que más rápidamente denunciaron la participación de la guerrilla y la necesidad de que esta fuera igualmente castigada. Aunque esta denuncia no fuera presentada formalmente como una demanda del diario, Alfonsín (lo cual abonaría ampliamente la “teoría de los dos demonios”) bajó el decreto 157/83 que versaba sobre la penalización de integrantes de guerrilla “por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público¹⁷”

Uno de los mayores problemas que atañen a la cuestión militar, entretanto, es que el juicio a las juntas estaría a cargo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Sería el sector militar quien produciría todas las investigaciones pertinentes para determinar si cabe o no punición de integrantes de las juntas que gobernaron el país exclusivamente a través de una ruptura constitucional y de una suspensión generalizada de derechos fundamentales.

Ello desató una fuerte movilización por parte de diferentes organismos de derechos humanos (como las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, Servicio Paz y Justicia, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, para citar algunos), que veían en el Consejo Supremo un seguro sobreseimiento de los militares. La socióloga Elizabeth Jelin apunta que pese a la enorme complejidad de los movimientos sociales, todos (además de reclamar una esfera civil para enjuiciar los militares) defendían la creación de una Comisión Bicameral para la elaboración de un informe sobre los hechos asociados a la represión (Jelin, 1995).

La idea de la Comisión Bicameral tenía una doble dimensión: a la vez que permitía que las investigaciones se pudieran suceder de una forma menos centralizada que en el poder ejecutivo, también permitía una mayor capacidad de presión sobre los(as) legisladores por parte de los organismos de DDHH. Acá debe salientarse el rol del Movimiento Popular Neuquino, representado por el senador Elías Sapag, y de otros partidos minoritarios, los cuales lograron establecer la Cámara Federal como ámbito de arbitraje.

17 Decreto disponible en: <http://www.historiaydoctrinadelaucr.com/2014/08/raul-alfonsin-decreto-15783-y-15883-13.html>

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue una estructura subordinada al presidente de la república y compuesta de varios referentes de las luchas por los derechos humanos (rectores, abogados, pastores, diputados, médicos) que tenía como finalidad no enjuiciar, sino indagar sobre el accionar represivo estatal y sus consecuencias, además de coleccionar informaciones y testimonios que ayudasen a elucidar el destino de miles de desaparecidos causados por el terrorismo de Estado (Crenzel, 2010)

Aunque inicialmente la idea que el poder ejecutivo estuviera centralizando esas investigaciones no judiciales no haya sonado positivo y confiable, debido principalmente a que el agente más involucrado en las perpetraciones de violencia fuera el propio Estado, el trabajo de la CONADEP agregó representantes de las agrupaciones que reclamaban memoria, verdad y justicia.

Ejemplo de esto fueron que miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y del Movimiento Ecuaménico por los Derechos Humanos compusieron la CONADEP. No significa eso decir que otros organismos no hayan participado del mismo. Varios aportaron testimonios y otras formas de contribución, a pesar de mantener en conjunto el apoyo a la reforma del Código de Justicia Militar y rechazo de que fueran las Fuerzas Armadas las responsables por enjuiciar¹⁸. La CONADEP produjo al final de sus actividades un informe muy conocido como *Nunca Más* en el cual se sistematizaba el razonamiento de la participación activa del Estado en la represión, tortura y desapariciones de personas¹⁹.

La grave crisis económica

La democracia liberal instalada a finales de 1983 mostraba amplias fragilidades políticas, sociales y económicas. La propia capacidad estatal de atender a una serie de demandas sectoriales y generales estaba debilitada también por el alto nivel de endeudamiento externo provocado por la dictadura. Conforme a Llairó y Siepe (2005) ya por el año final del *Proceso* Argentina poseía una deuda externa de un orden de 45.000 millones de dólares y una inflación de 430%.

Vale decir que, a pesar de que parte de esa deuda externa fuera del sector privado, el entonces presidente del Banco Central Domingo Cavallo (figura muy frecuente en la política

¹⁸ Para un abordaje más profundo sobre los conflictos y proyectos de las varias agrupaciones de DD.HH tanto en dictadura como en democracia, véase Jelin (1995)

¹⁹ Un acceso pormenorizado del informe está disponible en: <http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/>

económica argentina desde finales de la década de 1960 con el gobierno de Juan Carlos Onganía y que tendrá un rol más importante durante la década de 1990 como Ministro de Economía, y posteriormente también en la crisis de 2001) estatizó aproximadamente 17.000 millones de dólares, es decir un 37% de la deuda externa total, beneficiando grandes empresas que crecieron durante la dictadura vía endeudamiento y después repasaron los costos para el aparato estatal.

Como mencionamos, durante la dictadura del *Proceso* las entidades financieras adquirieron un mayor poder de presión política a través de una serie de legislaciones favorables a sí y una desregulación con amplia escala de su sector. Durante los años 1980 esas entidades pasaron a ocupar un más alto nivel internacionalmente y lograron organizar sus intereses políticos y económicos mayormente alrededor del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Los mecanismos coercitivos que esos organismos adoptaron para imponer la implementación de sus intereses fueron tan sutiles y efectivos que en diversos ámbitos (la prensa como *La Nación* incluida) pasaron a considerar el tema del pago de la deuda como condición básica, natural y fundamental para que los países afectados pudieran superar sus crisis.

Internacionalmente esa coyuntura afectó la mayor parte de Latinoamérica, coincidentemente la parte del mundo antes colonizada, seguida de frecuentes inestabilidades políticas y sociales, y en ese momento dependiente de los recursos de organismos de países que se utilizan de la asimetría financiera norte-sur global para elaborar otros instrumentos de disciplinamiento de naturaleza fuertemente neocolonial²⁰.

Ello significa decir que, aunque Alfonsín haya construido una alianza con determinados sectores sociales para gobernar (y había sido una obvia elección política), los nuevos actores políticos consolidados tanto internacionalmente como internamente durante la dictadura tuvieron un rol sustancial en el éxito de implementación de sus medidas gubernamentales. En el ámbito del ministerio de economía, Bernardo Grispun fue nombrado para hacer frente a la grave crisis heredada. Según la politóloga Julieta Pesce:

“el plan propuesto por Grinspun se estructuró alrededor de la reactivación y el desarrollo del aparato productivo, una política antimonopólica y la regulación de las importaciones. Para ello, su intención fue la de ordenar el sector externo y restablecer el equilibrio interno, desacelerando la inflación; al tiempo que se

20 Para una discusión sobre el rol de los organismos financieros internacionales en el modelo del Estado neocolonial, véase Parga (2006).

realizarían cambios estructurales para una “modernización” de la economía, con el consecuente aumento de la productividad media, -rebajando los costos de producción y redistribuyendo de manera más equitativa el excedente- a fin de alcanzar un crecimiento del producto del 5% anual.” (Pesce, 2004)

Pensar la deuda en una perspectiva histórica y cuestionar su legitimidad sería una actitud audaz. Además en el marco de las crisis de la deuda latinoamericana, Argentina buscó un diálogo con Brasil (en 1984 este país estaba todavía bajo dictadura militar con el presidente *de facto* João Figueiredo) y otros países de la región para establecerse un acuerdo en bloque y así negociar con los organismos financieros internacionales en mejores condiciones²¹.

Esos movimiento del ministro le costaría rápidamente críticas del diario *La Nación*. El matutino esperaba del Grinspun una posición menos conciliadora con los sindicatos (vistos por el diario como una corporación que imponía sus intereses sobre la democracia), menos intervencionista, que buscara un fuerte ajuste fiscal y un entendimiento con el FMI.

Pese que el ajuste fiscal es una bandera levantada por el diario hace muchísimo más tiempo (visto que, felizmente, ni todos los ingresos del Estado pueden ser aplicado en *Papel Prensa SA* o en subsidios para grandes productores rurales), ahora él cobraba un valor sobredimensionado como un elemento *inevitable* y el acuerdo con el FMI era visto como algo que produciría buenos efectos para la economía (Sidicaro, 1993: 176).

No hay que decir que el proyecto de Grispun (aunque lejos de ser revolucionario) y el de las entidades financieras no lograron puntos de conexión. Ante la reacción de los Estados Unidos, del FMI y del Banco Mundial, el ministro no tardaría a perder su cargo y Alfonsín a cambiar drásticamente su política económica y también externa.

El Plan Austral y los conflictos con el movimiento obrero

Tras el fallido enfrentamiento del bloque de los deudores latinoamericanos, Alfonsín fue obligado a nombrar otro ministro de economía. El nuevo encargado de la cartera fue Juan Vital Sourrouille y las anteriores medidas orientadas a recomponer el salario y el empleo y a auditar la deuda externa fueron puestas en un segundo plano. Su estrategia estuvo marcada por un abordaje que solventara los problemas de la alta inflación, del déficit fiscal y la deuda externa. En el marco de ese nuevo abordaje se creó el Plan Austral, por lo cual se dificultó el

21 El encuentro de ese grupo de países se materializó en el Consenso de Cartagena, realizado los días 21 y 22 de junio de 1984. Tussie (2015) produjo un estudio muy interesante al analizar los intentos de organización de los países deudores.

reajuste de salarios, se puso un techo para los precios de la canasta básica y se congeló las tarifas de los servicios públicos (es decir, un control de precios)

Ese nuevo plan estuvo respaldado inicialmente por los principales grupos acreedores que veían en él una forma de evitar futuras moratorias y un mecanismo más efectivo para apropiarse de mayor parte posible de los ingresos a Argentina. Es muy evidente el carácter selectivo la medida. Al congelarse salarios en una proporción muy inferior al de los valores de tarifas y precios industriales, eso por sí solo ya se encargaría de producir una fuerte transferencia de riqueza a los sectores más concentrados de la economía.

El diario de los Mitre respaldó al ministro Sourrouille y creía que su plan era un modo acertado de lidiar con la crisis que el país atravesaba. Consideró, sin embargo, que su propuesta de ahorro forzoso (por la cual los salarios medios y altos sufrirían una retirada parcial con garantía de devolución futura acrecida de intereses) estaba cargada de “resabios dirigistas” (Sidicaro, 1993: 487).

El apoyo inicial de *La Nación* al ministro se debió principalmente por los intentos de Raúl Alfonsín de permitir una mayor participación del sector privado en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), que posteriormente sería privatizada durante el mandato de Carlos Saúl Menem. Entretanto, no dejaría de buscar posicionarse por arriba de las pugnas entre el gobierno y los sectores opositores y rápidamente haría reservas a la posibilidad de éxito del Plan Austral.

Cabe mencionar, no obstante, que los principales gremios, mayormente nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT), obstaculizaban una serie de reformas que Alfonsín proponía desde que venció las elecciones. Cuando no había dado todavía un giro ortodoxo en su política económica, el presidente ya buscaba reformar el sindicalismo a nivel nacional. Fue entonces enviado al Congreso un proyecto de ley conocido popularmente como Ley Mucci (nombre ese por haber sido idealizada por el entonces ministro de trabajo Antonio Mucci).

El proyecto de ley buscaba garantizar el voto secreto, directo y obligatorio en las elecciones de los sindicatos. Además, el sistema representativo de la dirigencia sindical debería incluir la participación de minorías numéricas y el proceso supervisado por la cartera de trabajo. Uno de los objetivos principales era retirar parcialmente el poder de los peronistas (en ese momento quedaban formalmente en la oposición) y garantizar una postura de menos confrontación hacia el gobierno.

A pesar de su aprobación en la Cámara de Diputados, fue rechazada en el senado por 24 votos a 22 debido a fuertes presiones de sindicalistas que poseían representantes en aquel lugar. En ese mismo año, las dos CGT's que se habían separado (la CGT-Azopardo, que tenía una posición de mayor diálogo con el gobierno y la CGT-Brasil, que era más combativa) se reunificaron y el cervecero Saúl Ubaldini asumió la secretaría general.

Las leyes pro-militares y los alzamientos de los *carapintadas*

No apenas el gobierno radical sino la mayoría de la sociedad argentina sufrían a cada día más la amenaza que los militares ahora subyugados formalmente y siendo enjuiciados pudieran alzarse para recuperar el poder. El presidente Alfonsín, en un gesto que favorecía a los participantes del terrorismo de Estado sancionó el 24 de diciembre de 1986 la ley n° 23.492/86, posteriormente conocida como Ley de Punto de Final, que establecía un plazo para la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares durante el *Proceso*.

Los organismos de DD.HH, activistas políticos, sindicatos e intelectuales reaccionaron a esa decisión con masivas protestas callejeras ante una situación de evidente inimputabilidad y posible desborde institucional. Las señales de debilidad del más reciente período democrático-liberal en Argentina se demostraban con acciones jurídicas que visaban atender a los intereses de una minoría fuertemente debilitada, pero que todavía poseía un poder de presión sobre las autoridades institucionales.

La justificación de amenizar el conflicto social con las Fuerzas Armadas no tardó mucho a mostrar su falibilidad, cuando durante la Pascua de 1987 estalla un sublevamiento liderado por el Teniente Coronel Aldo Rico. La razón explicitada por el grupo estaba relacionada a los procesamientos que seguían a pesar de la Ley de Punto Final. No se debe olvidar que el 9 de diciembre de 1985, poco más de un año antes, una mayoría de los integrantes de las juntas serían sentenciados en un histórico fallo judicial.

La fuerza del sector militar mencionada no se figura exactamente en la capacidad de producir un alzamiento, sino en la respuesta de las tropas no sublevadas. En un muy interesante análisis producido por Rius y Eraso (2007):

“El Teniente Coronel Aldo Rico había manifestado su categórica negación a aceptar los llamamientos de sus superiores para que se rindiera, apostando que el gobierno no querría o no podría eliminar la rebelión. La realidad demostró que una considerable mayoría de las tropas destinadas a la represión de los facciosos se negaron a hacerlo. Las denominadas *fuerzas leales* que habían avanzado hacia

Campo de Mayo lo habían hecho de forma vacilante, negándose a abrir fuego contra los rebeldes una vez ubicados en las inmediaciones del Regimiento. El motivo de esta actitud dejaba emerger que en el fondo simpatizaban con la tesitura de los carapintadas en el sentido que era necesario poner fin a los procesamientos judiciales.” (p. 92)

Aunque en el plan liberal-democrático el hipotético asesinato de los sublevados fuera legitimado formal y abstractamente por el aparato jurídico, la realidad social contiene tantas complejidades analíticas que se deben poner de manifiesto la *real* posibilidad que los militares pudieran romper la transición liberal-democrática y restaurar el *Proceso*. La desobediencia de las tropas leales iba en ese sentido.

Dada la fuerte reacción popular en neutralizar el alzamiento golpista, a Alfonsín le quedaba dos abordajes posibles al problema: reprimir fuertemente los intentos de ruptura del orden constitucional, capitalizando políticamente el apoyo de una amplia franja de la sociedad o proveer todavía más beneficios al sector militar y desactivar la fuerza los movimientos sociales. La última opción fue la elegida y el 4 de junio de 1987 se sancionó la ley 23.521, conocida como Ley de Obediencia Debida, que disponía de la inimputabilidad de militares con rango inferior a coronel por razones de obediencia a los superiores.

El diario *La Nación* rápidamente se expresó positivamente por la decisión del gobierno, apuntando su potencial de “superar el pasado” y “aliviar las tensiones políticas” (Sidicaro, 1993: 500). El matutino convergía con otros diarios sobre la necesidad de enjuiciar los perpetradores de “excesos”, pero proponía una reflexión más densa sobre las razones de ser del *Proceso*, haciendo hincapié en la represión a la guerrilla y a la “amenaza subversiva”.

La copropietaria de *Papel Prensa SA*, aunque con su discurso de imputar a los militares, buscó la mejor forma que pudo para atenuar los mecanismos coercitivos sobre sus antiguos compañeros de alianza. El movimiento obrero no tendría la misma suerte bajo constantes ataques del diario por su supuesta imposición corporativa sobre la democracia, con sus interminables huelgas.

El plan primavera, la crisis hiperinflacionaria y el traspaso anticipado de poder

En el año 1987, tras decisiones favorables a los sectores militares²² y la negligencia a las pautas de los gremios, resultando así que el gobierno atraía la oposición de parte sustancial de los organismos de DD.HH y de los sindicatos, el presidente Alfonsín experimentó una derrota electoral de su partido en el Congreso. Cabe recordarse que en las elecciones legislativas de 1985, la Unión Cívica Radical había obtenido 43.58% de los votos y quedando con 130 bancas en la Cámara de Diputados, mientras el Partido Justicialista quedaba con 34.32% y 101 bancas.

Las legislativas de octubre de 1987, entretanto, se mostraron muy desfavorables a los intentos de Alfonsín de ampliar el apoyo político-partidario u obtener la victoria de su sucesor por el partido (considerando que en Argentina la reelección sólo va a ser permitida en 1994). Si se analizan los datos ofrecidos por Bonnet (2008:98), se puede percibir un retroceso de los votos radicales para aproximadamente 37%, logrando 108 bancas, mientras el PJ absorbe parte de estos votos, subiendo para aproximadamente 41% y 118 bancas. A pesar de sí haber otros partidos con representación en el Congreso, los dos mencionados en ese momento son los más decisivos en términos de aprobación de leyes y enmiendas.

El dominio justicialista en el Congreso vendría en un momento que el Plan Austral ya demostraba señales de agotamiento por distintos motivos. Aruguete (2015:117) apunta que los descendientes precios promedios de las exportaciones y los crecientes niveles de importaciones causaron una pérdida del superávit primario significativa, pasando de 2.300 millones de dólares para poco más de 250 millones. Las pujas con los sindicatos que iban más allá de recomposiciones salarios también fragilizaron el Plan, bien como el incumplimiento por parte de los empresarios de los congelamientos propuesto por el gobierno, visto que aquellos pasaron a remarcar los precios de los productos.

El derrumbe del Plan Austral fue acompañado por la creación del Plan Primavera en agosto de 1988. El austral como moneda se mantuvo, bien como el favorecimiento de los grandes grupos económicos, por su carácter netamente liberal. Nuevamente, Aruguete (2015) sostiene que:

“Las principales medidas del programa fueron reducir el gasto público, abastecer de dólares la plaza financiera —mediante un régimen de paridades financieras con un

22 No se tiene como propósito menospreciar la conquista histórica que fue el juicio a las juntas, fenómeno que los otros países del cono sur no lograron con la misma dimensión que el caso argentino. Es esencial, por otro lado, desacralizar cualquier mito que pueda asociar la figura del presidente con el juicio a las juntas. La demanda de enjuiciamiento de los militares fue hace mucho defendida por movimiento como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y su resultado no puede ser entendido como un logro unipersonal. Las concesiones a los perpetradores del terrorismo de Estado, a través de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida tuvieron un grado de retroceso social no posible de ser ignorado.

tipo de cambio comercial y uno libre— y dejar que la tasa de interés se fije por el libre juego de la oferta y la demanda. Paralelamente, se redujeron aranceles facilitando la importación de productos extranjeros y se alentó el ingreso de divisas mediante altas tasas de interés. La especulación financiera surgida de estas facilidades, el alza incontrolada de las tasas de interés, la devaluación del Austral y el agotamiento de las reservas hicieron fracasar el plan.” (p. 118)

El Plan Primavera ya desde sus inicios no logró enfrentar la grave crisis social y económica que afligía el país. Desde el tope de los mayores beneficiados por las medidas económicas de la redemocratización, se produjo un choque de intereses entre los grandes grupos económicos del país y los acreedores externos. Cada cual buscaba obtener la mayor cantidad de dólares e influenciar la política económica en favor de sus ganancias extraordinarias. El poder de los grandes grupos internos logró imponerse, forzando al gobierno a suspender el pago de la deuda externa.

Obviamente los acreedores no fueron los grandes perdedores de la moratoria. Ya hacía mucho que las condiciones de vida en Argentina se estaban deteriorando para la mayor parte de la población y ante la falta de recursos financieros que venía por medio de los préstamos de los organismos multilaterales de crédito (en especial los mencionados FMI y Banco Mundial), Alfonsín eligió producir una devaluación de la moneda que, dada la fuerte dolarización de la economía argentina, produjo una pérdida total de referencias de precios y salarios que desembocó en un caos social de enormes dimensiones.

Según datos de Ortiz y Schorr (2006) para el año 1989 los desempleados y subocupados ya representaban juntos el 15,7% de la población económicamente activa y los salarios alcanzaban cada vez menos las necesidades básicas de la vida, corroídos por la violenta hiperinflación. La participación de los(as) asalariados(as) en el PBI pasó de 45% en 1974, antes del golpe cívico-militar, para 24% en 1989. El nivel de pobreza en la Gran Buenos Aires alcanzó en este año 47,3% y el de indigencia 16,5% en ese mismo año.

Ya no había preceptos morales y/o religiosos que frenaran las consecuencias de tan desalentadoras estadísticas. El hambre produjo masivos saqueos que estallaron en mayo de 1989, que totalizaron alrededor de 329 en apenas 9 días (Aruguete, 2015:119). Dentro las decisiones disponibles al gobierno en ese entonces se eligió decretar un estado de sitio y emplear las fuerzas de seguridad para prender y/o quizás matar a las personas desesperadas para comer.

La consecuencia social de esa decisión fue un total de 1852 personas detenidas, 174 heridas y 19 muertas (Aruguete, 2015:119). Por otro lado los sectores agropecuarios y los

conglomerados económicos se vieron favorecidos tanto por la intensa transferencia de ingresos propiciada por la hiperinflación como por los planes cortoplacistas de carácter liberal, como el *Austral* y el *Primavera* que garantizó el pago de la deuda para los acreedores externos. No obstante, el desborde social no fue suficiente para los sectores beneficiados y ellos requerirían todavía profundas reformas estructurales.

Fracasando en atender plenamente las demandas de esa compleja alianza entre conglomerados económicos y militares sublevados, y de enfrentar la intensa movilización gremial y de colectivos en defensa de los DD.HH, Alfonsín es obligado a entregar el mando presidencial de forma anticipada al candidato ganador de las elecciones anticipadas al 14 de mayo de 1989²³, Carlos Saúl Menem del Partido Justicialista.

²³ Cabe destacar que la elección presidencial que eligió Alfonsín ocurrió en octubre de 1983. Formalmente la de 1989 debería ocurrir también en este mes. Dada la inestabilidad política y social, la entrega se dio el 8 de julio.

Capítulo II- El diario La Nación durante el ascenso menemista

El capítulo anterior nos permitió comprender el contexto de emergencia de los discursos dominantes sobre las graves crisis económicas y sociales y su forma de abordarlas. Cabe enfatizar que el período abordado en dicho capítulo la participación del diario *La Nación* estuvo marcada por su compleja participación en la última dictadura cívico-militar, así como por sus balances sobre la profunda inestabilidad política ocurrida durante la redemocratización y su alineamiento a los grandes grupos económicos (en especial el financiero y el agropecuario).

Este capítulo, por su parte, tiene como objetivo comprender determinados mecanismos discursivos utilizados por el matutino. Estos mecanismos están relacionados con los *usos políticos del pasado* que *La Nación* hace para legitimar la construcción de una “hegemonía menemista”, siguiendo un concepto trabajado por Bonnet (2008). Para ello, se buscará analizar tres ejes principales.

El primero de ellos se centrará en un análisis sobre las elaboraciones discursivas del diario sobre el pasado argentino, que buscaron comprender el presente estado de cosas en el país en el ámbito político y socioeconómico. Producir este análisis contribuirá para percibir a partir de cuáles condicionantes *La Nación* identificará los actuales sujetos sociohistóricos en pugna.

El segundo eje procurará discutir la forma como el diario observa las demandas del movimiento sindical y sus consecuentes acciones políticas, bien como las del movimiento de derechos humanos que entrará en una nueva fase de sus reclamos en contra de los activos participantes del terrorismo de Estado, en especial las juntas militares.

Ya el tercer eje está vinculado a la relación establecida con las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Carlos Menem. Dentro de esta aproximación se inserta construcción discursiva de un acercamiento a Brasil, a través de la integración regional, aunque este acercamiento estuviera limitado a esferas comerciales y de proyecciones políticas subordinadas a los intereses de grandes grupos económicos locales e internacionales, bien como de los Estados Unidos.

La asunción anticipada del *peronismo renovador*

Asumía en julio de 1989 un presidente que venía de un sector dentro del Partido Justicialista que se autodenominaba *La Renovación Peronista*²⁴, creado cuatro años antes. En una forma de contraponerse a la inesperada victoria electoral de la UCR en las elecciones presidenciales de 1983, esta corriente buscó resignificar el rol del peronismo en este nuevo período histórico tanto en Argentina como en el mundo.

Considerando, entretanto, que el mundo experimentaba un cambio de paradigma que ponía de manifiesto los intereses neocoloniales de países centrales y de sus organizaciones multilaterales, como el FMI y el Banco Mundial, en la práctica la asunción de Carlos Menem (como miembro de la *Renovación*) tendría como consecuencia la estructuración de lo que Fair (2016) denomina “peronismo neoliberal”.

La postura inicial de *La Nación* frente a la asunción presidencial fue ponderada. El matutino lamentó que el traspaso del poder haya ocurrido en un contexto de emergencia, pero le complacía que los disturbios consecuentes a la hiperinflación de 1989 no hayan roto el orden social y la legalidad democrática. Entretanto aseveraba que

“El más pequeño síntoma de retorno a criterios hegemónicos o autoritarios alarmaría a la población y resucitaría viejos recelos. [...] En el seno de este multifacético partido [hablaba acá sobre el PJ] conviven tendencias ideológicas dispares, criterios realistas y actualizados –como los que parece encarnar en primer término el presidente Menem– y otros, nostálgicos de formas y procedimientos en los planos educativos, sociales y sindicales absolutamente contradictorios con el orden democrático.” (08/07/89)

No sorprendentemente, el matutino se alejaba completamente de su involucramiento con el Estado en su momento más represivo de la Argentina contemporánea. A la vez que miraba reticente a una nueva suba del PJ al poder, intentaba caracterizar Menem como parte de una vertiente más conciliable con la democracia constitucional y con el respeto a las instituciones republicanas.

Las tradicionales recomendaciones políticas, o exigencias, del diario a los flamantes gobiernos de turno no fueron la excepción con Menem. Esta vez, entretanto, se enmarcaría una nueva etapa en la historia del país en el sentido de que nuevas fuerzas sociales externas (en especial los organismos multilaterales de crédito) emergerían y que la configuración de la crisis económica impregnaría las interpretaciones hegemónicas de la realidad social. Cuanto a eso se puede entrever en el primer día de la nueva presidencia:

“En el orden social y económico nadie, absolutamente, podrá lograr resultados favorables sin un largo proceso previo de ajustes severos en las finanzas públicas y

24 La carta fundacional de esta corriente política se puede acceder en línea: https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=1fae0e94-57f8-4e1d-bb81-d407e1470eb6

de sacrificios generalizados de la población. A este respecto, decir la verdad desnuda es el mejor procedimiento. Conviene evitar las consignas demagógicas y facilistas que suelen usarse como paliativos o disimulos y terminan atrapando a los gobernantes en su propia retórica.” (08/07/89)

En otras palabras: no había salida posible que no pasara por atender a una serie de demandas históricamente condicionadas de clases dominantes dentro y fuera del país que inherentemente impondrían severos costos políticos y sociales sobre la mayoría de la población. El discurso de la inevitabilidad del ajuste financiero también se complementaba con el del nuevo momento que la Argentina vivía, es decir, de terminar su “aislamiento” del mundo y de la superación de teorías desactualizadas que habían gobernado el país.

El pasado es una dimensión muy abordada en ese primer momento por *La Nación*, por reconocer en la figura de Menem un resquicio de la presunta inestabilidad del país por su membresía con el PJ. La construcción de ese vínculo formaba parte de una estrategia a más largo plazo de viabilizar las reformas estructurales. En otras palabras, significaba poner la cuestión en un esquema razonablemente simplificado dónde retomar las consignas históricas del partido gobernante sería una señal de retorno a la inestabilidad y de incompatibilidad con el “nuevo momento” que atravesaba el país y el mundo pos-1989²⁵.

Por eso, esa restricción del campo de posibilidades políticas tendría los usos políticos del pasado como uno de sus soportes simbólicos. En un editorial intitulado “La lección de los tiempos difíciles”, por el cual *La Nación* busca hacer una retrospectiva de la dirigencia política, se reflexionaba:

“[...] el dolor, el asombro y el descontento de muchos argentinos responden a la caída de una serie de máscaras que encubrieron la verdad durante décadas, con breves intervalos de buenas intenciones. El descubrimiento de falacias económico-políticas en que hemos vivido puede generar penas injustas y hasta gratuitas. Mas darse cuenta de los errores cometidos, salir -en fin- de los engaños de tanto tiempo, posee un valor moral y puede alentar conductas maduras y mejor ceñidas a la realidad. [...] Un comportamiento austero, ordenado con respecto al presupuesto familiar, sin atender las voces de aquellos dirigentes que hablen de salidas regaladas, será siempre beneficioso. Sólo el trabajo, la sinceridad en los mensajes, la honestidad en los procedimientos y el espíritu de sacrificio permiten a los pueblos alcanzar éxitos permanentes.” (21/08/89)

Si las reformas estructurales que pronto serían impulsadas tenían a primera vista un carácter eminentemente económico ¿cuál sería la importancia de promover un debate de cuño más bien moralizador y despolitizador? Pensar en esa cuestión ofrecerá la oportunidad de

25 La referencia al año de 1989 se basa en los hechos experimentados en los países centrales, en especial el desmantelamiento de la Unión Socialista de las Repúblicas Soviéticas y la consecuente caída del muro de Berlín. Ese período fue marcado por el fin del sistema bipolar que antagonizaban Estados Unidos y la URSS en dos proyectos a escala mundial, sobreponiendo el del primero sobre la mayor parte del planeta (y Argentina no sería una excepción). Un estudio muy interesante que aborda el papel de la historia como disciplina pos-1989 se puede encontrar en Fontana (1998).

entrever en este ascenso neoliberal, el cual está históricamente condicionado y localizado, un cambio más profundo en el paradigma que intentaría reordenar la dinámica social en Argentina.

De esa forma, la relación pasado-presente se establece como indispensable al diario para abordar la supuesta necesidad de las reformas estructurales o neoliberales. Esas reformas en el caso argentino girarían inicialmente alrededor de dos proyectos de amplio impacto social: las leyes de Reforma del Estado (nº 23.696) y de Emergencia Económica (23.697). Cuando se produjo la aprobación de la primera de ellas, el diario publicó un editorial con el título análogo a la ley en cuestión, elogiando la iniciativa oficialista y resaltando las “aspiraciones notorias de la comunidad” que estarían siendo recogidas por tal sanción (24/08/89).

El matutino aprovechó, entretanto, para apuntar las restricciones en materia de privatizaciones de empresas. Recordó el dicho del presidente Menem de que “todo es privatizable” y lamentó las excepciones hechas, citando el Boletín Oficial. Consideró, a pesar de las salvaguardas, un “vuelco fundamental” y “un punto de inflexión en una tendencia de varias décadas hacia la hipertrofia del sector público” (24/08/89).

Los bonos sociales

Las formas de aliviar las consecuencias sociales de las reformas estructurales (algo que no es contradictorio a las políticas neoliberales, sino que involucra su propia supervivencia) se evidenció por la reanudación del Programa Alimentario Nacional (PAN), creado en 1984 durante la gestión de Raúl Alfonsín, y por el lanzamiento del Bono Nacional de Emergencia²⁶. Aunque fueran estructurados de formas distintas, ambos buscaban atenuar los niveles de hambruna y de deficiencia alimentaria²⁷.

La Nación reconocía que habría casos en que tales “ayudas excepcionales” podrían aliviar “carencias insoslayables”, pero que “el riesgo -la experiencia lo demuestra- es que se

26 Ambos programas pueden ser accedidos en línea en: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/1192/norma.htm> y en <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28150/norma.htm>, respectivamente.

27 Estos programas se insertaban en una lógica más amplia de la periferia global. Las organizaciones multilaterales de crédito, es decir, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, impulsaban un abordaje para la pauperización de la clase trabajadora de forma a atenuar los efectos sociales de las medidas de ajuste económico, sin cuestionar nunca el propio sistema capitalista. El modo principal de sostener este abordaje sería en direccionar recursos financieros para focos de mayor índice de pobreza. Para un estudio sobre como el peronismo utilizó ese mecanismo, véase Levitsky (2005).

transformen en modalidades permanentes o se institucionalicen como una política de fondo.” Resaltó, además, que “el ideal es que la mayoría de la sociedad esté en condiciones de satisfacer las necesidades básicas propias [...] sin depender de arbitrios que, en última instancia, afectan la dignidad de la persona y contradicen las aspiraciones al desarrollo común e individual.” (20/08/89)

La forma cómo los bonos serían distribuidos también fue motivo de críticas del diario. Visto que los sindicatos manejaban recursos que serían distribuidos para los que necesitaban de los bonos, pronto se los acusaría de no proceder a prestaciones de cuentas apropiadas. *La Nación* aprovechó una vez más afirmar para que sólo la creación de fuentes y la reducción del gasto estatal generaría riqueza y que “si, hasta tanto se alcanzan esos fines, resulta indispensable colaborar con sectores transitoriamente necesitados de ayuda, al menos deberá procederse con criterios más elevados y con procedimientos más eficaces.” (08/02/90)

Poniendo en números: según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la República Argentina (INDEC), la tasa de desempleo entre la Población Económicamente Activa (PEA) estaba ubicada entre un 7,6% y 7,7% en el año 1990, cifra alarmante si se considera que en 1983 (año de la apertura democrática) esa tasa estaba en 4,7%. Aquellos(as) considerados pobres²⁸ pasaron de 1,9 millones en 1983 para 4,5 millones en 1990 (Palomino, 2003).

Estas estadísticas, que reflejan un contexto concreto de personas que pasaron por necesidades básicas reales, presentan una realidad social dramática. El mantenimiento y ampliación de los bonos no pueden ser entendidos simplemente como un alivio a la “pobreza”, sino como un mecanismo necesario para el sostenimiento del sistema político y económico que pretendía cristalizar estas asimetrías sociales. Es de notar que sólo en el mes de febrero de 1990, *La Nación* había dedicado dos editoriales para tratar sobre el tema de los bonos, uno de ellos citado anteriormente (08/02/90).

En el otro de estos editoriales, titulado “la entrega de los bonos solidarios”, el matutino no niega que la demanda por los bonos haya aumentado, además de que admite que los incrementos de su valor monetario no es suficiente para cubrir necesidades básicas. Sin

28 El uso del término “pobre” o “pobreza”, aunque de uso corriente y clasificando a aquellos(as) que no disponen de recursos financieros suficiente para cubrir una canasta básica total (siempre variable en el tiempo), denota una problemática surgida con la despolitización del sistema de exploración capitalista promovida principalmente por el enfoque de los organismos multilaterales de crédito, pero también por las propias ciencias sociales. Para un estudio más desarrollado sobre esta cuestión, véase Merklen (2005).

embargo, el aumento de la demanda es interpretado por otra vía, es decir, por una presunta malversación de los fondos manejados por la CGT. Para el diario:

“[...] el hecho de que la repartición [de los bonos] se hiciera de esa forma [manejo de los fondos por la CGT] provocó un crecimiento descontrolado de la afluencia de solicitantes y no existió mecanismo alguno que permitiera establecer una relativa paridad entre la cantidad de bonos disponibles y el número de beneficiarios potenciales. Ello determinó que los medios de ayuda se agotaran cuando todavía quedaban muchos aspirantes a obtenerlos.” (02/02/90)

Lo que es relevante de considerarse no es si hubo o no esquema de corrupción (acá no se niega esta posibilidad). Lo que resulta fundamental, entretanto, es la estrategia enunciativa para abordar el problema de la insuficiencia de bonos. Un nivel de “pobreza” que se había incrementado en casi 137% entre 1983 y 1990, acompañado por diversos planes económicos que transfería haberes de la mayor parte de la población para el pago de intereses de deuda externa y para beneficiar a los grandes grupos económicos en el país, no eran motivos adecuados para el diario explicar porque habían más necesitados que bonos. Por el contrario, le sería más conveniente concentrarse en presuntos casos de malversación por parte de la central obrera.

Teniendo en mente que el abordaje del problema social por parte del diario y del gobierno de Menem muchas veces no ha confluído, y que el primero recibía una presión institucional y de la opinión pública considerablemente más reducida que el último, se puede entrever cómo este ha ignorado las consecuencias de la hiperinflación que hacía solamente pocos meses había llegado a amplios sectores de la población a participar de los saqueos. Interpretar ese análisis sólo a través de la histórica defensa del matutino a las clases altas contribuye, pero no permite entrever una serie de cuestiones que estaban en juego en ese momento.

Reforma laboral

Un reclamo que seguramente unificó diversos sectores patronales (sea la agroindustria, la industria pesada, las entidades financieras y el propio diario *La Nación*, que participaba en un oligopolio de prensa) fue la reforma laboral. Dicha reforma sería implementada en la Argentina dos años después, a través de la ley n° 24.013 de 1991, conocida como Ley Nacional de Empleo.

A pesar de estar la sanción de la ley fuera del recorte temporal propuesto en este trabajo, lo importante a destacarse sobre el papel del diario de los Mitre en el avance de la

reforma laboral está fuertemente relacionada con la necesidad de los grandes grupos económicos de debilitar el poder de presión de los sindicatos. Hay que recordar que durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la CGT ya había organizado 13 paros generales, siendo 4 solamente en el año 1987.

Dentro del gobierno menemista y de los grandes grupos (incluido *La Nación*) cabría pensar: ¿Cómo se desarticularía un movimiento sindical que, pese a la profunda reestructuración económica y social impulsada por la última dictadura, mantenía una considerable capacidad de negociación? Y más: ¿Cómo superar el dilema de que el gobierno peronista de Menem se sostuviera debilitando una de las bases más expresivas de ese movimiento histórico, que fue la rama sindical?

Una de las formas de responder parcialmente a esas cuestiones puede encontrarse en la aproximación que *La Nación* estableció con el gobierno, pese a las retóricas en contra de las prácticas de carácter “dirigistas” y/o “autoritarias” del PJ, palabras tan empleadas por el matutino. Eso no sería un ejercicio tan novedoso si consideramos la historia contemporánea del diario²⁹. En sus editoriales se configuraría un proceso de legitimación discursiva que abarcaría también el tema laboral. En uno de ellos, titulado “flexibilidad de la política laboral”, se encontraba la siguiente argumentación:

“En última instancia, de poco valen las leyes llamadas “sociales” o las pretensiones proteccionistas más entusiastas si lo que no existe -o apenas existe- es la posibilidad de encontrar trabajo. El sentido común indica que el camino sensato sería multiplicar, primero, las fuentes de trabajo y el engrandecimiento empresario para mejorar las condiciones laborales, incluyendo las remuneraciones, y sólo después preocuparse -si fuere necesario- por la vigencia de aquellas leyes sociales y proteccionistas. Pero insistir en el camino inverso contraría la lógica y provoca resultados contraproducentes: sin fuentes de trabajo estables, prósperas y en expansión no hay empleos ni, por lo tanto, nada que proteger socialmente.”
(07/09/89)

Ese razonamiento, que en los días actuales ha adquirido más fuerza, ya estaba siendo puesto a prueba en la consolidación neoliberal que experimentaba el país. El uso del término “sentido común”, utilizado en la cita, para caracterizar una visión de que el acceso al trabajo muchas veces puede ser limitado por la adquisición de derechos laborales básicos abre importantes vías de análisis si se busca comprender como el discurso neoliberal adoptado por *La Nación* aborda bien una *naturalización de las políticas sociales excluyentes* (Ferraro, 2005).

29 En Díaz (2007), ya se presenta un panorama de radicalización de las izquierdas en la Argentina a inicios de los años 70 que puede en alguna medida explicar la inserción del diario en el Gran Acuerdo Nacional (GAN) ante la posibilidad real de un desborde social que pondría en jaque no solamente a la anterior autodenominada Revolución Argentina, sino la propia existencia del sistema político, económico y social como un todo.

Esa naturalización adquirió un peso más significativo durante los años 80 en los países centrales (entre ellos más emblemáticamente con los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y los de Margaret Thatcher en Reino Unido) con el neoconservadurismo. En los países del cono sur, entretanto, esa ofensiva de una amplia alianza de sectores empresarios, militares y eclesiásticos ya había empezado en 1964 (en Brasil). Uno de los impactos de dicha ofensiva fue esta *naturalización* discursiva de las políticas neoliberales que acá se abordan.

Al igual que la ley de Reforma del Estado, aprobada en agosto de 1989, la ley de emergencia económica ponía a los(as) trabajadores(as) en una situación de grave desventaja al producir profundos cambios en materia de subsidios estatales, regímenes laborales e incluso derechos básicos adquiridos. Entretanto, *La Nación* buscaba atenuar las críticas al decir:

“Quienes han cuestionado el proyecto convertido en ley señalan -no sin alguna razón- que otorga atribuciones de magnitud desacostumbrada el Poder Ejecutivo. El largo texto, en casi un centenar de artículos, retacea derechos adquiridos, establece penas de prisión y produce una importante redistribución de recursos que, naturalmente, beneficia a algunos sectores con perjuicio de otros. Pero su contenido es de una amplitud tal que la aprobación parlamentaria constituye, en realidad, una especie de voto de confianza respecto de la gestión global de un gobierno que se presenta dispuesto a producir transformaciones consideradas, por la mayoría del país, ya impostergables.” (12/09/89)

Tanto la ley de Reforma del Estado como la de Emergencia Económica transferían al Poder Ejecutivo capacidades que hasta entonces eran responsabilidad exclusiva del Congreso. Se percibe, sin embargo, una especie de blindaje a prácticas que si poseyeran otra orientación política, recibiría el rótulo de “dirigista” o “autoritario”. ¿Por qué el diario abriría esta excepción?

Como argumenta en el editorial mencionado, dicha ley tanto *retacea derechos adquiridos* como *naturalmente produce una redistribución de recursos que beneficia a algunos sectores con perjuicio de otros*. La posición de *La Nación* caminaba cada vez más en legitimar esas desigualdades y si el gobierno de turno sería el medio principal para garantizar eso, sus anteriores críticas a él podrían ser atenuadas por la coyuntura.

La tónica en contra los sindicatos pasó a ser más agresiva y los términos discursivos para referirse a determinados accionares permitió entrever una aversión creciente. Para poner una situación concreta, el 3 de junio de 1990, el diario editorializaba un conflicto entre la Dirección de Recaudación Previsional y la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCONTEL, actual Correo Argentino). Lo que sucedía es que este último debía un aporte de 6000 millones de australes a la cartera laboral y ésta solicitó un embargo bancario para garantizar el pago.

Entretanto, la Dirección de Recaudación Previsional, según la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) y citada por el mismo editorial, le debía a la Encotel una cifra increíblemente mayor, de 35000 millones. Dada la incapacidad del sindicato de manejar el aparato jurídico con la misma eficacia, se decidió que lo se cancelaría la prestación de servicios a los organismos estatales que mantuvieran deudas con el correo oficial. Sobre esto, decía *La Nación*:

“Si se deja de lado que se haya concretado o no la amenaza de “cortar la prestación de servicios” selectivamente, despierta alarma que pueda siquiera pensarse en una actitud semejante, por que escapa en absoluto a la competencia sindical determinar los organismos a los que atenderá o no Encotel y sustituirse así a las legítimas autoridades de la empresa y a los directamente responsables del servicio. Las declaraciones que comentamos, inadmisibles aun como simple expresión verbal, revelan que no existe una idea clara de las atribuciones de los dirigentes gremiales que, en este caso al menos, se asignan facultades y poderes que le son totalmente ajenos.” (03 07 90)

“Parecería haberse olvidado, además, que cualquier tarea de entorpecimiento de la república, circulación y distribución e correspondencia afecta de lleno disposiciones legales y configuraría, eventualmente, actos ilícitos. Además, la amenaza formulada en esta ocasión a organismos y reparticiones oficiales podría extenderse mañana, por otros motivos, a personas o a entidades privadas.” (03 07 90)

Si se considera los aportes de Sidicaro (1993) sobre las ideas del diario, se puede percibir que este se toma casi como una misión analizar los conflictos sociales por arriba de los intereses en pugna. Aunque el diario ya haya arbitrado diversas veces contra los grupos con poco o ningún capital político, entendiéndolo acá como “reputación” que permite a determinados actores a ejercer su participación en una “arena” política (Bourdieu, 2000), el final del recorte temporal de Sidicaro es sintomático de la postura que el diario pasa asumir. A partir del recorte temporal de 1989, *La Nación* asume un más abierto alineamiento con el *peronismo renovador*, o neoliberal, y ya no busca situar a grupos de bajo capital político dentro de un conflicto, sino a descalificarlo.

Los instrumentos utilizados por el sindicato, en este ejemplo concreto de conflicto entre ellos y el gobierno, es considerado nada más que una actitud ilegal. La mera alusión a los mecanismos jurídicos sirven para cristalizar (Jessop, 2015) determinadas relaciones asimétricas en el Estado neoliberal que el menemismo representaba. Además, el modo como se construye la figura del sindicalismo, presume la construcción de una realidad que no es tal, visto que los(as) trabajadores(as) están encuadrados dentro de una “omnipotencia sindical inaceptable” (03/07/90)

El discurso de los sindicatos omnipotentes acompaña el abordaje del diario desde la redemocratización, cuando esta perspectiva incluso fue un factor de explicación de la derrota

del PJ en las elecciones de 1983. Es por esta razón que cabe pensar la instrumentalización de lo que hasta el momento se ha presentado sobre la *memoria discursiva*. Aunque el ejemplo expuesto sobre el conflicto gremial pueda parecer algo muy específico y sin mayores dimensiones, es fundamental atentarse al lenguaje empleado, visto que este en no pocos momentos hace referencia a un imaginario social sistemáticamente construido.

Movimientos de los Derechos Humanos

Además de los sindicatos, el movimiento de Derechos Humanos (representado por diversos colectivos sociales mencionados en el capítulo anterior) vendrían a sufrir un enorme revés político. Los mismos que vieron negadas sus demandas de memoria, verdad y justicia, a través de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida promovidas por Alfonsín, ahora se enfrentaban a un indulto a los militares ofrecido por el presidente peronista.

El 7 de octubre de 1989, Menem sancionó 4 decretos (Decretos 1002, 1003, 1004 y 1005) que miraban a militares que no se habían beneficiado todavía por las leyes de Alfonsín citadas anteriormente, además de a los protagonistas de las sublevaciones de 1987 y de 1988.

En un editorial publicado tres días después de la disposición de los indultos, *La Nación* preparaba un razonamiento que involucraba tanto la ya conocida narrativa del terrorismo subversivo como también un problemático análisis sobre la necesidad de superación de los conflictos del pasado. Según el diario:

“Los acontecimientos iniciados por el terrorismo de ideológicamente comprometido con la extrema izquierda -y ese carácter de haber sido el iniciador del drama desatado no puede ignorarse- y los que siguieron a raíz de una metodología represiva que no atendió como era menester principios éticos insoslayables, dejaron huellas imborrables en la memoria de los argentinos. Esa realidad no obsta a la necesidad de que, desde un punto de vista social, se busque lograr un clima de reconciliación nacional y el país se disponga a reconstruir su destino.” (10/10/89)

Y enseguida:

“En algún momento debe decirse basta a los problemas del ayer. Jurídicamente, no hay solución posible que pueda cerrar las heridas abiertas. Ningún fallo, ninguna ley, ningún decreto podrán hacerlo del todo. Estos indultos tampoco, pero pueden ser un paso sustancial en la dirección adecuada y, tal como manifestó días atrás el cardenal Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba y presidente de la Conferencia Episcopal argentina, aun admitiendo que estas medidas “no tranquilizan no excusan la consciencia de cada uno frente a las propias faltas” podrán, sin embargo, añadir, “tranquilizar el orden social”.” (10/10/89)

Estas dos citas posibilitan un ejercicio muy provechoso de lo que en la introducción de este trabajo se abordó por *framing* o teoría del encuadre. El *frame* o principio organizador, si se utiliza la definición de Reese (citado en Aruguete, 2011: 71), de este editorial está orientado a desestabilizar la perspectiva de los reclamos por DD.HH de múltiples modos. Uno de ellos es que la “guerrilla” pasa una vez más a ser el protagonista de la violencia de los años previos; y el accionar represivo estatal, a penas un apéndice de los episodios de terror.

Otro modo es que el rol de las instituciones jurídicas, siempre defendidas por el matutino en temas de su interés, en la represión de las violaciones a los DD.HH se disminuye ante un problema que no tiene más tanto que ver con una cuestión de juicio, sino de política. Como dimensiones apartadas, pues:

“Los problemas esencialmente políticos deben encontrar solución en el campo político. Trasladarlos al orden jurídico es crear nuevos problema, trastornar inútilmente ese orden -pensado y preparado para otro tipo de cuestiones- y prolongar en el tiempo el choque de las pasiones.” (10/10/89)

Si el orden jurídico estaba más bien *pensando y preparados para otro tipo de cuestiones*, como por ejemplo asegurar la legitimidad de las detenciones y muertes de las personas que desesperadamente saqueaban a los supermercados durante la hiperinflación, ¿Cuál instancia sería responsable de gestionar el *choque de pasiones*? El “juicio de la historia”, según el diario en el mismo editorial. Esta historia que asumía sus funciones pedagógicas de mostrar los errores del pasado y que también era encargada de clasificar reos e inocentes.

Por otro lado, en el modo como los organismos de DD.HH son implícitamente encuadrados se entrevé una carga de términos negativos. Los reclamos son analizados como “trabas mentales” para la ciudadanía. Para liberarse de ellas, sería necesario “sacrificar rencores, personalismos o intereses oportunistas de carácter partidario o ideológico”. (10/10/89) La preocupación del diario que hacía poco más de 10 años adquiría un poderoso paquete accionario para controlar junto con la dictadura la producción de papel prensa era de promover una paz social.

Esa paz, entretanto, vendría a través de un estímulo a resoluciones decididas desde arriba y sin cualquier discusión más abierta. A la amplia alianza de sectores sociales que representó la resistencia callejera a la dictadura y que exigía, entre otras cosas, el juicio a los perpetradores de violaciones, no pasara más que oportunistas ideológicos y rencorosos. La crisis hiperinflacionaria que había asolado al país era utilizada incluso como verdaderas trabas institucionales en contra de esos reclamos. Sobre eso, decía el diario:

“Una grave circunstancia de carácter económico y social está presente, todavía, con toda su crudeza y hace apenas un par de meses el país tuvo ocasión de conocer los riesgos concretos hasta los que se puede llegar, con una hiperinflación que en muy poco tiempo hubiera destrozado el aparato productivo y el orden social.” (10/10/89)

El hecho de poner los acontecimientos recientes dentro del tema de los indultos, posibilita ver lo que Pécheux (1999) denominó como *memoria discursiva* o inter-discurso, definido en la introducción. Los “ya dichos”, en este ejemplo, reside en los impactos discursivos que los episodios de alzamientos militares y de los masivos saqueos que amenazaban romper la cohesión social. Esos ya dichos fueron utilizados como un mecanismo discursivo de control para disciplinar cualquier posibilidad conquistas de derechos básicos.

No fue necesario que *La Nación* pusiera explícitamente las indagaciones provenientes de esos razonamientos, pero que igualmente se podría desprender: ¿Vale la pena arriesgar la escasa estabilidad institucional que hay en el país en pos de exageradas reivindicaciones que seguramente van a causar un desborde social y eliminar lo poco que se obtuvo? ¿Ya no es un momento de buscar seguir adelante, no importa cuántos daños de orden emocional, moral, de DD.HH. etc., ya que podríamos tornar las cosas mucho peores? Si los guerrilleros, los mayores responsables por violencia que se sobrevino, también están siendo indultados, ¿por qué no los hombres que han protegido la Argentina de una desintegración y que sólo han cometido algunos excesos, pero que igual, por culpa de los terroristas?

Ahora ya explícitamente, el diario recomienda “dejar atrás esos riesgos y forjar un destino de prosperidad, de paz y de progreso para el futuro inmediato y para las nuevas generaciones”, y apunta que los indultos “pueden colaborar en ese nuevo estado de ánimo social”, más allá de cualquier “imperfección formal”. (10/10/89)

El período de los alzamientos, entretanto, no se limitaría a los años 80. Vale recordar que a finales de 1990, más precisamente el 3 de diciembre de este año, un grupo de militares liderados por el coronel Mohamed Seineldín organizó la cuarta y última sublevación (hasta el presente momento) en democracia y la primera del gobierno de Menem. Tomando ilegalmente instalaciones militares, entre ellas el Regimiento de Patricios, los reclamos no diferían de los otros, es decir, se buscaba evitar posibilidades de juicio en contra de los participantes militares del *Proceso*³⁰.

30 Un estudio sobre la relación entre el gobierno de Menem y las Fuerzas Armadas su puede encontrar en Fair (2011)

La Nación había publicado un editorial un día después del alzamiento, por lo cual energizó su condena a los hechos. Entretanto, la visión del diario es que la sublevación era resultado de una acción minoritaria y que

“Las fuerzas que permanecieron leales en todo momento a la cadena de mandos jerárquicos constituyeron un frente prácticamente unánime y sin fisuras, representativo de la corriente de opinión absolutamente mayoritaria en las Fuerzas Armadas y en el ánimo de la población.” (04 12 90)

La estrategia editorial era visualizar el conflicto, lo cual podría interrumpir el proceso de redemocratización, como un movimiento aislado con la participación ínfima entre los militares. La estrategia no es sorpresiva, si se lleva en consideración su busca de promover una reconciliación nacional y evitar una mayor presión de las reivindicaciones de los organismos de DD.HH. Sorpresivo fue, entretanto, intentar abordar una “necesidad de reconciliación” en el calor del momento de un movimiento golpista por parte de las Fuerzas Armadas, como sigue:

“La cordura extendida en todos los ambientes del país prevalecerá. Quedaría como saldo positivo, aunque doloroso, la decisión oficial de actuar con rapidez y severidad poco comunes. Las vidas perdidas son, empero, irrecuperables, y los daños materiales, la zozobra de los habitantes y el desconcierto y deterioro de la imagen argentina en el exterior resultan insuperables de manera inmediata. Cicatrizar estas heridas será, en adelante, una parte más -y no de las menos importantes- de la empresa de la reconstrucción nacional.” (04 12 90)

¿El proceso de cicatrización de las heridas pasaría por considerar *severa* la actitud de reprimir a un grupo que, por su función, tenía un asimétrico poder de destrucción si se compara con la mayoría civil? ¿O sería ese proceso de cicatrización logrado por medio de la negligencia en considerar el episodio del alzamiento como un hecho concreto en el cual el Estado pudiera volver a actuar a través del terrorismo?

No tardaría mucho para que Menem beneficiara a los militares utilizando los indultos presidenciales. El gobierno no esperaba siquiera que se terminara mes de la última sublevación y ya decidía decretar 6 indultos el día 29 de diciembre. El primero de ellos, decreto n° 2741, disponía de la excarcelación de nada menos que Jorge Rafael Viola y Emilio Massera. Los siguientes 5 decretos beneficiarían además al exministro de economía Martínez de Hoz (decreto n°2745) y otros condenados por crímenes de lesa humanidad y malversación de fondos públicos.

Los indultos serían la brecha perfecta para *La Nación*, visto que defender a sus ex socios de *Papel Prensa SA* le resultaba un fuerte desgaste político lo cual Menem estaba dispuesto a compartir. No pasaría más que un día para que el diario publicara un nuevo

editorial para abordar la decisión del gobierno. Más una vez el fantasma de la “violencia terrorista” compondría la narrativa para explicar el accionar represivo del Estado. Las Fuerzas Armadas entretanto asumían en su relato un papel de mucho mayor honor:

“Antes de 1976, las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el poder constitucional para enfrentar al terrorismo. La tarea se intensificó después de marzo de ese año y, si bien en la práctica, a lo largo de varios años, logró terminar con las más tenaces y orgánicas formas de la guerra desatada brutalmente por el terrorismo, las heridas resultantes tendieron un nuevo manto de dolor y de odios sobre la sociedad.” (30 12 90)

El golpe de Estado ni siquiera era nombrado como tal y, además, el diario procuró situar la “guerra” (que él denominada) en la bipolaridad política que supuestamente terminaría con el fin del bloque soviético. A partir de ahí lograba dos objetivos a la vez, es decir, contribuiría para desmovilizar los organismos que reclamaban memoria, verdad y justicia, además de asociar al neoliberalismo a una supuesta superación de los anteriores conflictos sociales.

En su narrativa, *La Nación* nuevamente ponía los crímenes de lesa humanidad en una dimensión no jurídica y los reclamos en contra de ellos en la esfera privada, como se puede entrever en las siguientes partes del mismo editorial:

“[...] el momento no es oportuno para reabrir heridas ni reanudar debates políticos, éticos y jurídicos. La historia, desde los tiempos más remotos y en todas las grandes civilizaciones, revela la necesidad de decir *basta*, en determinado instante, a problemas como los señalados [los problemas se refieren a los actos de represión, tortura, desapariciones y la actividad guerrillera]. No hay sociedad que pueda proseguir viviendo si los odios del ayer y los debates sobre el pasado continúan operando en el presente, trabando su desenvolvimiento en todos los órdenes.” (30 12 90)

“Una realidad está impuesta: hombres, gobiernos, países, miran hacia el futuro. El pasado se refugia- como corresponde- en los textos de historia y allí vivirá, fecundamente, pero no paralizante. Es la tarea que tenemos por delante los argentinos. El pasado no desaparece, no se ignora, y en la intimidad de cada ser humano alcanza una dimensión propia e irrepetible. Construirlo sin dejar que el ayer nos ate de pies y manos es la obra común que espera a la Argentina en la etapa que se cierra con los indultos y se debe abrir sin trabazones mentales.” (30 12 90)

En líneas generales, en el recorte temporal propuesto, la inserción discursiva del diario en la cuestión militar y de los derechos humanos visa principalmente utilizarse de los mecanismos jurídicos e inscriptos dentro de la legalidad democrática para defender la ausencia o suavización de penas contra los militares golpistas, practicantes de torturas y de desapariciones. Para que esta defensa no fuera asimilada como tal, le resultaron importantes las sublevaciones ocurridas durante los años 80 e inicio de los 90. Estas le permitieron asociar los juicios con la amenaza del retroceso dictatorial del *Proceso*.

Los organismos de Derechos Humanos en poco o nada tuvieron sus reclamos reconocidos por *La Nación*. Estos eran vistos más bien como sentimiento de revancha y que desconsideraban la supuesta necesidad de combatirse la guerrilla subversiva. Los reclamos eran discursivamente transferidos a la esfera simbólica, es decir, en un espacio dónde el juicio se daría por la vía de opiniones y valoraciones no punibles judicialmente.

Brasil

El 22 de noviembre de 1989, exactamente una semana después de conocerse el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, por la cual se definió los candidatos Fernando Collor de Melo y Luiz Inácio Lula da Silva como oponentes, el diario *La Nación* publicó un editorial reflexionando sobre las opciones que tendrían los brasileños, bien como una valoración política de los candidatos.

“La formulación de Collor de Mello aparece como más acorde con las tendencias que ganan predominio en el mundo. Las limitaciones dogmáticas de la izquierda ortodoxa han teñido al discurso de “Lula”. Su programa, al fin y al cabo, reconoce antecedentes próximos. A muchos brasileños les bastará con asomarse al balcón limítrofe que da al Perú para comprobar las consecuencias de las esquematizaciones dirigistas y estatizantes³¹. Las reservas promovidas por la radicalización que distingue al antiguo líder sindical paulista podrían llegar a ser su peor adversario, en el momento en que los electores decidan su voto en la segunda vuelta.” (22 11 89)

Así como en la Argentina, el diario de los Mitre buscaba situar las elecciones en Brasil en un marco de cambio político, económico y social. La caída del muro de Berlín, que había ocurrido hacía menos de dos semanas del mencionado editorial, era señalada como un momento de renovación en la vida política mundial, a pesar de que se debe enfatizar acá de que estos países serían los occidentales y que la renovación política sería el ascenso del neoliberalismo. Por esta razón, el diario mostraba un apoyo poco implícito para el candidato de la derecha, Fernando Collor.

Si se considera que las propuestas del candidato Collor que fueron seleccionadas por el diario eran las de “revalorizar las tasas de los servicios públicos” y “reducir el gasto público” y que, al mencionar las propuestas del candidato Lula (que en aquel entonces impulsaba una agenda de izquierda), se enfatizó “cesación de pagos” de la deuda externa y la “reforma agraria”, resulta revelador el lenguaje utilizado para referirse a los riesgos involucrados dependiendo de cuál sería decisión los votantes en Brasil.

31 Acá se hace referencia a la presidencia de Alan García, del partido centroizquierdista Alianza Popular Revolucionaria Americana. Su gestión se caracterizó por una violenta hiperinflación y una fuerte represión a los campesinos y figuras sociales encuadradas en la subversión, además de intentos de estatizar la banca. Una narrativa más abarcadora de este período en Perú se puede encontrar en Reyna (2000).

“De cualquier manera, y sea quien fuere, el triunfador habrá de asumir una labor comprometida; deberá conciliar las paradojas de un país en que conviven detalles propios de un progreso singular y situaciones extremas de falta de recursos. Desequilibrios profundos cuya solución demandará capacidad y realismo, so pena de poner en peligro a la democracia incipiente.” (22/11/89)

Como se verá en el capítulo siguiente, la dictadura que se instaló en Brasil en 1964 fue resultado de una ofensiva en contra de la emergencia de movimientos sociales que tenía fuertes relaciones con los partidos y/o con las agendas identificadas con la izquierda política. Dada esa realidad, ¿qué candidato podría evitar poner en peligro la democracia incipiente y cual contribuiría para ello? La aparente aceptación de *La Nación* de cualquiera fuera el resultado entrevía también ese elemento de la *memoria discursiva* de utilizarse de imaginarios sociales para condicionar la opinión pública, aunque la misma en este caso fuera de otro país.

El interés del diario por las elecciones en el país vecino fue demostrado por la publicación de un nuevo editorial cinco días después de la segunda vuelta, realizada el 17 de diciembre de 1989. Titled “El triunfo de Collor de Mello”, el texto hacía un recorrido sobre el contexto de la transición a la democracia formal en Brasil, bien como sobre los logros del candidato del *Partido da Reconstrução Nacional* en sectores antes orientados al candidato del *Partido dos Trabalhadores*.

Lo que resulta fundamental de este editorial, sin embargo, es la reproducción literal del razonamiento de los militares golpistas de Brasil para condicionar la transición a la democracia formal³². Decía el diario que “ese cercenamiento [a las libertades básicas] obedecía, según sus inspiradores, a la necesidad de preservar al país de convulsiones sociopolíticas en que la participación de elementos extremistas creaba condiciones propicias para desenlaces violentos”. (22/12/89)

El ejercicio de calificación discursiva elaborado por *La Nación* pone a los golpistas de la junta militar brasileña como “inspiradores” y que la “preservación del país”, tal vez considerando ahí el orden social, estaría legítimamente designada a los militares. El silencio, como parte constitutiva de la elaboración de una representación sobre el pasado (Pollack, 1989), hacia los que resistieron a la dictadura se manifiesta por la forma por la cual son

32 Cabe explicitar aquí que la junta militar finalizó su gobierno dictatorial en 1985, cuando se realizaron elecciones para la presidencia de la República. Estas, entretanto, fueron tuteladas por las Fuerzas Armadas y por la Constitución pos-golpe de 1967. El candidato del Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido formalmente opositor a la dictadura pero que tenía su existencia condicionada por la junta militar, Tancredo Neves vence la disputa. Visto que Neves muere por una infección generalizada, su vice José Sarney (del partido de centroderecha Frente Liberal, una disidencia del partido de la dictadura ARENA) asume el cargo en su lugar.

clasificados, o sea, como “elementos extremistas” que “participaban de convulsiones sociopolíticas”.

Aunque *La Nación* no haya dialogado con *O Estado de São Paulo* a través de los editoriales analizados en este estudio, se estableció una sustancial sintonía política y discursiva a la hora de mirar los sujetos sociales situados en contra de la narrativa hegemónica de la redemocratización. Además se percibe el intento del diario de encuadrar el ascenso del neoliberalismo, aunque no utilice este término, como un macroproceso espacial y temporal que afectaría tanto la Argentina como Brasil:

“El nuevo presidente brasileño dispone de ejemplos próximos reveladores de las dificultades implícitas en el propósito de modificar pesadas estructuras estatizantes e intervencionistas, en momentos en que el mundo propone un desafío casi universal en esa misma dirección. En definitiva, librar al Brasil de sus contradicciones y adecuarlo a las exigencias que habrán de plantearse durante el siglo próximo, cuyos umbrales ya se pisan, es la meta que deberá alcanzar Fernando Collor de Melo. Sus aciertos o sus errores trascenderán los términos del mandato y, probablemente, las fronteras brasileñas. América latina, en efecto, está en medio de una circunstancia histórica en la cual los éxitos y fracasos nacionales inciden, por fuerza, en el contexto regional.” (22/12/89)

¿De qué forma se podrían expresar los éxitos y fracasos nacionales?, ¿cuáles serían las políticas que impulsarían un efecto positivo para la región en el sentido de “librarse de sus contradicciones” como mencionado en la cita? ¿Qué exigencias estaría por venir en el viraje el siglo y como exactamente adecuarse a ellas?

En la lógica planteada por *La Nación*, Carlos Saúl Menem y Fernando Collor de Melo, serían aquellos que tendrían una especie de misión institucional de cambiar en Argentina y a Brasil, respectivamente, la estructura del Estado para propiciar una remodelación de la dinámica social orientada a los intereses de los grandes grupos económicos y financieros y de un orden unipolar, liderado por los Estados Unidos y Europa Occidental. Ese conjunto de elementos sería clasificado como “renovación”, y fuertemente respaldado por el diario al momento que Menem trataba de retirar la Argentina del Movimiento de los Países no alineados como una forma de “reubicar el tercer mundo dentro del nuevo contexto internacional.” (26 01 90).

Ocho días después de la asunción formal de Collor, el diario publicó un editorial (“La nueva presidencia del Brasil), en cual presentó dificultades de defender lo que para pocos era comprensible. El *Plano Collor I* (que será más explicado en el próximo capítulo) congeló los precios y los salarios (algo que la Argentina ya había pasado con Alfonsín), puso restricciones de retirada de efectivos en los bancos en un valor total de 80.000 millones de dólares

(aproximadamente US\$ 163.000 millones, en valores actuales), creó un impuesto sobre las grandes fortunas y sobre las ganancias de capital en la Bolsa, además de endurecer las penas para los crímenes de evasión fiscal.

A pesar de la sorpresa de los anuncios del gobierno, que también impactaron a *La Nación*, este buscó ponderar sus críticas e invocar una vez más la estrategia enunciativa de que las medidas de ajuste (aunque afectara temporariamente a los que las defendían) serían necesarias para encarar la crisis económica que también resultó en una hiperinflación en Brasil. El diario decía que:

“El desafío encarado tan frontalmente por el nuevo gobierno es una jugada de alto riesgo, aunque es difícil saber si otras alternativas eran posibles o mejores. El reto ha sido lanzado y sólo cabe esperar que, más allá de las conmociones del momento, el éxito acompañe a esta empresa en el largo plazo.” (23 03 90)

Además de que:

“El Brasil, cuyas fronteras tocan a casi todas las restantes naciones sudamericanas, y es, además, la de mayor territorio y la más poblada de ellas, tiene un destino que lo enlaza indisolublemente con el del continente. Por eso su futuro y su suerte en lo inmediato van más allá de los intereses locales y comprometen a América en su conjunto [...]” (23 03 90)

La preocupación era fundamentada, visto que el gobierno Collor ya desde su inicio reunía no sólo la oposición de las centrales obreras que lanzaron Lula, sino también de las clases altas que se veían fuertemente afectadas por los controles de capitales y que llegaría a propiciar la derroca del gobierno pasados solamente dos años de asumir. El proyecto neoliberal que *La Nación* veía de modo tan positivo y alentador necesitaba una mayor cantidad de *vuelcos* para sostenerse en la región.

Entretanto, las visitas del presidente Collor y de su ministra de economía Zélia Cardoso a Argentina abrieron un espacio aún más amplio para que el diario aprovechara políticamente la situación y reforzara su optimismo. *La Nación* había mencionado la suspensión de las sanciones comerciales que Estados Unidos mantenía contra Brasil (debidas a un no reconocimiento, por para que este, de derechos intelectuales de aquello, entre otros factores). El diario afirmaba que:

“[...] las contundentes afirmaciones de la ministra de Economía a LA NACIÓN durante su reciente estadía en nuestro país, señalan que la óptica aperturista del nuevo gobierno brasileño se apoya sobre un criterio decidido de modificar profundamente pautas de funcionamiento económico que fueron inamovibles durante años” (13/07/90)

“[...] disminuyen paulatinamente las resistencias a la apertura que históricamente han sostenido el esquema de autarquías económicas. Apertura e integración

económica entre la Argentina y Brasil aparecen hoy como una línea política cuyos beneficios pueden ser notorios en pocos años.” (13/07/90)

Sin embargo, se hace notar la ausencia de cuestionamientos acerca de la negativa del sector azucarero argentino de apoyar la liberalización inmediata en el comercio con Brasil³³. Además de tradicional e históricamente vertical, esta fracción de la agroindustria lograba sobrepasar las consecuencias negativas de la integración comercial regional y así obtener exclusivamente las ventajas económicas que tal proyecto presenta. Así la imposición de este sector en ningún momento experimenta rotulaciones negativas por parte de *La Nación*, lo que no es sorprendente.

La mayor aproximación comercial con Brasil ocurrió en el momento de la firma del Tratado de Asunción, en abril de 1991, cuando se crea el Mercosur. Buscando eliminar gradualmente las tarifas aduaneras entre Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, además de establecer una tarifa externa común, su proyecto estaba orientado a fortalecer el poder de negociación de los países miembros en el escenario internacional.

Hablando sobre la creación del bloque, *La Nación* destacaba el papel que la entonces Comunidad Económica Europea (actualmente llamada Unión Europea) cumplía en la integración de los países de esta región. Destacaba, entretanto, que el Mercosur no poseía todavía aspiraciones tan profundas como las que resultó la integración económica europea, además que tanto la Argentina como Brasil deberían solventar su grave inestabilidad económica e inflación crónica.

El matutino no mantenía una perspectiva tan alentadora sobre el Mercosur, haciendo referencia a los anteriores proyectos de integración que se habían pensado para América Latina o partes de ella y que fracasaron, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc) y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Visto que el proyecto del Mercosur desde sus inicios presentaba aspectos que beneficiaban exclusivamente a las grandes industrias y a los sectores exportadores de cada país, ¿por qué el diario se mostraba tan reticente sobre el bloque?

Una de las claves para comprender este fenómeno está relacionada a un conflicto de perspectivas entre los sectores económicos que participaban de la base de apoyo al gobierno

33 Si se considera algunos datos sobre este sector en la Argentina se puede entrever una serie de conflictos en torno a esta liberalización. Según Pérez et al (2007) la producción de azúcar en la Argentina se concentra principalmente en tres provincias. Tucumán, Salta y Jujuy. Para que se tenga una perspectiva, en 2002, en Jujuy, 95% de la producción de azúcar se situaba en porciones de tierra de más de 100 hectáreas (88,4% en porciones mayores de 500 hectáreas), y Salta lo sigue similarmente en estos datos, mientras en Tucumán, las porciones de hasta 50 hectáreas (pequeña producción) representaban casi el 30%.

Menem. Según Saraiva (2008), en la Argentina habían dos principales visiones político-económicas más influyentes sobre la cuestión de la integración. La de carácter liberal defendía que la aproximación con Brasil debía mantenerse en el ámbito económico, privilegiando a los Estados Unidos en el ámbito político.

La perspectiva heterodoxa defendía que el bloque tuviera un carácter de desarrollo industrial y concentrándose en el ámbito económico (sin recomendar necesariamente un acercamiento político a Brasil o a los Estados Unidos). Dentro de esta vertiente estaba la de los progresistas, según Saraiva (2008) que deseaban que el Mercosur fuera capaz de alcanzar cierto grado de identidad política común y fortalecer el rol de la Argentina internacionalmente. Es por ello que este grupo fue más proclive al fortalecimiento de instituciones intra bloque, como el Parlasur.

Aún de acuerdo con esta politóloga, Menem representaba el ala de los liberales políticos (económicamente ortodoxos), mientras Alfonsín se identificaba más con los heterodoxos. Considerando el mayor alineamiento de *La Nación* con el gobierno menemista y con los sectores a los que les resultaría más ventajoso la preponderancia del proyecto liberal-ortodoxo, es decir, la agropecuaria (la cual se beneficiaba con la explotación de las ventajas comparativas el desmedro de un proceso de industrialización) y las entidades financieras (que ocupaban gradualmente una mayor participación presupuestaria, a través de los pagos de intereses de deuda).

La lógica planteada por el diario era que solventar los problemas económicos que afectaban tanto a la Argentina como a Brasil eran “precondiciones para formar un mercado común” y que “ni Brasil ni la Argentina han logrado conformar el poder político y adoptar la orientación necesarios para acabar con este grave escollo” (05/03/91). Además de ignorar las otras perspectivas existentes para el bloque, se fomentaba una falsa asimetría entre los ámbitos político y económico.

Cuando el acuerdo para la creación del Mercosur ya estaba formalizado por el tratado, su editorial poseía una visión más optimista. Sin embargo situaba el acuerdo en un marco que le parecía más adecuado, es decir, como una primera etapa hacia un acercamiento político con los Estados Unidos. Para el diario:

“El éxito del Mercosur podría, [...] abrir el camino para la incorporación de otras naciones y, posteriormente, para la integración continental, de acuerdo con la Iniciativa para las Américas, propuesta por el presidente norteamericano George Bush” (17/04/91)

Además que

“[...] debería tenerse presente la necesidad de que el emprendimiento resulte orientado en forma debida hacia el exterior, es decir, hacia una mayor integración con el mundo, evitando repetir experiencias autárquicas de resultados negativos. El arancel común, entonces, debería ser bajo, estimulante de la competencia externa, a fin de constituirse en un medio útil y no en un obstáculo para armonizar los grupos regionales existentes con el multilateralismo, ya que es éste impulsor del crecimiento y del pleno empleo de los recursos productivos.” (17/04/91)

Sobre el acercamiento a Brasil, se puede decir que el diario encontró inicialmente algunos logros visto que el país ha capitalizado políticamente el efecto macro social del ascenso neoliberal en la región. La victoria de Collor de Melo era vista no sólo como necesaria al mantenimiento de la democracia formal, en su modalidad burguesa, sino como una señal de tiempos prósperos y de renovación, así como la de Menem.

Entretanto, visto que Collor de Mello había encontrado una serie de adversidades internas tanto de la oposición de izquierda, representada mayormente por el entonces diputado Lula da Silva, como por las consecuencias de las medidas económicas del gobierno, las cuales afectaron a poderosos intereses internos y externos, *La Nación* pasó gradualmente a adoptar una postura más reticente a un acercamiento político con el país vecino. Como demostrado, esto tenía relación con la pugna entre sectores socialmente privilegiados en Argentina, que oponía los proyectos de industrialización a los de liberalización de los mercados financieros, estos últimos más afines a las propuestas defendidas por el diario.

La integración promovida por el Mercosur, por esta razón, sólo trajo beneficios a una minúscula parte de la sociedad en Argentina y en Brasil, los grandes grupos que concentran los mercados de automóviles, de energía y de agropecuaria, principalmente. Los ámbitos de fortalecimiento socio laborales llegarían más tarde, aunque hasta hoy con insuficiencias legislativas. Los de ámbito político no presentaron significativos avances, dado el predominio de intereses norteamericanos en las políticas públicas durante la década de los 90.

La flexibilización de los derechos

Uno de los medios que *La Nación* se utilizó para construir la legitimación al gobierno de Menem fue el constante reclamo por la flexibilización de derechos considerados básicos en el país, como por ejemplo el derecho a la huelga. Dado el creciente desfinanciamiento de los servicios públicos, ya iniciado durante el *Proceso* y sobredimensionado después de las leyes

de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, muchos(as) trabajadores(as) realizaron reiteradas medidas de fuerza para lograr una disminución de retrocesos sociales.

El principio organizador del discurso del diario sobre las huelgas buscaba clasificar tres figuras: la del (de la) trabajador(a), la del (de la) usuario(a) de los servicios públicos y la del Estado³⁴. Aunque en los editoriales se defendiera el derecho a la huelga, los(as) trabajadores(as) no pocas veces eran acusados de limitar el derecho de otra figura, que sería el(a) usuario(a). Aunque la figura del usuario de los servicios públicos será gradualmente inserta como un componente del discurso a favor de las privatizaciones, lo problemático no es exactamente su inserción en el análisis de las huelgas.

Narrando un episodio de demandas del personal de Subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, el cual había parado de forma imprevista durante tres días, argumentaba *La Nación*:

“Más ampliamente, los afectados son quienes, mediante sus contribuciones fiscales directas o indirectas, sostienen los servicios que se les niegan por estos paros que no siempre se originan en la demanda de mejoras salariales. Generan, pues, una indignación legítima, que puede llegar a expresarse mediante reacciones a veces extemporáneas; tal es el caso de los pasajeros de los subterráneos que reclamaron la devolución del importe de los cospeles y, como no fueron atendidos, causaron destrozos en algunas estaciones. La violencia nunca es justificable, pero en estos casos tiene su explicación, por lo menos, en una causa bien concreta.” (19/01/90)

La cita, retirada de un editorial titulado “El público, único perjudicado”, por además de poner de manifiesto a abierta posición en contra de los reclamos sindicales (lo que no agregaría mucho más de lo que ya se estudió sobre las visiones políticas del diario) aborda una curiosa mirada: las consecuencias personales para los(as) usuarios(as) ocasionadas por los paros en los servicios públicos (como “pérdidas de ingresos” o “la llegada tarde a las obligaciones laborales” ambos mencionados en el mismo texto) se consideraban más desastrosas que una acción de violencia explícita por parte de los(as) usuarios(as).

Cabe preguntarse: ¿Cuál es el límite de los reclamos amparados por los derechos básicos, como la huelga? ¿Cuáles son los criterios que pueden moldear las acciones de abierta violencia como justas o legítimas? ¿Dónde se sitúa la línea que divide a los que trabajan en los sectores de los servicios públicos desfinanciados y a los que los utilizan para trabajar? ¿El

34 Por el análisis de los editoriales de este recorte temporal de 1989-1991, el entendimiento más sistematizado que el diario aportó sobre lo que él entiende por Estado puede ser encontrado en “Los intereses del Estado”, publicado el 2 de octubre de 1989, por lo cual el “Estado es parte de la sociedad que visa establecer un orden de derecho y promover el bienestar general, administración correcta de los asuntos públicos, justicia, defensa del patrimonio común y la custodia del orden y la seguridad.” (02/10/89)

tema se reduce a una relación entre contribuyentes fiscales y los que no respetan los “derechos tan o más legítimos” (19/01/90) de los primeros?

Visto que los “paros sorpresa” se presentaban como una medida frecuente y relativamente efectiva de diversos sindicatos de sectores clave, el diario produjo una estrategia discursiva, en un contexto de paro de los ferroviarios, que buscaba sistematizar tres elementos a la vez: 1) reafirmar el lugar que ocupaban los usuarios de los servicios públicos frente al conflicto, 2) revertir la lógica del conflicto gremial y 3) capitalizar políticamente el conflicto en favorecimiento al proyecto privatizador. Los tres se pueden ver enseguida:

“[...] se advierte una serie de anomalías de las que fueron víctimas casi exclusivamente los usuarios, ajenos en absoluto al problema. Más una vez se ha señalado que los paros sorpresivos constituyen una modalidad injusta y arbitraria que impide a quienes se ven afectados, sin ser parte en la cuestión, tomar medidas precautorias mínimas en salvaguardia de sus intereses y de sus derechos, tan válidos, al menos, como los que se dice defender con estas actitudes gremiales” (10/04/90)

“Los gremios respectivos harían bien en meditar, finalmente, que con medidas de este tipo, que vienen aplicando frecuente y repetidamente desde hace décadas, han colaborado de manera principal en un deterioro ya casi irreversible del sistema ferroviario. Ello es uno de los motivos por los cuales hoy es prácticamente imposible que pretendan obtener remuneraciones satisfactorias y, también, una de las causas por la cual se ha hecho casi universal el reclamo por la privatización de los servicios. En una palabra, estas actitudes gremiales han sido y son los mayores enemigos del sistema ferroviario, del personal respectivo y de los intereses del país.” (10/04/90)

Discutiendo sobre otro paro, esta vez de la Unión Tranviarios Automotores (UTA), *La Nación* adopta la misma posición, sino una más confrontante:

“Es, en definitiva, una nueva demostración de que los grupos que mandan dentro del sindicalismo consideran a todos los derechos como relativos, salvo el derecho de huelga, que es interpretado como absoluto por quienes usan la fuerza en perjuicio de la mayoría de la población. Es utilización de la fuerza contra la población y en nombre de un reclamo sectorial, porque pasa por encima de cualquier otro derecho individual, como lo es el de cada ciudadano a tener razonablemente asegurado un servicio esencial, en este caso el transporte. Hechos como éste afectan principalmente a los sectores de menores recursos. Pero también es uso de la fuerza [...] cuanto avasalla derechos ajenos.” (04 09 90)

Ahí nuevamente se realiza el intento de sobredimensionar tanto la figura de los(as) huelguistas como del ejercicio del derecho de huelga. Los sindicatos más una vez eran representados como compuestos de personas privilegiadas socialmente y que tenían el poder de imponer sus pautas para el restante de la población, esta que por su turno estaba desamparada y a merced de los poderosos sindicatos. Estas personas afectadas ya no se mostraban más que simples usuarios de servicios públicos que no tenían cualquier relación con el conflicto.

El paradigma neoliberal que se instalaba en el país (pero no solamente en él) proporcionaba un análisis por el cual se dismantelaba cualquier aspecto de identificación entre los usuarios de servicios públicos y los gremios. Es como si los primeros ya no fueran más trabajadores y que poseyeran intereses y derechos distintos de aquellos que sistemáticamente perjudicaban su cotidiano. Además que las insatisfacciones laborales, materializadas en los paros, ya no parecían eran más resultado de precarias condiciones laborales sino el contrario: las condiciones precarias eran resultado de los paros.

Además, parecería que las organizaciones gremiales serían aquellas que facilitarían la difusión del reclamo por la privatización, dado su intento de preservar presuntos privilegios corporativos y de ser contrarios a los intereses del país. Si este reclamo fuera o no realmente *universal* como infería *La Nación*, tiene poca relevancia. Lo que sí importa fue la sustancial capacidad de legitimar la “hegemonía neoconservadora” (Bonnet, 2008) en la Argentina.

Esta busca por legitimación llegó a tal punto que, mientras el país presenciaba una serie de protestas sociales (incluidos los saqueos, si se considera el carácter potencialmente político del mismo) con sus más diversas orientaciones³⁵, el diario analizaba el escenario político por la vía exclusivamente jurídica e institucional. En un editorial titulado “Las recientes manifestaciones populares”, *La Nación* reflexiona sobre el carácter general de las protestas. Al hacerlo, dijo que

“Hasta el momento, [...], en todos los casos se ha mantenido la calma, aun dentro del clima tenso que caracteriza algunas manifestaciones, sin que haya mediado intento alguno de “suplir el monopolio de la decisión que corresponde al Estado”. Lo que se ha procurado, en cambio, es que el poder público ejerza sus funciones con equidad y, fundamentalmente, que garantice la seguridad pública y preserve la tranquilidad social.” (03 12 90)

¿Cómo sería posible reducir un heterogéneo campo de reivindicaciones a una pauta más bien conservadora de las instituciones? ¿Aquellos(as) que saqueaban supermercados en este período exigían seguridad pública o esta era vista como las fuerza de represión que podría matarlos(as)? ¿Los que estaban en contra de los indultos concedidos a torturadores estaban tan confidentes que el poder público ejerciera sus funciones con equidad y estaban allí sólo para reiterar este pedido?

Consciente de que había grupos que presentaban demandas más rupturistas que “garantías de tranquilidad social”, el matutino continuaba enseguida:

35 En estas protestas sociales se puede enmarcar tanto reclamos contra los indultos (apoyados por *La Nación*) y contra la concesión del Jardín Botánico y del Zoológico, ambos de la ciudad de Buenos Aires, a la iniciativa privada como también las Marchas del Silencio, las cuales tuvieron la capacidad de generar la renuncia del entonces gobernador de Catamarca, Ramón Saadi (Partido Justicialista).

“Tal cosa no sucede cuando el desempeño de los magistrados y de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, es puesto en tela de juicio y hasta se duda de su ecuanimidad. Esta situación no es sólo el resultado de un hecho aislado sino que proviene del descrédito ocasionado por actuaciones poco claras y que, ante cualquier detonante, se manifiesta con vigor. Entonces, los mismos ciudadanos que mantenían un prudente respecto por la autoridad, asumen actitudes como las que han generado últimamente y preocupan al ministro del Interior.” (03 12 90)

Como se había mencionado en el tópico sobre el movimiento de derechos humanos, en la madrugada de este mismo día 3 de diciembre de 1990, estallaba un movimiento de militares golpistas, es decir, de dentro del poder público y de las instituciones. Aunque, por una cuestión de tiempo, no había como editorializar la sublevación militar este mismo día (lo hizo el día siguiente), llama la atención la críticas del diario a sujetos que ponían en “tela de juicio” y dudaban del desempeño de magistrados y de las fuerzas de seguridad.

¿Deberían estos sujetos que preocupaban no sólo al ministro del Interior sino al matutino mismo, entonces, creer en las autoridades que en la práctica criminalizaban la protesta social desafiadora de la “hegemonía neoconservadora” que se consolidaba, a la vez que beneficiaba a sectores que comprobadamente practicaron crímenes conocidos hoy como de lesa humanidad? ¿Las pautas de la “tranquilidad social”, “seguridad pública” no eran justamente las que demandaban la amplia alianza del gobierno menemista, de los grandes grupos económicos y financieros (incluido el diario *La Nación*, socio del Estado desde la dictadura) y de los militares?

El ejercicio de forjar en la *ciudadanía*, en tanto cuerpo abstracto, deshistorizado y destituido de proyectos políticos definidos, un entramado de reclamos que no coincidían con las prácticas de estos sujetos, se acercaba a la estrategia presidencial de Menem. Antes de que este ganara las elecciones, los intentos del candidato del peronismo en 1989 de establecer una horizontalidad discursiva entre “el peronismo”, “el pueblo”, el “movimiento” y su figura (Fair, 2013:7) se complejizaba con el surgimiento de otros elementos. De acuerdo con Fair (2013):

“Desde el plano analítico político-institucional, la discursividad menemista asumía un discurso conservador de recuperación del “orden” público y la gobernabilidad, que a partir de los indultos y las alianzas con el *establishment* anti-peronista, había permitido la “pacificación”, la “unidad” y la “reconciliación nacional”, olvidando “viejos rencores” y “enfrentamientos”. Además, incluía un discurso típicamente liberal democrático, a favor de la aceptación del “conflicto”, el “pluralismo”, la “paz” y la “libertad”, en tanto equivalentes a la “consolidación” de la “democracia”. (p. 7)

De esa forma, la discursividad del matutino no estuvo ajena a esta discursividad que lo incluía y que a la vez lo excedía. Aunque obviamente el diario no fuera un vocero de ningún

gobierno de turno, la propuesta de la “hegemonía neoconservadora” que se avecinaba y se consolidaba hizo con que *La Nación* se involucrara de tal forma que le resultaría cada vez más costoso mantener una posición crítica a Menem, que sería uno de los ejecutores del proyecto neoliberal en ascenso. No se debe olvidar que el propio Menem se posicionaba como una figura opuesta a su antecesor, Alfonsín, lo cual era asociado al “saqueo”, “caos”, “ingobernabilidad”, “decadencia” y anarquía (Fair, 2013:10)

Las contradicciones eran diversas, pero se puede decir al final que todas ellas estaban organizadas para garantizar un proyecto más amplio, que visaba tanto a promover una reestructuración económica más favorable a los sectores ligados a la agroindustria y a las entidades financieras (el ascenso neoliberal), bien como un bloqueo a las demandas de las organizaciones de los DD.HH de enjuiciar a los socios militares que beneficiaron el diario de los Mitre.

Capítulo III- *O Estado de São Paulo* entre la dictadura y la democracia (1964-1989)

El objetivo de este capítulo es de discutir las relaciones entre el diario *O Estado de São Paulo* con la dictadura cívico-militar, así como su participación en el golpe de 1964, y los intentos del diario de vincularse estratégicamente a las autoridades. Para eso, el capítulo se propone hacer una discusión sobre el carácter conflictivo de la junta militar golpista, los hechos imprevisibles que el diario experimentó durante la dictadura, además de su rol en el proceso de redemocratización que finalizaron formalmente en las elecciones presidenciales de 1989.

El golpe de Estado de 1964

En el marco de la guerra fría entre los EEUU y la URSS fue creado en Brasil la *Escola Superior de Guerra* (ESG) en 1948. Esta institución fue inspirada en su análoga francesa (École supérieure de guerre) y su filosofía, aportada principalmente por la alta burocracia administrativa y por los militares de EEUU teorizaba que en los países de la periferia global los “subversivos”³⁶ eran una amenaza interna (mientras que en los países centrales estos serían una amenaza externa que venía del leste europeo) y que sería necesario aplicar todas las herramientas afin de que las ideas socialistas y/o comunistas no resultaran en una toma del poder por parte de los “subversivos”.

Los militares que estaban en la vanguardia del golpe de 1964 en Brasil provenían mayoritariamente de este grupo más intelectualizado, conocido como “Sorbonne” (Aquino, 1999). Ellos pregonaban que la “revolución” debería tener un corta duración y ser efectiva, con el objetivo de pasar rápidamente el poder a los civiles tras el restablecimiento las instituciones democráticas. Entretanto, había una otra ala, los “línea dura”, que pensaba la “revolución” como un proceso extenso y gradual.

Esta división se hizo presente en algunos momentos, en especial cuando el presidente *de facto* Costa y Silva falleció en 1969 debido a un accidente cerebrovascular. El vice presidente, Pedro Aleixo, un civil abogado, contrario a la edición del Acto Institucional V, fue removido del poder casi automáticamente y reemplazado por una junta provisoria. El ala dura

36 Término generalmente aplicado a militantes de izquierda, pero que en la realidad sirvió como pretexto para referirse a todos(as) aquellos(as) que actuaban políticamente en contra de los presidentes de facto de las dictaduras latinoamericanas.

tenía serios problemas con la devolución del poder a los civiles, vistos por ellos como no preparados para asumir las actividades de mandatarios.

Otro ejemplo de división entre estas facciones se dio cuando los “línea dura” demandaron la multiplicación de los órganos estatales a servicio de la represión. Inicialmente el trabajo de vigilancia se dio por el *Serviço Nacional de Informações*, pero prontamente pasaron a haber otros departamentos como el *Centro de Informações do Exército* (CIE, creado en 1967) y los *Departamentos de Operações de Informações – Centros de Operações de Defesa Interna* (DOI/CODIs, creados en 1970). Para los “línea dura”, había la necesidad de utilizar toda y cualquier herramienta disponible afin de eliminar la “amenaza interna”.

***O Estado de São Paulo* ante la dictadura**

El diario *O Estado de São Paulo* participó en este conflicto cuando en 1972, por estar interesado en la elección interna de Ernest Geisel (el cuarto presidente *de facto* y alineado a los “Sorbonne”, el mismo grupo que participaba la ESG y *O Estado de São Paulo*³⁷) para presidente. El edificio del diario fue invadido por policías armados que estaban en busca de un supuesto editorial que hacía pública su preferencia (Aquino, 1999).

A pesar de que Ernesto Geisel asume la presidencia con el compromiso de promover una distensión política (ablandamiento de la censura), el gobierno aumenta todavía más la censura sobre el diario de los Mesquita. Con base en un documento formulado por el propio diario (Aquino, 1999, p. 60), 360 artículos fueron censurados entre marzo de 1973 y febrero de 1974. A partir de marzo de 1974 (cuando Geisel asume) hasta 1975, cuando termina la censura sobre el diario, 776 artículos fueron censurados (un aumento de 115,5%).

O Estado de São Paulo buscó antes del golpe cívico-militar vincularse al grupo “Sorbonne”, en especial porque esta institución era integrada exclusivamente por los miembros de la alta sociedad (no solo militares, sino también civiles de familias tradicionales de la oligarquía terrateniente y de grupos empresariales). Los propietarios del diario participaban de las reuniones del *Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais* (IPES), una asociación clasista patronal (Figueiredo, 2005).

37 Cuando se menciona *O Estado de São Paulo* se quiere decir que los representantes del diario participaban de reuniones con los representantes de la *Escola Superior de Guerra* para trazar estrategias colectivas. Por eso se sitúa el diario dentro del ala “Sorbonne”.

Dentro de la estructura del IPES, el rol de *O Estado de São Paulo* pasó a ser movilizar la opinión pública en contra de Goulart, acentuando discursivamente un ambiente caótico y buscando desestabilizar sistemáticamente al gobierno. Ya consciente del inminente golpe contra el presidente constitucional João Goulart, Júlio de Mesquita Filho (propietario del diario y hijo del fundador) publica un documento titulado “Roteiro da Revolução” en su libro “Política e Cultura”, por el cual hace un llamamiento a la oposición civil en contra del gobierno de Goulart para juntarse al movimiento “revolucionario” de los militares.

La tirada promedio de *O Estado de São Paulo* durante la última dictadura cívico-militar variaba entre 100 y 250 mil ejemplares (Motta, 2013).

“Inicialmente, es importante considerar los dilemas de la grandes medios ante el régimen autoritario, dividido entre la devoción a la libertad y el amor al orden, oscilante entre el deseo de autonomía y dependencia y los favores del Estado. Por convicción y por interés, las empresas periodísticas son favorables a la libertad de manifestación, especialmente cuando las restricciones también las afectan. Por eso, cuando el régimen militar adoptó medidas para cercenar la prensa y agredió los valores liberales tradicionales (opinión, manifestación, garantías individuales), la mayoría de los vehículos periodísticos quedó descontento” (p.67)³⁸

Entre los periódicos hegemónicos en aquel entonces (hegemonía que poco ha cambiado), *O Estado de São Paulo* fue uno de los más duros cuanto al apoyo a la represión a los dichos “subversivos”. En algunos momentos ha incluso criticado una supuesta moderación del régimen con respecto a los expurgos contra los sectores de resistencia y también con respecto a las reformas enviadas al Congreso, como el derecho al voto para los analfabetos y un intento de reforma agraria (medidas estas también defendidas por el gobierno destituido de João Goulart).

El presidente *de facto* Castelo Branco bajó en 1965 un decreto por lo cual se instituía un sistema bipartidario en Brasil. De un lado quedaba el ARENA (Alianza Renovadora Nacional) de los favorables a la dictadura. Del otro se organizaban alrededor del MDB (Movimiento Democrático Brasileño)³⁹ los sectores contrarios al golpe de 1964. Es necesario decir que en este momento el Congreso todavía gozaba de sus funciones burocráticas, aunque

38 Traducción propia del original: “De início, é importante considerar os dilemas da grande imprensa diante do regime autoritário, cindida entre a devoção à liberdade e o amor à ordem, oscilante entre o desejo de autonomia e a dependência e os favores do Estado. Por convicção e por interesse, as empresas jornalísticas são favoráveis à liberdade de manifestação, notadamente quando as restrições atingem-nas também. Por isso, quando o regime militar adotou medidas para cercear a imprensa e agrediu os valores liberais tradicionais (opinião, manifestação, garantias individuais), a maioria dos veículos jornalísticos mostrou-se descontente.”

39 Tras el proceso de redemocratización, el MDB abrió posibilidades de creación de diversos otros partidos que dominaron la política brasileña hasta finales de 2018, tales como el Partido dos Trabalhadores (PT), el Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) y el Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB, lo cual cambió nuevamente su nombre para MDB).

no tenía capacidades políticas de vetar decisiones del Ejecutivo dado el quórum siempre favorable a la ARENA.

El histórico de la crítica liberal de *O Estado de São Paulo* a la corrupción

O Estado de São Paulo veía en estas medidas represivas de la dictadura el inicio de una verdadera revolución a favor de la libertad (y de las instituciones liberales, inicialmente) y contra los subversivos y la corrupción de los gobiernos anteriores. El tema de la corrupción emergía en la medida en que las medidas del gobierno de Getúlio Vargas, que todavía reverberaban en la cultura política del país, eran asociadas a diversos sectores indeseados (en especial los sindicatos y los movimientos sociales de izquierda).⁴⁰

Hay que puntualizar que, dada la existencia de estudios académicos que buscan trazar paralelos entre los gobiernos de Vargas y Perón (Capelato, 1998, Skidmore, 1994 y Fausto, 2004), se puede pensar a priori que así como Argentina, Brasil poseía un movimiento de trabajadores con fuerte capacidad de influir fuertemente en el curso político del varguismo. Esta visión, entretanto, no se sostiene ante el sofisticado sistema de cooptación varguista hacia los sindicatos y la criminalización de los adversarios políticos dentro de la clase trabajadora.

De ese modo, aunque las demandas obreras y de los movimientos campesinos nunca dejaron de existir en mayor o menor medida, el populismo en su versión brasileña no profundizó una presencia de la clase trabajadora en el aparato estatal de la misma forma que lo hizo en Argentina con Perón (respetando obviamente los legítimos cuestionamientos que puede haber sobre si tal presencia en Argentina fuera relevante a punto de producir cambios sociales estructurales).

Pero ¿cuál es la importancia de esta digresión sobre el varguismo si lo que importa en este capítulo es tratar sobre la relación entre el diario y la dictadura militar? La razón está basada en que desde 1945 se funda en Brasil la *União Democrática Nacional* (UDN) con el propósito de hacer oposición al gobierno de Getulio Vargas y de promover el liberalismo

40 Getulio Vargas ha gobernado Brasil en dos momentos: entre 1930-1945, Vargas asumió la presidencia a través de un golpe de Estado que buscó una creciente centralización alrededor del gobierno federal. Para eso buscó inicialmente una alianza con las antiguas oligarquías rurales (las cuales habían gobernado el país desde el inicio del período republicano de 1889-1930) y gradualmente estas últimas fueron enfraquecidas políticamente, mientras el poder se concentraba en la figura de Vargas. Entre 1951-1954, Getúlio vuelve a la presidencia por vías electorales y en medio a inúmeras disputas políticas con sus adversarios (incluso un atentado) y pedidos de renuncia, Getulio se suicida en 1954.

clásico y la moralidad (según sus palabras) en Brasil. El partido tenía como sus bases principalmente las clases medias urbanas y algunos sectores de la élite (entre los cuales las antiguas oligarquías terratenientes debilitadas por Vargas).

Apesar de poseer hasta 1962, la segunda mayor cantidad de bancas en el Congreso (Nicolau, 2004), y haber gobernado principalmente en los estados de la región noreste de Brasil, la UDN nunca ha logrado elegir un presidente propio en las tres veces que ha lanzado sus candidatos directamente (sin participar de alianzas para apoyar candidatos de otro partido). Ha logrado su primera victoria dentro de una alianza de partidos con la victoria del presidente Jânio Quadros en 1960.

La UDN, principalmente por sus propuestas políticas y sus electores, tenía en sus cuadros políticos periodistas vinculados con *O Estado de São Paulo*. Tanto la UDN cuanto el diario se mantuvieron en la oposición política desde el gobierno Vargas hasta la década de 1960 mientras la UDN no ejercía una participación sobresaliente en el poder ejecutivo. Con el golpe de Estado en 1964, la UDN pasa a ser uno de los componentes claves del sector civil dentro de la dictadura. El partido ha sido uno de los partidos más favorables al régimen hasta 1965, cuando el *Ato Institucional Número 2* extinguió el sistema multipartidario, creando un fuerte influjo de ex-partidarios de la UDN hacia el ARENA (partido de la dictadura).

A pesar de esta breve puntualización, la realidad es que *O Estado de São Paulo* ya tenía previamente una visión de quienes serían los enemigos de la “revolución” (el golpe de 1964). La narrativa pues estaba organizada de forma tal que debería caracterizar los adversarios (especialmente los “subversivos”), a través de ideologías políticas que habían debilitado instituciones liberal-democráticas y que habían utilizado la violencia política para buscar la toma del poder. Así, la aniquilación de estos sería una forma legitimada por el diario para extirpar los males sociales del país y así restaurar el orden amenazado. Una revolución restauradora, así en términos contradictorios.

A pesar de su posición favorable al poder de los militares, el diario pensaba desde el inicio del golpe que la dictadura debería durar entre dos y tres años, siguiendo el modelo de las dictaduras de la República Romana (Motta, 1969), para después entregar el poder a los civiles. Los 21 años que se siguieron tras el golpe, entretanto, tardaron mucho más de lo que *O Estado de São Paulo* planeaba.

El año de 1968 y el recrudecimiento de la represión

En 1968, el gobierno del presidente *de facto* Costa e Silva ordenó la aprensión de la edición de 13 de diciembre de *O Estado de São Paulo* debido a que este había rechazado excluir un editorial titulado “Instituições em frangalhos”⁴¹ [instituciones rotas], el cual denunciaba el fin del funcionamiento democrático en el país (poco más de cuatro años tras el golpe, cabe decir). A partir de este momento, la redacción del diario pasó a contar con la supervisión de la Policía Federal.

El año de 1968 fue considerado el marco de una serie de manifestaciones sociales y culturales por gran parte del occidente, y en Brasil este año pasó a ser uno de los más convulsivos con respecto a la resistencia a la dictadura. Con la asunción de Júlio de Mesquita Neto (tercero en la línea de sucesión del diario), fueron comunes el reemplazo de contenidos censurados por el gobierno por extractos de libros como *Os Lusíadas*, de Luís de Camões, además de algunos poetas brasileños y recetas de cocina.

En este caso, el contenido de los extractos poco o nada importaban. El objetivo era justamente de crear un sentimiento en el público lector de que algo negativo estaba pasando, visto que sólo los temas políticos fueron reemplazados. Esta situación ganó bastante visibilidad internacional en aquel entonces y, a pesar de la continuidad de la dictadura, el inicio del desgaste de la junta quedaba cada vez más evidente.

La forma más sobresaliente que el régimen encontró para lidiar con la resistencia fue a través de la edición del Acto Institucional número 5 (AI-5), lo cual disponía el cierre del Congreso Nacional, la intervención unilateral sobre los estados y las municipalidades brasileños (como la posibilidad del presidente elegir los gobernadores y los intendentes), suspender los derechos políticos de cualquier ciudadano(a) y los mandatos de los(as) parlamentarios(as), suspender el derecho de circulación, y decretar el estado de sitio por tiempo indeterminado.

El AI-5 fue seguramente el golpe más duro de la dictadura, o el golpe dentro del golpe. Su edición fue el detonante para una serie de luchas armadas por parte de algunos sectores de

41 Además de denunciar tardamente la existencia de una dictadura en país, el editorial finaliza con una provocación al gobierno debido a tras un grupo de parlamentarios del partido de la dictadura votar en contra del gobierno y no autorizar que el diputado de la oposición (MDB) fuera procesado. El diario le preguntaba al gobierno del general Costa e Silva: “¿Qué resultará de un estado de cosas que tanto se asemeja al desmantelamiento total del régimen que el señor presidente de la República juzgaba lo más conveniente en contraste con aquel muy delicado y frágil archipiélago de grupos sociales los cuales usted se refería incluso ayer, cuya integridad, es vuestra excelencia el primero en reconocer, está colgada de un hilo?” Traducción propia del original: Que é que poderá resultar de um estado de coisas que tanto se assemelha ao desmantelamento total do regime que o sr. presidente da República julgava fosse o mais conveniente àquele delicadíssimo e frágil arquipélago de grupos sociais a que se referia ainda ontem, cuja integridade, é S. Exa. o primeiro a reconhecer- lo, está por um fio?

la izquierda. Este mismo año fue marcado también por una serie de atentados bomba organizados por grupos armados de izquierda con el objetivo de derrocar a los militares y su alianza con las multinacionales. La mayor parte de los ataques fueron direccionados a las instalaciones militares y a las grandes empresas, entre estas se *O Estado de São Paulo*.

Por su contribución a la caída del presidente constitucional João Goulart y al odio alimentado de militantes de extrema izquierda, el edificio d'*O Estado de São Paulo* sufrió su primer atentado bomba organizado (por lo menos en este primer momento) por estos militantes. La bomba que afectó al diario fue la más poderosa del año, alcanzando un rayo de 200 metros. De la acción, un conserje resultó herido y los periodistas casi fueron afectados.

El responsable por el ataque fue el guerrillero Pedro Lobo de Oliveira, un ex-sargento que había adoptado el socialismo y pasado a participar de la Vanguarda Popular Revolucionária (una de las organizaciones armadas de izquierda y compuesta por muchos militares disidentes del golpe de 1964). El historiador Roberto Laque (2010), que ha tenido contactos personales con él, expone el plan de Pedro y sus compañeros de lucha armada hacia el ataque al *O Estado de São Paulo*:

“Tres de la mañana del día 20 de abril. Pedro Lobo y sus compañeros de izquierda armada están listos para más un atentado. Esta vez, el blanco es la sede del periódico *O Estado de São Paulo*. Desde hace mucho tiempo, la familia Mesquita es odiada por las izquierdas. Los propietarios del centenario matutino y del *Jornal da Tarde* conspiraron contra João Goulart ya en el inicio de su gobierno y llegaron a recaudar fondos de empresarios, con el objetivo de financiar el golpe que derrocaría João Goulart. Y, para afligir los Mesquita, Pedro es uno de los elegidos. “Nosotros paramos el coche cerca de la entrada del diario, un compañero bajó y fue hasta la entrada del edificio para poner una bomba, la cual tenía seis kilos de una dinamita gelatinosa negra. A partir de ahí, el comando bajó para la Praça da Bandeira y cada uno siguió para sus casas”.⁴² (pp. 165-166)

A pesar de que otros ataques como esto fueron organizados por grupos armados de extrema izquierda, vale la pena destacar que muchos ataques fueron en realidad coordinados por grupos paramilitares de extrema derecha con la finalidad de superdimensionar la capacidad bélica de la izquierda armada y así poder legitimar las medidas represivas del gobierno contra toda y cualquier oposición a la dictadura. Esta estrategia de los paramilitares

42 Traducción propia del original: “(...) Três da manhã do dia 20 de abril. Pedro Lobo e seus companheiros da esquerda armada estão a postos para mais um atentado. Dessa vez, o alvo é a sede do jornal *O Estado de S.Paulo*. Desde muito, a família Mesquita é odiada pelas esquerdas. Os proprietários do centenário matutino e do *Jornal da Tarde* conspiraram contra João Goulart ainda no início do seu governo e chegaram a passar o chapéu entre empresários, visando financiar o golpe que derrubaria João Goulart. E, para a afronta aos Mesquita, Pedro é um dos escalados. ‘A gente parou o carro próximo à entrada do jornal, um companheiro desceu e foi lá na entrada do prédio colocar a bomba, que tinha seis quilos de uma dinamite gelatinosa preta. Dali, o comando desceu para a Praça da Bandeira e cada um seguiu para sua casa’.”

(que inició en 1967) incluso precedió a los ataques realmente realizados por la izquierda armada (a partir de 1968), por muestra testimonios de ex-agentes represores.⁴³

Más un atentado bomba

En el libro intitulado *Mémoires de uma guerra suja*, los periodistas Rogério Medeiros y Marcelo Netto (2012) reúnen una serie de testimonios de Claudio Guerra, un jefe de policía integrante de los órganos de represión de la dictadura militar y asesino confeso de varios presos políticos. El extrato más pertinente en relación al objetivo del capítulo es uno en el que Guerra explica su actuación en uno de los ataques bomba que *O Estado de São Paulo* sufrió durante la dictadura.

Los nombres Perdigão y Vieira que siguen hacen referencia al teniente-coronel Freddie Perdigão Pereira y al comandante Antonio Vieira, ambos responsables por departamentos clandestinos de instalaciones militares que actuaban en la represión. Según Guerra:

“(…) Uno de los diarios más críticos del sistema era *O Estado de São Paulo*. Perdigão y Vieira querían organizar un ataque contra su edificio, para llamar la atención, hacer ruido, pero sin víctimas. Yo mismo ideé todo. La bomba sería puesta fuera del edificio del periódico. Así, yo tendría más control para no afectar a nadie. Fue en el día 14 de noviembre de 1983. Yo pedí a un buenísimo mecánico de Espírito Santo [uno de los estados de Brasil], Paulo César Bessa, que construyera un coche para mí, de forma que fuera imposible rastrear su origen. Bessa era muy conocido como receptor de coches, no solo en Espírito Santo, sino también en Río de Janeiro. Él había construido un Voyage: el chasis era de un automóvil, el motor de otro, varias piezas mezcladas. Funcionó. Hasta hoy no hay cómo identificar el coche. Su oficina mecánica, que era la más un desguace que una oficina propiamente dicha, se situaba en Vitória [ciudad capital de Espírito Santo], al lado de la comisaría de la Policía Civil [en Brasil todavía hay Policías Militares, resquicios de la dictadura]. Él me ha entregado el coche y yo conduje sólo desde Vitória hasta São Paulo.

A partir del relato del ex-jefe de policía se puede percibir que, dado el conocimiento y las herramientas disponibles por Guerra (ya que él actuaba desde el Estado), la narrativa oficialista después del ataque podría ser fácilmente manejada en contra de los “subversivos”. Por el hecho de que Brasil experimentaba en este momento una dictadura militar, no cabía pensar en una disputa de narrativas en aquel momento, imperando así las relaciones asimétricas entre los militares de la junta gobernante con su alianza de civiles golpistas y el resto heterogéneo.

43 El periódico *El país*, en su versión en portugués, expone las conclusiones de la investigación alrededor de los documentos inéditos desclasificados por el Superior Tribunal Militar. Disponible en: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/02/politica/1538488463_222527.html

El “milagro económico”, la Copa de 1970 y la campaña ufanista

En el inicio de los años 70, Brasil experimentó dos procesos que aunque sean de ámbitos distintos, representaron un aspecto crucial para la permanencia del régimen. Uno de ellos está relacionado con la tercera victoria brasileña en la Copa del Mundo en 1970, realizada en México. El evento sirvió muchísimo para aplacar la percepción sobre la represión interna.

Brasil, que en este momento hacía poco más de 80 años que había abolido el sistema de esclavitud, presentaba enormes desigualdades sociales/raciales. Una forma efectiva de ablandar los conflictos presentes era a través de un deporte de abarcaba (aunque asimétricamente) a la mayor parte de la población. *O Estado de São Paulo* estuvo muy atento a este fenómeno y en el día 2 de junio de 1970 informaba que:

“La transmisión de la Copa del Mundo por la televisión, a través de Intelsat, gracias a la colaboración de Embratel [empresa brasileña de telecomunicaciones] hace que el mundo sea más próximo y nos acerca más del mundo. Ricos y pobres podrán acompañarla, animar el equipo nacional, incluso si es en una plaza pública.” (Almeida, 2013, pp. 8-9)⁴⁴

El diario que ya creía probable la victoria de la selección brasileña, decía en uno de sus textos que el resultado positivo para el país correspondería a dos días de carnaval (evento que en Brasil tiene un profundo significado tanto cultural como económico). La dictadura militar no dio cualquier tregua durante este momento festivo. En realidad los departamentos regionales de vigilancia y represión fueron alertados para la necesidad de filtrar cualquier material de contenido político-partidario inserto en las producciones culturales y audiovisuales sobre el fútbol.

Según Gaspari (2003, citado en Almeida, 2013), en junio de 1970 (Copa del Mundo) habían 500 presos políticos en el país, siendo 56% compuestos por estudiantes de 23 años aproximadamente. *O Estado de São Paulo*, entretanto, reverberó la declaración del gobierno de que no había ni presos políticos ni tortura en Brasil. Almeida (2013, p. 17) argumenta que:

“Le tocó al Estado no anular los sentimientos derivados de la represión y del control social, sino estimularlos dentro de un campo de conflicto controlable, que encontró en el fútbol, deporte hegemónico, el espacio ideal al hacer con que la Copa del Mundo de 1970 fuera una potente válvula de escape.”⁴⁵

44 Traducción propia del original: “A transmissão da Copa do Mundo pela televisão, via Intelsat, graças a colaboração da Embratel, torna o mundo mais próximo e nos aproxima mais do mundo. Ricos e pobres poderão acompanhá-la, torcendo pelo selecionado nacional, mesmo em praça pública.”

45 Traducción propia del original: “Coube ao Estado não anular os sentimentos advindos da repressão e controle social, mas sim estimulá-los num campo de conflito controlável, que encontrou no futebol, esporte hegemônico, o espaço ideal ao fazer da Copa de 70 uma potente válvula de escape.”

La euforia por la victoria en el fútbol (una pasión compartida por una enorme parcela de la sociedad brasileña) se mezcló con el creciente optimismo generado por el “milagro económico brasileño”. Este milagro consistió básicamente en un período de fuerte aumento del Producto Bruto Interno de Brasil, iniciado en 1969 y finalizado en 1973.

Durante este período, el tercer presidente *de facto* de la junta militar, Emílio Garrastazu Médici (un “línea dura”) implementa una serie de políticas económicas, como la expansión del crédito agrícola y al consumidor, apertura a las inversiones extranjeras, crecimiento de las inversiones en diversos sectores nacionales (como lo de infraestructura, manufactura, energético, agrícola, etc.), integración económica de la Amazonía con el restante del país, la adquisición de tecnología nuclear y la ejecución de proyectos de habitación, para mencionar algunos. Para el régimen, infelizmente, este “milagro” tendría una muy corta duración.

La crisis del “milagro” y la fragilidad del régimen

Cabe recordar que el fuerte crecimiento económico brasileño entre 1969 y 1973, fue logrado mayormente por la adquisición de deuda (en especial externa). El problema es que a partir de 1973, el mundo experimentaba los efectos adversos de la crisis del petróleo, resultado del embargo impuesto por los países de la OPEP a gran parte de los países centrales debido al apoyo que estos dieron a Israel durante la Guerra de Yom Kippur.

A lo largo de los años 70, el mundo experimentó otra crisis petrolífera, en 1979, que se debió al proceso de Revolución Iraní, la cual desestabilizó todo el sector en el país. El clima de inestabilidad económica contribuyó para el influjo de los capitales extranjeros presentes en los países periféricos hacia los países centrales, considerados más seguros. Este influjo impactó fuertemente la capacidad de Brasil de seguir sosteniendo su crecimiento basado en deudas externas. Además del aspecto económico, los años 70 fueron marcados por el proceso de distensión política en Brasil.

El día 4 de enero de 1975 es la fecha del fin de la censura previa a *O Estado de São Paulo*, el presidente *de facto* Ernesto Geisel (Sorbonne) empieza a imponer su control sobre los “bolsones radicales” del régimen (Aquino, 1999, pp. 60-61). Aunque no sea recomendable descuidar del aspecto conflictivo dentro de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, es intelectualmente saludable hacer una interpretación que pone en destaque la uniforme voluntad política de los militares (“sorbonne” o “línea dura”) de continuar con el proceso

dictatorial. Pese las aspiraciones públicas de Geisel de entregar gradualmente el poder a los civiles, la entrega estaba mucho más relacionado con el paulatino desgaste político debido a las manifestaciones sindicales, de sectores de la iglesia católica, trabajadores rurales, indígenas etc.

Un momento sobresaliente de las revueltas populares y señal de las tensiones entre alas fue la muerte del periodista Wladimir Herzog, en 1975. Antes de ser detenido como preso político, Herzog había trabajado para *O Estado de São Paulo*. La versión oficial afirmaba que Herzog había tirado su vida mientras estaba encarcelado. En realidad, el periodista había muerto en consecuencia de varias sesiones de tortura. El alcance de las prisiones clandestinas y de las prácticas de tortura eran tan grande en este momento que ya no había siquiera preocupaciones de defraudar las ejecuciones de manera creíble. La foto de la figura 1 fue sacada por los agentes de la dictadura.

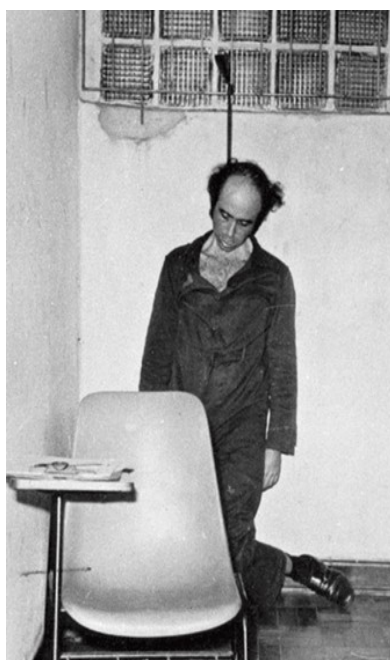


Figura 1. *Herzog muerto en la carcel*

Visto que Herzog era judío, la tradición judía espera que los muertos por suicidio sean sepultados en un local separado. Entretanto, el rabino Henry Sobel (uno de los exponentes en la defensa a los derechos humanos en Brasil durante la dictadura) acusó al gobierno de haber torturado Herzog y decidió que su entierro sucediera como los demás. Esta actitud generó una crisis todavía mayor para la junta militar.

O Estado de São Paulo informó sobre el episodio de forma que tanto los laudos del gobierno cuanto el testimonio de la esposa de Herzog estuvieran presentes. Sería posible de

imaginar que por haber sido Herzog ex-periodista del diario, y por haber un escenario de contestaciones de diferentes líderes sociales a la versión oficial, *O Estado de São Paulo* tendría una posición todavía más opositora que solo agregar “las diferentes versiones” de la historia.

Por increíble que parezca, dentro de la gran prensa el diario de los Mesquita fue uno de los más contestadores del episodio. La periodista Jordânia Bissolli (2018) señala que *Folha de São Paulo*, diario de la gran prensa y que competía con *O Estado de São Paulo*, siquiera había puso otra versión que la del gobierno. Además, es fundamental considerar que hay todavía una controversia sobre como Herzog había salido del diario de los Mesquita.

En un artículo pago y publicado en *O Estado de São Paulo*, intitulado “Os jornalistas e o Caso Herzog”, se hacía un llamamiento para que las causas de la muerte fueran aclaradas y apuntaba contradicciones en el laudo del gobierno, entre los cuales la razón de la salida de Herzog del diario. La versión oficial y la de un otro periodista era de que Herzog había sido expulso durante uno de los expurgos a los izquierdistas del diario. Ya *O Estado de São Paulo* afirmaba que el periodista había pedido su dimisión espontáneamente.

Redemocratización

El régimen se volvía cada vez más violento a medida que las movilizaciones en su contra tomaban más espacio. El año de 1983 marca el inicio de un lento final de la dictadura, pero la violencia política recrudecía. Este recrudecimiento puede estar asociado a dos posibilidades: 1) el régimen creía que con la profundización de la política del exterminio se podría enfriar la capacidad de reacción de la oposición o, 2) los militares ya esperaban una derrota que venía gradualmente y veían en la violencia una forma de negociar una salida que los protegiera de las posibles acusaciones en su contra por sus diversos crímenes. Me inclino por esta última hipótesis.

A partir de 1979, gobierno elige el último militar de la dictadura, el general João Figueiredo (Sorbonne) que gobernaría hasta 1985. Los años 80 fueron marcados por un proceso de apertura política (aunque gradual) y de elecciones libres para los estados del país. El partido ARENA (de la dictadura) fue disuelto junto con el sistema bipartidario. El sucesor del ARENA sería el Partido Democrático Social (PDS).

El resultado electoral apuntó para un resultado satisfactorio del MDB (partido de la oposición a la dictadura, a partir de entonces llamado PMDB) eligiendo 9 gobernadores entre los 22 existentes en el este momento⁴⁶, el PDT (partido de la oposición a la dictadura que fue creado con el fin del bipartidarismo) eligió 1 gobernador (en el estado de Rio de Janeiro) y el PDS eligió 12 gobernadores. Así, grosso modo, el régimen obtuvo una ligera ventaja sobre la oposición.

En las elecciones para el senado, ahora con 23 estados, el PMDB eligió 9 senadores, el PDT 1 y el PDS, 13. Para la cámara de diputados, el PDS obtuvo el 49,06% de los votos, el PMDB 41,75%, el PDT 4,80%, el PTB (otro partido de la oposición), 2,72% y el PT (otro de la oposición), 1,67%.⁴⁷ Creo que es inferido que estos resultados ocurrieron tras acusaciones de fraudes e intentos de no reconocimientos de la victoria de candidatos opositores.

Aunque la dictadura obtuvo una victoria relativa por las vías electorales, la presencia de la oposición pasó a ser tan grande que se hizo necesario para el gobierno hacer alianzas para aprobar los proyectos de leyes de interés del régimen. En 1983, el gobierno incluso sufre una derrota en la aprobación de un proyecto de ley referente a política salarial y de indexación de alquileres (Sanguiné, 1998).

Con la apertura, los movimientos populares a favor de elecciones presidenciales libres se fue profundizando y pasa a surgir el *Movimento pelas Diretas Já*. Tras intensas demandas en este sentido, el congreso pone en 1984 la votación de la enmienda constitucional Dante de Oliveira (diputado del PMDB que presentó el proyecto de ley para elección libres para presidente).

El *Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística* (IBOPE), antes de la votación, realizó una encuesta que apuntaba que 84% de los brasileños eran a favor de las elecciones libres para presidente. Por eso, El diario *O Estado de São Paulo* percibía que la resistencia al régimen aumentaba de tal forma, que abrazar la dictadura en este momento podría ser un grave error de cálculo político. Así, el diario pasó a reivindicar el fin de la dictadura militar. El historiador Vicente Saul (2009), haciendo referencia a un editorial del diario sobre un gran acto realizado el 10 de abril de 1984, señala que:

“Absolutamente favorable a las elecciones directas, el diario exhortaba, ante un gran volumen de manifestantes que participaron- quinientos mil o el doble- los “diputados

46 En 1982, el estado de Rondônia es creado, pero un militar fue elegido por la junta para servir de interventor. Así no hubo elecciones en este estado. Las otras unidades de la federación fueron creadas a partir de la constitución de 1988.

47 Todos estos datos están disponibles en: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais>

defensores del Colegio Electoral” a organizar una reunión en la cual asistieran por lo menos diez mil manifestantes, lo que “ayudaría mucho a los parlamentarios que tienen la intención de enterrar la enmienda Dante de Oliveira”. El editorial añadía todavía que “sólo el Ejecutivo, insensible y aislado,...es ajeno a lo que sucede en el escenario político: él se pone rígido en la defensa de las elecciones indirectas y no renuncia a su propósito pernicioso de llevar al poder un representante de la oligarquía que explota este país a su gusto”⁴⁸

Entretanto, *O Estado de São Paulo* ya estaba consciente de la posibilidad de que la demanda por elecciones libres fueran derrotada debido a los “inefables senadores biónicos”⁴⁹ (Saul, 2009). Así, en la Cámara de diputados la enmienda logró 298 votos a favor, 65 en contra, 113 diputados ausentes y 3 abstenciones. Visto que los votos necesarios para la apreciación del proyecto en el senado eran de 320, la enmienda *Dante de Oliveira* fue rechazada el día 25 de abril de 1984.

Las elecciones indirectas y el gobierno Sarney

La redemocratización en Brasil se dio a través de un compromiso entre los jefes de la junta militar y las cúpulas de los partidos políticos. La votación fue organizada en torno a la decisión de un colegio electoral donde una cantidad específica de diputados y de senadores de cada estado de la federación habían participado. De un lado se decidió que el candidato de la dictadura sería el empresario y diputado federal (además de ex-gobernador del estado de São Paulo) Paulo Maluf que, con la disolución del ARENA, se vinculó al PDS.

El candidato de la oposición, el entonces gobernador del estado de Minas Gerais Tancredo Neves, resultó de una alianza informal que compuso el PMDB, el PDT y disidentes del PDS. Visto que Neves era un político moderado y que tenía simpatizantes dentro del régimen, la aceptación de la junta militar a su candidatura se logró fácilmente. El vicepresidente de Neves fue el entonces senador del estado de Maranhão José Sarney. Desde el golpe de 1964, Sarney estuvo afiliado al ARENA y, tras la disolución de este, al PDS.

48 Traducción propia del original: “Absolutamente favorável às diretas, o jornal exortava, diante do grande volume de manifestantes que compareceram — quinhentos mil ou o dobro —, os “deputados defensores do Colégio Eleitoral” a tentar uma reunião à qual comparecessem ao menos dez mil simpatizantes, o que “ajudaria muito os parlamentares que pretendem sepultar a emenda Dante de Oliveira”. O editorial acrescentava ainda que “só o Executivo, insensível e isolado,... está alheio ao que sucede no cenário político: enrijece-se na defesa das indiretas e não desiste do propósito funesto de levar ao poder mais um representante da oligarquia que encilhou este país e o explora a seu bel-prazer”. (pp. 24-25)

49 La expresión senador biónico se refirió a los senadores indicados directamente por el Presidente de la República y electos por el voto indirecto, en el marco de un paquete de medidas anunciadas en 1982 por el presidente *de facto* Figueiredo con el objetivo de tutelar la transición democrática y obtener decisiones parlamentarias más favorables al régimen.

Como la entonces ley electoral no permitía una coalición de partidos para gobernar, Sarney migró para el PMDB de Tancredo Neves. Así, brevemente, la disputa electoral se dio entre el candidato de la dictadura (su vice incluso), Paulo Maluf y el candidato de la oposición (que tenía la aceptación de la dictadura) Tancredo Neves (con su vice ex-afiliado de los partidos de la dictadura). Neves obtuvo el 72,40% de los votos del colegio electoral; mientras Maluf, el 27,30%. Los 0,30% fueron de abstenciones principalmente del PT, que participó activamente de las manifestaciones del *Movimento Diretas Já*, y que no estaba de acuerdo con las elecciones indirectas.

A pesar de la victoria de Tancredo Neves, el presidente sufrió las consecuencias de un tumor benigno que estaba infectado y murió el 21 de abril de 1985⁵⁰, siendo sucedido por José Sarney (ex-ARENA y ex-PDS). Así la dictadura militar brasileña es extinta formalmente y pasa a gobernar con un representante electo (indirectamente) y con una base parlamentaria mayoritariamente compuesta por diputados y senadores del PDS.

O Estado de São Paulo era reticente al gobierno de Sarney debido a su manera de lidiar con la crisis económica. Recordemos que los años 70 y 80 fue marcado por diversas convulsiones sociales y con el fin del “milagro económico”, lo cual resultó en una explosión de la deuda externa y una prolongada recesión. Grosso modo, la crisis estallaría más violentamente durante el traspaso de poder de los militares para los civiles.

Recordemos también que, a pesar de la mayoría parlamentaria obtenida por el PSD, la oposición había asumido prácticamente la mitad de las bancas. En el marco de una democracia liberal-representativa (a pesar de que en este momento no había ninguno de estos elementos en la realidad práctica), la negociación entre los partidos se hacían inevitables. De esta forma la oposición también logró imponer ciertas demandas que se reflejaron en las políticas implementadas por Sarney.

Una de ellas fue el intento de combate a la inflación que, a finales de 1985 había llegado 242,23%⁵¹. Sarney atribuía la inflación principalmente a la ganancia de los capitalistas. Por eso, desde el inicio de su gobierno, *O Estado de São Paulo* estuvo muy reticente. El diario argumentaba que el intento del gobierno de culpar a los “dueños del

50 La causa de la muerte de Neves continúa desconocida, debido a las diversas versiones sobre ella. El historiador Luís Mir publicó en 2010 un libro titulado *O paciente, o caso Tancredo Neves* con testimonios de una serie de médicos que operaron Neves en aquel entonces, además de documentos para investigar la real causa de la muerte.

51 Disponible en: <https://pt.inflation.eu/taxas-de-inflacao/brasil/inflacao-historica/ipc-inflacao-brasil-1985.aspx>

capital” y a los “empresarios que se preocupaban más con sus finanzas personal que con el destino de la nación” ocultaba su responsabilidad personal (Saul, 2009, p. 25).

Para el diario las causas principales del fenómeno inflacionario eran el déficit público y el nivel elevado de deuda (deuda esta que fuera profundizada con el “milagro económico” tan alabado por el diario), perspectivas que también eran difundidas por las principales federaciones empresariales del país en aquel momento.

Las críticas del diario se intensificaron a medida que el gobierno ponía en práctica el *Plano Cruzado*, que además de cambiar la moneda en circulación, también establecía un control de precios, desindexación de los intereses pagos por el Tesoro Nacional (extinción de la corrección monetaria), y reajustaba los salarios por la inflación. El plan resultó exitoso en un primer momento, derrumbando la inflación mensual de 12,49% en febrero para 1,40% en octubre (valores modestos en un contexto de hiperinflación).

El gobierno logró un importante aumento de popularidad, con 72% de la población en su favor⁵². Entretanto, el plan fracasara poco después debido a una serie de factores (tales como la proximidad del año electoral, que impide de implementar reformas impopulares, altos sueldos para la cúpula del servicio público, y con el desequilibrio de precios que hizo con que los pequeños productores fueran a la bancarrota).

O Estado de São Paulo ya preveía la derrota del *Plano Cruzado*. Según Saul (2009)

“En mayo de 1986, el editorial “Saboteador de la reforma será el gobierno” atacada nuevamente el sector público, considerándolo de “prodigalidad sin frenos”, en oposición al sector privado, “que gemía bajo el peso de mil tributos de todo tipo tomados por la fuerza por el fisco implacable”. En las empresas estatales se fabricaba “el agujero astronómico que entroniza la inflación y la lleva al paroxismo” (pp. 25-26)⁵³”

Como los trabajadores habían logrado reajustes de salarios alineados con la inflación oficial mientras los comerciantes eran obligados a congelar sus precios, hubo un aumento de demanda que rápidamente resultó en un desabastecimiento. Una de las causas apuntadas por el gobierno sería que los grandes productores agrícolas habían organizado un sabotaje con el fin que el *Plano Cruzado* fracasara.

52 Disponible en: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,avaliacao-positiva-alcanca-a-de-sarney-no-plano-cruzado,294520>

53 Traducción propia del original: “Em maio de 1986, o editorial “Sabotador da reforma será o governo” investia novamente contra o setor público, considerando-o de “prodigalidade sem freios”, em oposição ao setor privado, “a gemer sob o peso de mil tributos de todo o tipo tomados na marra pelo fisco implacável”. Nas estatais se fabricava “o rombo astronômico que entroniza a inflação e a leva ao paroxismo”. (pp. 25, 26)”

Ante la imposibilidad de saber si este argumento era basado en alguna comprobación, lo que se puede observar es que tras la victoria del gobierno en las elecciones de 1986,⁵⁴ Sarney satisfizo la demanda de los empresarios y anunció el *Plano Cruzado II*, por lo cual se liberaban parcialmente el reajuste de precios que estaban comprimidos, establecía que el reajuste de alquileres se daría entre la negociación propietario-inquilino, aumentaban los impuestos sobre bebidas y cigarrillos, sobre las tarifas públicas, entre otras medidas.

La disparada de los precios (no alineada a una recomposición salarial), provocó una caída abrupta de los niveles de vida de la población y consecuentemente una huelga general el 12 de diciembre organizada por las principales centrales obreras del país, CUT y CGT. *O Estado de São Paulo*, pese a sus críticas al gobierno y a su escepticismo sobre el funcionamiento de los *Planos Cruzado I y II*, atacó enérgicamente las demandas de los trabajadores. Según el historiador Cássio Augusto Guilherme (2019):

“El día de la huelga, la portada [del diario] fue “CUT-CGT intentan paralizar el país hoy” y continuaba: “nada cambiará el proyecto de Sarney durante la transición democrática”. El diario decía que, debido a los huelguistas, el pacto social quedaba más distante y que el Ejército, listo y a instancias del gobierno, “no tolerará piquetes”. El día siguiente el mismo diario busca establecer la narrativa de fracaso de la huelga. En la portada exponía: “El pueblo va en paz a su trabajo. Es el fracaso de la huelga”, y, en el editorial, escribe que “el pueblo es sabio” y “sabe que la única forma de superar la crisis es a través del trabajo”. El diario provocaba al afirmar que “solo la CUT cree que la huelga sea victoriosa” y que para el gobierno la expectativa es de diálogo con las Centrales Obreras.” (pp. 42-43)⁵⁵

Constitución de 1988

La constitución aprobada durante la transición democrática estableció un conjunto complejo de medidas que tenía por objetivo organizar la forma de gobierno en Brasil tras la dictadura haber formalmente terminado. El tamaño del trabajo parlamentario fue imenso, debido a la participación de diversos sectores sociales que buscaban añadir sus intereses en la

54 En las elecciones de 1986, el gobierno Sarney logró elegir 22 gobernadores de su partido (PMDB) de un total de 23 estados, además de elegir 38 senadores de un total de 49 y lograr 53,39% de las bancas de la Cámara de Diputados para el PMDB. Todos estos datos están disponibles en: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais-1/repositorio-de-dados-eleitorais>

55 Traducción propia del original: No dia da greve, a chamada da capa foi “CUT-CGT tentam parar o país hoje” e continuava: “nada mudará o projeto de Sarney na transição para a democracia”. O jornal dizia que, por culpa dos grevistas, o pacto social ficava cada vez mais distante e que o Exército, de prontidão e a mando do governo, “não vai tolerar piquetes”. No dia seguinte o mesmo jornal tenta firmar a narrativa de fracasso da greve. Em chamada de capa expunha: “O povo vai em paz para o trabalho. É o fracasso da greve”, e, no editorial, escreve que “o povo é sábio” e “sabe que o único meio de superar a crise é o trabalho”. O jornal provocava ao afirmar que “só a CUT acha a greve vitoriosa” e que para o governo a expectativa é de diálogo com as Centrais Sindicais.

constitución. Hasta hoy la Constitución de 1988 es conocida como Constitución ciudadana, pues hay elementos progresistas relevantes en la asignación de derechos y políticas públicas.

Para nuestro objetivo, es relevante mencionar que una de las demandas de la sociedad civil, organizadas alrededor de la *Frente Nacional por Políticas Democráticas de Comunicação* (que en la década del 90 pasaría a llamarse *Fórum Nacional Pela Democratização da Comunicação*) era de denunciar la concentración de los medios de comunicación, promover una amplia discusión social sobre la democratización del acceso a la prensa y sobre el rol del Estado en las políticas públicas dirigidas al ámbito de la comunicación social.

Las entidades sociales participantes de esta Frente presentaron sus propuestas a la asamblea nacional constituyente, a través de la Enmienda Popular n 91 que, entre otras consideraciones, establecía el *Conselho Nacional de Comunicação Social*, lo cual tenía como objetivo que el Estado regulara las telecomunicaciones en el país. Entretanto había un factor clave para que este debate no avanzara mucho en la Asamblea: la presencia preponderante de propietarios de grandes medios de comunicación (locales y nacionales). Rosa (2008) explica que:

“La controversia sobre el tema se disputa entre dos polos principales. De un lado, los abogados del “control social” de los medios, defensores de mayor intervención gubernamental en el mercado de comunicación. En este grupo, figuran entidades representativas de profesionales de la prensa, académicos vinculados a los estudios de comunicaciones, organizaciones no gubernamentales, miembros del Ministerio Público Federal, entre otros. En el otro extremo, están los tradicionales defensores de la desregulación del mercado de comunicación, especialmente los representantes de empresas de comunicación, como la Asociación Brasileña de Canales de Radiodifusión (Abert), la Asociación Brasileña de Televisión por Suscripción (ABTA) y la Asociación Brasileña de Radiodifusión, Tecnología y Telecomunicaciones (Abratel), entre otros. También, se suele participar de este grupo empresarios del sector de publicidad y propaganda, representados por la Asociación Brasileña de las Agencias de Propaganda (Abap).” (pp. 1-2)⁵⁶

En esta situación infelizmente era previsible que el conflicto entre los polos políticos privilegiaran los representantes de las oligarquías tradicionales que hacía mucho ya controlaban los medios de comunicación en sus estados. Uno de los temas de discusión era

56 Traducción propia del original: “A controvérsia sobre o tema se trava entre dois pólos principais. De um lado, os advogados do “controle social” da mídia, defensores de maior intervenção governamental no mercado de comunicação. Nesse grupo, figuram entidades representativas de profissionais da imprensa, acadêmicos ligados aos estudos das comunicações, organizações não governamentais, membros do Ministério Público Federal, entre outros. No outro extremo, estão tradicionais defensores da desregulamentação do mercado de comunicação, com destaque para representantes das empresas de comunicação, como a Associação Brasileira de Emissoras de Radiodifusão (Abert), a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) e a Associação Brasileira de Radiodifusão, Tecnologia e Telecomunicações (Abratel), entre outros. Também costumam figurar neste grupo empresários do setor de publicidade e propaganda, representados pela Associação Brasileira das Agências de Propaganda (Abap).”

sobre la competencia del Poder Ejecutivo en implementar políticas dirigidas a la comunicación social.

Visto que el artículo V de la constitución de 1988 pasaría a prever que los temas de derecho civil (entre ellos la regulación de los medios) estaba a cargo del Poder Ejecutivo, los parlamentarios vinculados a la gran prensa, rápidamente establecieron que el *Conselho Nacional de Comunicação Social* tendría sus atribuciones determinadas en posteriores leyes complementarias y que este aspecto del derecho civil (medios) estarían a cargo del Poder Legislativo. De esta forma, los empresarios de la gran prensa preparaban el terreno para el poder de los grandes medios sobre el proceso electoral que se avecinaba.

Las elecciones de 1989

Las elecciones de 1989 fueron las primeras por el voto directo que hubo en Brasil tras la dictadura cívico-militar (1964-1985). Dada las intensas movilizaciones sociales para que este hecho histórico ocurriera y considerando el sistema pluripartidario que la Constitución de 1988 consolidaba, 22 candidatos de diversos partidos participaron de estas elecciones, desde conservadores patrióticos anticomunistas (como el caso del candidato Éneas Carneiro) hasta el candidato que proponía un *default* de la deuda externa y una profunda reforma agraria (Lula da Silva).

La izquierda brasileña que decidió participar políticamente por la vía electoral fue representada en las elecciones de 1989 por dos candidatos, Leonel Brizola y Lula da Silva. Visto que el primero no logró una expansión nacional para su campaña ni una penetración dentro de los movimientos sociales, el segundo pasó a destacarse en las encuestas.

Lula tenía una larga historia de luchas populares y había participado de diversas huelgas durante la dictadura militar y de manifestaciones para el establecimiento del voto directo para elecciones presidenciales. Procedente de una familia pobre del noreste del país (región que ha pasado por un proceso de pauperización crónica desde el colapso de la economía de la caña de azúcar, durante el período colonial) que migró para la industrializada São Paulo, Lula pasó a trabajar como tornero mecánico e inició su carrera política en el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, siendo elegido diputado en 1986.

Dentro de la derecha política que decidió participar de las elecciones, el candidato que se sobresalió fue Fernando Collor de Mello, el entonces gobernador del estado de Alagoas

hasta las elecciones de 1989. Procedente de las tradicionales oligarquías de este estado, Collor ya poseía una carrera política consolidada (su tío había sido ministro del trabajo durante el gobierno de Vargas; su tío, gobernador de Alagoas).

Además, Collor era (y todavía es) dueño de los principales medios de comunicación de su estado (diario, radio y televisión), y beneficiado directamente por la concentración de los medios (intensificada con las decisiones parlamentarias favorables a la gran prensa). En las elecciones de 1989, esta concentración resultó notable, visto que los grandes medios asignaron muy asimétricamente las críticas negativas entre los dos candidatos.

O Estado de São Paulo tenía una preferencia visible por Collor de Mello y sus propuestas de impulsar un proceso de privatizaciones y desregulaciones en Brasil, además de promover un amplio combate a la corrupción⁵⁷. Así, Collor agregaba dos de las principales cuestiones de la agenda política de *O Estado de São Paulo*. Mientras tanto, el diario no se privaba de exteriorizar su rechazo a la candidatura de Lula y del Partido de los Trabajadores. En un editorial de febrero de 1989 titulado “Quadro distorcido”, el diario argumentaba que:

“Como si no fuera suficiente la incompatibilidad del PT con la administración, la falta de preparación intelectual, cultural e incluso personal de Lula para asumir la más importante posición política en el escenario político brasileño es público y notorio. No se trata solo de una elección [de Lula] perversa en un momento de graves dificultades y en la crisis que atraviesa el Brasil contemporáneo. El desastre administrativo del gobierno izquierdista puede significar una tentación muy grande para la ruptura institucional, indeseable en este momento de consolidación de la todavía precaria democracia brasileña”⁵⁸ (Nava, 2017, p. 71)

El cientista político Fernando Antônio Azevedo en su artículo *PT, eleições e editoriais da grande imprensa (1989-2014)*, hizo una interesante compilación de editoriales de los principales periódicos brasileños durante los períodos electorales, entre ellos *O Estado de São Paulo*. De la compilación organizada por Azevedo (2018), se puede encontrar algunas informaciones relevantes sobre la participación del diario de los Mesquita durante las elecciones de 1989.

57 Collor pasó a ser llamado por los medios *Caçador de Marajás*, es decir, como un mandatario intensamente preocupado con la caza a las altas autoridades y oligarcas que se aprovechaban de las débiles instituciones y de su poder político para practicar la corrupción.

58 Traducción propia del original: “Se não bastasse a incompatibilidade do PT com a administração, o despreparo intelectual, cultural e mesmo pessoal de Lula para assumir a mais importante posição política no cenário político brasileiro é público e notório. Não se trata apenas de uma escolha perversa num momento de graves dificuldades e na crise atravessada pelo Brasil contemporâneo. O desastre administrativo do governo esquerdista pode significar uma tentação muito grande a ruptura institucional, indesejável neste momento de consolidação da ainda precária democracia brasileira”.

Una de las más sobresalientes es que *O Estado de São Paulo* fue entre los periódicos de la gran prensa el que más produjo editoriales sobre el Partido de los Trabajadores (25,1%) contra 16% de *Folha de S. Paulo* y 8,6% de *O Globo*. De los editoriales producidos por *O Estado de São Paulo* en 1989, 89,4% tenían una connotación negativa.⁵⁹ Según Azevedo (2018):

“Con respecto a los paquetes interpretativos, el *Estadão* [*O Estado de São Paulo*] usa y señala a menudo la expresión “lulopetismo” en sus editoriales como un concepto político negativo para referirse a sus ideas, proyectos, acciones y figuras políticas del partido. [...] [Además] hace uso de los marcos “radicalismo” y “populismo” en el período pre-gobierno del PT” (pp. 282-283)⁶⁰

El rechazo del diario a los candidatos de izquierda con reales chances de ganar las elecciones dura hasta el presente. Desde 1989, *O Estado de São Paulo* apoya directa o indirectamente todos los candidatos de centro-derecha o, en la ausencia de estos, todos aquellos que, a pesar de su origen partidaria, impulsó medidas pro-mercado (como el ex-presidente Fernando Henrique Cardoso del *Partido da Social Democracia Brasileira*).

La apuesta por Collor en 1989 se mostró fructífera. En aquel año, se logró crear un ambiente de animosidad sobre los peligros de la victoria del Partido de los Trabajadores. Para percibir un poco de lo que se quiere decir, vale destacar que según el sociólogo Marco André Cadoná (2016):

“[...] en aquellas elecciones Collor de Melo se puso como una posibilidad real de impedir que las fuerzas sociales y políticas vinculadas a la clase trabajadora del país asumiera el gobierno nacional, a través de la elección de Luís Inácio Lula da Silva (cuya trayectoria política, como ampliamente conocido, estaba directamente vinculada con la mayor central obrera del país, la CUT- Central Única de los Trabajadores). No es demasiado recordar, en este sentido, la afirmación, simbólica, del presidente de la FIESP (Federación de las Industrias del Estado de São Paulo) en aquel entonces, Mario Amato, según lo cual si Lula ganara las elecciones presidenciales 800 mil empresarios abandonarían Brasil [...]” (p. 272)

La campaña abierta de las élites político-económicas y su alianza con los grandes medios, incluso *O Estado de São Paulo* resultó que, en el ballotaje, Fernando Collor ha logrado el 53,03% de los votos válidos contra el 46,97% de Lula. Por lo tanto, se pudo percibir cómo *O Estado de São Paulo* se insertó políticamente ante los gobiernos militares y

59 El periódico *O Globo* fue lo que más produjo editoriales negativos sobre el PT (100%). Entretanto su participación entre los editoriales de los diarios de la gran prensa representó sólo el 8,6%. *O Estado de São Paulo*, en este sentido, puede ser mejor comparado con su otro competidor, *Folha de São Paulo*. Los editoriales negativos de este diario con respecto al PT representaron 65,2%, considerablemente menor que los editoriales negativos producidos por *O Estado de São Paulo*.

60 Traducción propia del original: “Em relação aos pacotes interpretativos, o *Estadão* [...] usa e pontua com frequência a expressão “lulopetismo” em seus editoriais como um conceito político negativo para se referir a ideias, projetos, ações e personagens políticos do partido. [...] [Além disso] lança mão dos enquadramentos “radicalismo” e “populismo” no período pré-governo do PT [...]”

los de la redemocratización. En el próximo capítulo, se buscará discutir la corta y turbulenta relación del diario con el gobierno Collor.

Capítulo IV- *O Estado de São Paulo* y el gobierno Collor de Mello: un análisis por medio de los editoriales (1990-1991)

El objetivo de este capítulo es analizar el rol del diario *O Estado de São Paulo* en la legitimación de las políticas neoliberales del gobierno de Fernando Collor de Mello. Así, el capítulo enfocará tres aspectos: 1) la relación en sí del medio con el gobierno, es decir, el modo como el diario se posiciona ante las medidas oficialistas; 2) el modo en que él construye discursivamente a aquellos que buscan combatir políticamente al proyecto oficialista; y 3) la perspectiva del diario sobre la Argentina del presidente Menem y su relación con Brasil cuando se trata del tema de la integración del Mercosur.

El gobierno Collor de Mello

Antes de la asunción de Collor, el 1º de marzo para ser más específico, el diario había alertado al gobierno que “mucho del éxito del gobierno Collor dependerá de las expectativas que los ahorristas - medianos o grandes- desarrollen” (“Los dos lados de la crisis”, p.3, 1 de marzo de 1990) y comparó los desafíos que el presidente enfrentaría con los del presidente argentino Carlos Menem. En este mismo editorial el diario dijo que:

“Una de razones por las cuales el presidente Menem enfrenta dificultades, hoy en día, es que las expectativas de los agentes económicos los tiraron a todos a los brazos de Mamom, el dios fenicio de la codicia. Contra la codicia, la racionalidad económica poco se puede hacer. Que el presidente Collor de Mello medite sobre eso y oriente sus asesores para que tengan ese componente psicológico (y ético) de la inflación en consideración” (1 de marzo de 1990)⁶¹

Dando continuidad a su postura durante las campañas electorales de 1989, el diario mantuvo en el inicio del mandato de Collor una perspectiva muy positiva acerca del gobierno. El día de la asunción presidencial, *O Estado de São Paulo* le dio la bienvenida a través de un editorial análogo titulado “Bienvenido, Collor”, según el cual:

“Desde el fin de la campaña electoral hasta su asunción, el presidente Fernando Collor supo mantenerse fiel al mensaje que ha transmitido durante los meses que precedieron a las elecciones. Por eso, asume la Presidencia con altos niveles de popularidad hoy registrados. De la misma manera, el tiempo transcurrido entre diciembre [de 1989] y marzo [de 1990], no permitió que se notaran cambios en su

61 Traducción propia del original: “Uma das razões das dificuldades enfrentadas pelo presidente Menem, hoje em dia, é que as expectativas dos agentes econômicos os jogaram todos nos braços de Mamom, o deus fenício da cobiça. Contra a cobiça, a racionalidade econômica pode pouco. Medite nisso o presidente Collor de Mello e instrua seus assessores para que levem esse componente psicológico (e ético) da inflação na devida conta.”

manera de ver la Política, a los hombres a su alrededor y al mundo circundante. Nada cambió en su excelencia- y por ser así, se sabe hoy que [él] es centralizador, conciente de la autoridad de la cual fuera otorgado por los votos y que resulta también de la propia función, incluso audaz en algunos momentos. Otros dirían, y con esto sigue un elogio, escondiendo un poco de ironía, que [él] es impulsivo, cargado de vida y energía, joven, en resumen. [Él] es todo eso y así será durante los próximos 5 años, esperamos, en lo que se refiere a la conciencia de autoridad, indispensable para restablecer el barco del Estado en el curso que se ha desviado hace muchos años. [...] Íntimamente, los brasileños están seguros que se abre hoy la última oportunidad que todavía les queda de reencontrarse con la Historia. Si por esta o aquella razón la esperanza que pusieron en el presidente Fernando Collor de Mello fuere defraudada, saben, igualmente, que debido a esta frustración, el destino que nos espera podrá ser igual, si no peor, al de la Argentina del presidente Menem, presa de conflictos sociales no resueltos, de disputas políticas que perduran hace siglos, de enfermedades crónicas, cuya traducción más simple es el peronismo, que fue estrictamente la forma platina del populismo estatizante que ha entristecido y desgraciado la América Latina hasta hoy. Esta certeza no confesada de que también la Nación brasileña- así como el Presidente- posee una única oportunidad de realizar su destino, es una de las garantías de que el período gubernamental que se inicia hoy podrá equiparar gran parte de los problemas que nos afligen y encaminar la solución de muchos de ellos.” (“Bienvenido, Collor, p. 3, 15 de marzo de 1990)⁶²

El día 16 de marzo, es decir, apenas un día tras la asunción de Collor de Mello, el gobierno anuncia un plan de estabilización económica llamado *Plan Brasil Nuevo* (popularmente llamado *Plano Collor*), por lo cual se despidió a cientos de miles empleados estatales, se congeló precios y salarios, se autorizó aumentos de las tarifas públicas, además de establecer impuestos indexados a la inflación.

La medida más impactante y chocante, entretanto, fue el congelamiento de 80% de los depósitos bancarios de valores que excedían los 51.000 *cruzados novos*, el equivalente a casi 14 salarios mínimos de aquel mes (recordemos que el reajuste de salario en este momento era casi mensual dada la hiperinflación) o un poco más de 2.500 dólares americanos en los días de hoy. El monto total del congelamiento fue alrededor de 115 mil millones de dólares de aquel

62 Traducción propia del original: “Do fim da campanha eleitoral até a posse, o presidente Fernando Collor soube manter-se fiel à mensagem que transmitiu durante os meses que antecederam o pleito. Por isso, assume a Presidência com os altos índices de popularidade hoje registrados. Da mesma maneira, o tempo decorrido entre dezembro e março não permitiu que se notassem mudanças na sua maneira de ver a Política, os homens que o rodeiam e o mundo circundante. Nada se alterou em s.exa.- e por ser assim, sabe-se hoje que é centralizador, cioso da autoridade de que foi investido pelos votos e que decorre também da própria função, até audacioso em certas ocasiões. Outros diriam, e nisso vai com certeza o elogio, escondendo uma ponta de ironia, que é impulsivo, estuante de vida e energia, moço, em suma. É tudo isso e assim será durante os cinco anos, especialmente, esperamos, no que se refere à consciência da autoridade, indispensável para repor a nau do Estado no rumo de que foi desviada há muitos anos. Íntimamente, os brasileiros têm a certeza que se abre, hoje, a última oportunidade que ainda lhes resta de reencontrar-se com a História. Se por esta ou aquela razão a esperança que depositaram no presidente Fernando Collor de Mello for defraudada, sabem, igualmente, que em consequência da frustração daí decorrente o destino que nos aguarda poderá ser igual, se não pior, ao da Argentina do presidente Menem, presa de conflitos sociais não resolvidos, de querelas políticas que perduram há séculos, de males crônicos, cuja tradução mais simples é o peronismo estatizante que infelicitou e desgraça até hoje a América Latina. Esta certeza não confessada de que também a Nação brasileira- a igual que o presidente- só tem uma oportunidade para realizar seu destino, é uma das garantias de que o período governamental que hoje se inicia poderá equacionar boa parte dos problemas que nos afligem e encaminhar a solução de muitos deles.” (‘Bem-vindo, Collor, p.3, 15 de março de 1990)

tiempo (30% de PIB de Brasil en 1990) según el propio *O Estado de São Paulo* (“Quien pagará la cuenta?”, 3 de abril de 1990), aproximadamente 225 mil millones de dólares en valores actuales.

El gobierno no estaba sólo en la defensa del *Plan Collor*, visto que la idea del congelamiento de depósitos bancarios ya circulaba entre partidos de la oposición, en especial los de izquierda como el Partido de los Trabajadores (Andrada, 2018). Así, detrás de las escenas, el congelamiento (llamado popularmente de *confiscación*) era una medida apoyada por los candidatos desde las elecciones de 1989, dado el consenso de combatir la fuga de capitales y la inflación incluso por vías arbitrarias⁶³.

O Estado de São Paulo abordó la decisión del gobierno el día siguiente a través de tres editoriales a la vez. Titulado “Salvar a las instituciones”, uno de los editoriales decía que:

“Es hora de desenmascarar la estafa que se viene organizando desde el *Plan Cruzado*, el cual tiene por objetivo presentar a los “capitalistas”, los empresarios, los acomodados como criaturas voraces que poseen un placer sádico en despojar al pueblo. La estafa tenía, tarde o temprano, que surgir, cuándo se intentara cuantificar monetariamente la expoliación. Los asesores del presidente, herederos que son del resentimiento provocado por el fracaso del *Plan Cruzado*, lo convencieron que los que poseen ahorros de más de 51 mil *cruzados nuevos* se sitúan en esta categoría despreciable. Con el pretexto de salvar a los pobres, se olvidaron que también ellos saben ahorrar y utilizar los instrumentos que el Estado pone a su alcance para salvar el valor de su moneda” (p. 3, 17 de marzo de 1990)⁶⁴

En esta cita y en otra que será analizada a continuación, se observa que *O Estado de São Paulo*, pese a su posterior rechazo de la administración Collor, hizo lo posible para que sus críticas inicialmente no afectaran la imagen pública de Collor (algo que sorprende, visto que el diario reverberaba los discursos por los cuales Collor afirmaba que él sería el ministro de economía *de facto*, relegando implícitamente a Zélia Cardoso (ministra de economía *de jure*) un rol de ejecutora de un plan previamente elaborado y con el aval de Collor.

63 El diario se quejaría pocos días después que “algunos diputados, incluso líderes de partido, apoyaron las medidas antes de someterlas a un análisis más profundo, porque, aparentemente en línea con el programas de sus candidatos, impactan a primera vista, y exclusivamente, los empresarios y el sistema financiero.” (traducción propia del extrato del editorial “As bases do confronto” de 18 de marzo de 1990.

64 Traducción propia del original: “É tempo de desmascarar a farsa que se vem montando desde o Plano Cruzado, a qual visa a apresentar os “capitalistas”, os empresários, as pessoas de posse como criaturas vorazes que têm prazer sádico em espoliar o povo. A farsa tinha, mais dia menos dia, de vir a furo, quando se tentasse quantificar monetariamente a *espoliação*. Os assessores do presidente convenceram s. exa., herdeiros que são do ressentimento provocado pelo malogro do Plano Cruzado, de que os que têm mais de 51 mil cruzados novos nas cadernetas de poupança ou no *overnight* se enquadram nessa categoria desprezível. A pretexto de salvar os pobres, esqueceram-se de que também eles sabem economizar e utilizar os instrumentos que o Estado coloca a seu alcance para salvar o valor de sua moeda.”

Cuando el *Plan Collor* fue anunciado, entretanto, y se supo que los ahorros de más de 51 mil *cruzados novos* serían congelados, el peso de la crítica se dirigió desproporcionadamente hacia la ministra Zélia Cardoso⁶⁵. El día 17 de marzo, *O Estado de São Paulo* había publicado un editorial titulado “La primera víctima” por lo cual argumentaba que:

“El presidente Fernando Collor ha dicho varias veces que él sería el ministro de Economía, lo que significaría que él asumiría personalmente la carga de los actos del gobierno. Hay entretanto, actos personales e intransferibles. En esta situación, la responsabilidad del presidente no puede ir más allá de las consecuencias *generales* de las medidas que haya firmado; no se puede transferirle a él el juicio que ahora hacemos de su ministra. Incluso porque, sometido anteriormente a la misma cuestión, el comportamiento del presidente fue correcto- ya no decimos ejemplar, visto que su asesora [Zélia Cardoso] no aprovechó la enseñanza. Él respondió que no él no era un asesor de inversiones, con lo cual dejó al conocimiento o intuición de cada uno de instruirse sobre la decisión de como aplicar su patrimonio. El presidente actuó con imparcialidad que la naturaleza de sus funciones lo imponen; la ministra, al contrario, careció de recato, al inducir con su *experiencia* miles de ciudadanos hacia una inversión que ella haría la menos líquida de todas.” (“ La primera víctima”, p. 3, 17 de marzo de 1990)⁶⁶

El diario de los Mesquita pasaría los días siguientes condenando las medidas del *Plan Collor*, y el presidente pasaría a ser citado cada vez más por su responsabilidad en el confisco de los ahorros, también llamado por el diario como incumplimiento. El 20 de marzo, el diario dijo que “el presidente de la República está, lentamente, subvirtiendo el orden jurídico y sometiendo los ciudadanos a la voluntad del Estado” y criticó fuertemente al presidente por referirse a los que apelan a la justicia con el fin de garantizar la liberación de sus recursos como “aquellos que habían enriquecido de la zaranda financiera”.

Júlio Mesquita, según el Centro de Investigación y Documentación de Historia Contemporánea de Brasil (CPDOC), apuntaba que la solución de los problemas enfrentados por el país pasaba por el crecimiento económico, por el mercado, por la libre empresa y por la

65 El plan de fondo elegido por el diario fue una rueda de prensa, en la cual se le preguntó a la ministra Zélia dónde ella aplicaba sus ahorros. Ella respondió concisamente que aplicaba en el *overnight*, una tasa de interés que remuneraba los depósitos bancarios levemente por arriba de la inflación. La intención del gobierno Collor era de generar un clima de tranquilidad con respecto a la recomposición del poder adquisitivo y a la seguridad del sistema financiero.

66 Traducción propia del original: “O presidente Fernando Collor disse repetidas vezes que seria ele o ministro da Economia, significando com isso que assumiria pessoalmente o ônus dos atos de governo. Há entretanto, atos pessoais e intransferíveis. No caso em tela, a responsabilidade do presidente não pode ir além das consequências *gerais* das medidas que assinou; não se pode transferir a ele o juízo que agora fazemos de sua ministra. Mesmo porque, submetido antes à mesma questão, o comportamento do presidente foi reto- já não diremos exemplar, eis que sua assessora não aproveitou o ensinamento. Respondeu, ele, não ser um consultor de investimentos, com o que deixou à consciência, aos conhecimentos ou à intuição de cada um instruir a decisão sobre como aplicar seu patrimônio. O presidente agiu com a isenção que a natureza de suas funções impunha; à ministra, ao contrário, faltou o mínimo de recato, ao induzir com sua *expertise* milhares de cidadãos a um investimento que ela tornaria o menos líquido de todos.”

retirada de los controles gubernamentales sobre la economía, bien como por la privatización y racionalización de la máquina estatal (Saul, 2009).

Pese las críticas, el apoyo de los Mesquita al gobierno se debió principalmente por el programa de privatizaciones que, apesar de haber sido substancialmente menos amplio que el de Menem, representó un cambio significativo para la agenda neoliberal en el país. No obstante la dificultad que el gobierno tenía en su relación con el Congreso, este (controlado por la oposición) aprobó la Ley 8.031, que autorizó que Collor a privatizar las empresas públicas. Ante la postura sorpresiva del parlamento, *O Estado de São Paulo* reflexionó que:

“Será difícil para el historiador de estos días turbulentos comprender las razones que llevaron el Congreso Nacional a aprobar con enmiendas, que no alteran lo esencial, la medida provisoria que extingue o privatiza las empresas públicas, autarquías y empresas estatales en general, además de otras reparticiones federales. Hasta el fin de semana, se creía que el Congreso estaba en contra de la racionalización de la administración pública. [...] No se puede dejar de señalar que las dichas izquierdas en el Congreso no fueron capaces de asimilar la lección profunda del Plan Brasil Nuevo, que consiste en reducir la capacidad de negociación del sector privado y en aumentar extraordinariamente el poder de fuego del sector público. [...] Esencialmente, las izquierdas no evolucionaron y no percibieron que por haber controlado el factor escaso, que es el dinero, el Estado controló la producción y el consumo, o por lo menos tiene las condiciones para eso.” (“Un Estado más ágil”, p.3, 10 de abril de 1990)⁶⁷

Así como en otros países, fueron los bancos que patrocinaron la compraventa de activos públicos. Entretanto, Collor de Mello había decretado que los bancos serían obligados a reservar 18% de sus reservas y comprar acciones del Estado (o Certificados de Privatización- CPs) para financiar las privatizaciones. En aquel entonces, la Federación Brasileña de Bancos protestó contra la medida y, rápidamente, el diario de los Mesquita afirmarí que:

“Las instituciones financieras tendrán que comprar esos Cps en una cantidad equivalente a 18% de su patrimonio neto el 31 de diciembre de 1989. Se estima que tal obligación deberá representar aproximadamente 3 mil millones de dólares, considerando que si todas las instituciones tuvieran dificultades para cumplir esta obligación, aquellas reservadas a los bancos estatales serán todavía mayores. Los bancos, para cumplir tal imposición, tendrán que endeudarse para comprar acciones estatales. [...] Uno puede temer que las instituciones financieras van a endeudarse sólo para dar placer al presidente Collor de Mello, que está privatizando la

67 Traducción propia del original: “Será difícil ao historiador destes dias conturbados compreender os motivos que levaram o Congresso Nacional a aprovar com emendas, que não alteram o essencial, a medida provisória que extingue ou privatiza empresas públicas, autarquias e empresas estatais em geral, afora outras repartições federais. Até o fim de semana, tinha-se como certo que o Congresso era refratário às providências destinadas a enxugar a máquina burocrática e a racionalizar o funcionamento da administração pública. [...] Não se pode deixar de assinalar que as ditas esquerdas representadas no Congresso não foram capazes de assimilar a lição profunda do Plano Brasil Novo, que consiste em reduzir a capacidade de barganha do setor privado e aumentar extraordinariamente o poder de fogo do setor público. [...] No fundo, as esquerdas não evoluíram e não se aperceberam de que ao controlar o fator escasso, que é o dinheiro, o Estado controlou a produção e o consumo, ou pelo menos tem as condições para tanto.” (“Um Estado mais ágil”, p.3, 10 de abril de 1990)

economía. Será posible llegar, sin embargo, a una desestabilización del sistema financiero, lo que podrá conducir a una total estatización del sector. [...] Privatización es un proceso que se hace mediante el juego de libre mercado y no por fuerza de un proceso obligatorio que puede ampliar la estatización.” (“Un paso más hacia la estatización”, p. 3, 17 de mayo de 1990⁶⁸)

Es posible notar que la estatización, para el diario, sucedía cuando las medidas de Estado desagradaban a las federaciones más importantes (que en este capítulo están simbolizados principalmente por la Fiesp y la Febraban). Los términos *estatización* o *estatizador*, pese que son utilizados como contrarios al paradigma neoliberal, estuvieron muy relacionados con políticas estatales anti-mercado y no necesariamente con un poder creciente del Estado (como aparato institucional), ya que las privatizaciones ocurrieron principalmente por causa de la mano dura del Estado que estuvo operando en el combate a la oposición sindical.

Uno de los ejemplos de prácticas que el diario creía ser estatizantes es la intervención que el Estado ejercía para endosar las negociaciones entre empresarios y trabajadores. El flamante gobierno intentó aprobar una ley salarial que delegaba a los convenios laborales la responsabilidad de fijar salarios, sin la necesidad que el gobierno las endosara. La ley experimentaba dificultades para ser aprobada, mientras *O Estado de São Paulo* la sostenía, diciendo que:

“El Legislativo parece actuar como vocero de las presiones de los sindicatos obreros e incluso de los patronales que ahora están en contra de la negociación de los salarios. No debe sorprender que a muchos empresarios siempre les gustó la protección gubernamental [...], pueden estar desesperados cuando se trata de asumir responsabilidades, enfrentar a los sindicatos o reducir sus ganancias cuando, hasta el momento, estaban siendo protegidos por el gobierno que, fijando los salarios, les daba oportunidad de aumentar los precios. [...] Uno puede admitir, en una etapa inicial del combate a la inflación, una intervención para impedir el círculo infernal precios/salarios, pero sólo con la libertad, en el juego de libre mercado, se lograrán los mejores resultados para los asalariados.” (Ley salarial o demagogía?, 19 de mayo de 1990)⁶⁹

68 Tradución propia del original: “As instituição financeiras terão que comprar esses Cps [Certificados de Privatização] num montante equivalente a 18% do seu patrimônio líquido em 31 de dezembro de 1989. Calcula-se que tal obrigação deverá representar cerca de três bilhões de dólares, sabendo-se que se todas as instituições terão dificuldades para cumprir tal obrigação, aquelas reservadas aos bancos estatais serão ainda maiores. Os bancos, para atender a tal imposição, terão certamente de se endividar para comprar ações estatais. [...] Pode-se reear que as instituições financeiras cheguem a se endividar para apenas dar prazer ao presidente Collor de Mello, que está privatizando a economia. Poder-se-á chegar, no entanto, a uma desestabilização do sistema financeiro, o que, ao se continuar neste caminho conduzirá a uma total estatização do setor. [...] Privatização é um processo que se faz através do livre jogo do mercado e não por força de um processo compulsório que pode chegar a ampliar a estatização.” (Mais um passo para a estatização, p.3, 17 de maio de 1990)

69 Traducción propia del original: “O Legislativo parece atuar como caixa de ressonância da pressão dos sindicatos operários e até dos próprios patrões, que ora se insurgem contra a liberdade de negociação dos salarios. Não se deve estranhar que empresários, que em grande escala sempre apreciaram a proteção governamental [...], possam ficar apavorados quando se trata de assumir responsabilidades, enfrentar os

Algunos empresarios, en especial los pequeños y medianos se beneficiaban de la intervención del Estado sobre los convenios laborales. Por supuesto estos buscaban evitar el desgaste con los sindicatos obreros. Sin embargo, las federaciones o grandes empresas no se ponían en contra de la ley de carácter liberalizante, ya que estas tenían una mayor capacidad de afrontar a los sindicatos. Es posible que el diario haya puesto el escenario de esta forma para situarse arriba de los intereses en pugna, ya que él estuvo hace tiempo asociado a los intereses capitalistas.

CUT

Ya sobre la oposición política, no era nueva la perspectiva hostil del diario de los Mesquita hacia el sindicalismo. Entretanto, la elección de Collor de Mello y la busca de implementar y consolidar el neoliberalismo en Brasil produjo una serie de movilizaciones sindicales de los sectores del movimiento obrero directamente afectados por los recortes presupuestarios y proyectos de privatización de empresas estatales. Así, no fue extraño que durante el recorte temporal de este trabajo, se registraran paros y huelgas generales.

O Estado de São Paulo, pese las críticas sobre algunos aspectos de las políticas de Collor, se mantuvo intransigente contra cualquier movimiento de trabajadores. El rol del diario era evidente: blindar al proyecto oficialista de privatizaciones y de reformas laboral y administrativa, además de fomentar la criminalización de los movimientos sociales (en especial los sindicatos) por medio de sus editoriales.

Visto que hasta el momento no hay investigaciones académicas sobre alguna presunta participación de la cúpula sindical en las medidas de represión durante la última dictadura en Brasil (como lo hay en Argentina), no se encuentra en los editoriales de *O Estado de São Paulo* una asociación entre el sindicalismo y la dictadura cívico-militar. Los usos que el diario de los Mesquita hace da al pasado están relacionados más firmemente con el varguismo.

Es notorio que, pese que el movimiento laboral brasileño no tuvo el grado de desarrollo del argentino durante los populismos latinoamericanos de las décadas de 30 y 40, el gobierno de Vargas representó un marco relevante dentro del sindicalismo de Brasil. Dado

sindicatos ou reduzir seus lucros quando, até agora, vinham sendo protegidos pelo governo que, fixando os salários, dava-lhes oportunidade de aumentar seus preços.[...] Pode-se admitir, numa fase inicial de combate à inflação, uma intervenção para impedir o círculo infernal preços/salários, mas será na liberdade, no livre jogo do mercado, que se conseguirão os melhores resultados para os assalariados.” (Lei salarial ou demagogia?, p.3, 19 de mayo de 1990)

que el varguismo, que poseía una evidente inspiración fascista, acosó física y psicológicamente toda y cualquier oposición política e impuso censura a los diarios opositores, entre los cuales *O Estado de São Paulo*.

La represión impactó también al movimiento sindical, que fue sometido a intensos controles por parte del Estado. Las conquistas sociales y derechos laborales obtenidos durante la dictadura varguista tuvieron que pasar por el escrutinio estatal. Entretanto, el sólo hecho de que los avances sociales hayan ocurrido, como el derecho al sueldo mínimo, a la jornada laboral de ocho horas, a vacaciones pagadas, a descanso pagado y a un sistema de jubilación, para mencionar algunos.

Esas medidas fueron suficiente para que el *O Estado de São Paulo* desarrollara una visión todavía más negativa hacia el gobierno de Vargas y asociara la dictadura varguista al movimiento sindicalismo, como si los dos fueran dos ramas de un mismo poder. Aunque el varguismo no haya logrado perpetuarse a través de los partidos venideros, *O Estado de São Paulo* continuó a alimentar esa asociación.

Así, cuando los reclamos sindicales desbordaban en huelgas y piquetes, violentos o pacíficos, la memoria discursiva era activada, y el pasado de autoritarismo político se ponía como causa directa de los conflictos supuestamente provocados por los sindicatos. Es como si para *O Estado de São Paulo* el varguismo fuera el “ya dicho” (Pêcheux, 199), es decir, el elemento previo que asignaría sentido a una reflexión del diario haría en contra de los huelguistas.

Definido este “ya dicho”, los trabajadores pasarían a ser objetos del discurso mediático como elemento *consecuente* del autoritarismo varguista que vigoraba hacía algunas décadas. Esa elaboración mental estuvo presente en algunos editoriales trabajados en esta investigación, como se puede percibir más adelante.

Con la apertura democrática, los institutos de encuestas adquirieron una gran importancia. Los principales de aquel entonces eran el IBOPE⁷⁰, que también tiene presencia en Argentina, siendo la principal empresa medidora del *rating* de radio y televisión y el DataFolha⁷¹. *O Estado de São Paulo* aprovechó muy bien la opinión pública contra las

70 Sigla para Instituto brasileño de opinión pública y estadística.

71 Perteneciente al grupo Folha de São Paulo, uno de los mayores hasta entonces.

huelgas⁷² y siempre que lo podía, utilizaba el resultado de las encuestas sobre temas ligados a apoyo gubernamental y perspectiva sobre los huelguistas.

De esta suerte fue muy común comentarios como el que sigue:

“Como toda la sociedad brasileña, la CUT recibe señales evidentes de que el huelguismo político no es bienvenido en el actual panorama político nacional. Todos los institutos de encuestas serios ya comprobaron la indignación de la mayoría de la población contra el intento impenitente de la CUT y del PT de transformar el legítimo instrumento del paro laboral en una arma ilegítima de presión política y en un veneno corrosivo para el organismo todavía débil del régimen democrático.” (“La marcha hacia el entendimiento”, p. 3, 23 de septiembre de 1990)⁷³

Y más ampliamente como el que sigue:

“La oposición, particularmente la izquierda, continua impermeable a la realidad, si se considera los comentarios del presidente nacional del PT, el diputado Luiz Ignácio Lula da Silva que, además de no aceptar como válidos los resultados de la encuesta [del Ibope], insiste en la necesidad de la ola huelguista como único camino para garantizar un salario justo para los trabajadores. Pero la retórica perseverante de los petistas [partidarios del PT] continua incapaz de ocultar la verdad elemental del rechazo mayoritario de la opinión pública a la táctica de la convulsión social empleada por el PT para la lograr improbables beneficios electorales. [...] El apoyo a Collor y la condena a la ola huelguista inflada por la CUT son las dos extremidades de la misma cuerda de cordura política adoptado por la sociedad brasileña: la fe en la modernización del País y el rechazo a los partidarios del caos que, directamente interesados en la catástrofe, piensan que tienen el derecho de obtener ventajas particulares de la desgracia colectiva.” (“Rechazo a los partidarios del caos”, p. 3, 09 de septiembre de 1990)⁷⁴

Para que se ponga esta perspectiva del diario de forma analítica, es necesario tomar los conflictos laborales de modo individualizado. En marzo de 1991 estallaron a la vez dos

72 Hay que considerar que los años 1990 iniciaría una serie de derrotas de los sindicatos y proyectos de (centro) izquierda.

73 Traducción propia del original: “Como toda a sociedade brasileira, a CUT tem recebido sinais evidentes de que o grevismo político não é bem-vindo no atual panorama político nacional. Todos os institutos de pesquisa de opinião sérios já comprovaram a indignação da maioria da população contra a tentativa impenitente da CUT e do PT de transformar o legítimo instrumento da paralisação do trabalho numa arma ilegítima de pressão política e num veneno corrosivo para o organismo ainda débil do regime democrático.” (“A marcha para o entendimento”, p. 3, 23 de setembro de 1990)

74 Traducción propia del original: “A oposição, particularmente a esquerda, continua impermeável à realidade, a julgar pelos comentários do presidente nacional do PT, deputado Luiz Ignácio Lula da Silva, que, além de não aceitar como válidos os resultados da pesquisa, insiste na necessidade da onda grevista como única via para garantir salário justo para os trabalhadores. Mas a perseverante retórica de lua-preta dos petistas continua incapaz de ocultar a verdade elemental da reprovação majoritária da opinião pública à tática da convulsão social empregada pelo PT para à obtenção de improváveis lucros eleitorais [...] O apoio a Collor e a condenação à onda grevista insuflada pela CUT são as duas extremidades do mesmo cordão de sanidade política adotado pela sociedade brasileira: a fé na modernização do País e a repulsa aos partidários do caos que, diretamente interessados na catástrofe, se julgam no direito de obter vantagens particulares da desgraça coletiva.” (“Repulsa aos partidários do caos”, p. 3, 09 de setembro de 1990)

importantes huelgas: una de los petroleros de la estatal *Petrobrás* y otra de los trabajadores de transporte municipal de São Paulo, la mayor metrópoli del país. Para el diario:

“Pensando en el sufrimiento impuesto a la población, hay que condenar las intenciones corporativistas de un grupo de dirigentes sindicales interesados solamente en su propia promoción política. [...] Las dos huelgas mencionadas [...] pone de relieve el grado de audacia de los beneficiarios de la podrida estructura corporativa del sindicalismo brasileño. [...] En ambas [huelgas], el sindicalismo presentó a la sociedad su cara más tacaña. Es difícil hacer comparaciones del género, pero será más difícil todavía encontrar en países menos desarrollados que Brasil una organización tan atrasada y tan cruelmente orientada para alcanzar solamente sus propios objetivos como la máquina montada por Getúlio Vargas durante el *Estado Novo* para someter los trabajadores a los dictámenes políticos de los grupos que suelen robar el Estado brasileño. Lo que lleva al sindicalismo pregonado por la CUT- y realizado, en la práctica, en las huelgas de los petroleros y de los choferes y colectores de autobuses de São Paulo- a esos niveles de insensibilidad es el vicio politiquero en sus actividades. Y la palabra politiquero necesita ser utilizada en todo su sentido negativo. Pues lo que la CUT hace es acción política mal disfrazada afin de defender los intereses de parte de los obreros. No es, entretanto, política de alto nivel, considerando la dinámica de los intereses en pugna, actividad saludable y fundamental en un régimen democrático que busque funcionar correctamente. La política practicada por los sindicalistas de la CUT es vil y define la mezquindad de los intereses subalternos de personas interesadas solamente en el poder y promociones personales. [...] Ese tipo de actitud muestra, claramente, que Brasil no logra adaptarse a la modernidad. Hay que denunciar y combatir, con todo vigor, esa política suicida con lo que el sindicalismo corporativista de la CUT busca empujar Brasil para el sufrimiento provocado por el atraso, por la miseria y por la ignorancia de líderes inexpertos.” (“La huelga más cruel”, p.3, 28 de marzo de 1991)⁷⁵

Los usos que el diario hizo del pasado no estuvieron sólo relacionados con el varguismo. La experiencia socialista de la Unión Soviética también sirvió como un trasfondo para combatir ideológicamente los sindicatos opositores, en especial los huelguistas. El inicio de la década de 1990 estuvo marcada por el colapso de la URSS y por el debilitamiento político de las ideas (centro) izquierdistas a nivel internacional.

75 Traducción propia del original: “Pensando no sofrimento imposto à população, devem condenar-se as intenções corporativistas de um grupo de dirigentes sindicais interessados apenas na própria promoção política. [...] As duas greves citadas [...] evidenciam o grau de ousadia dos beneficiários da carcomida estrutura corporativa do sindicalismo brasileiro. [...] Em ambas , o sindicalismo exibiu à sociedade sua face mais tacaña. É difícil fazer comparações do gênero, mas será mais difícil encontrar em países menos desenvolvidos que o Brasil uma organização tão atrasada e tão cruelmente voltada para atingir apenas os próprios objetivos como a máquina montada por Getúlio Vargas no Estado Novo para submeter os trabalhadores aos ditames políticos dos grupos que costumam assaltar o Estado brasileiro. O que leva o sindicalismo pregado pela CUT- e realizado, na prática, nas greves dos petroleiros e dos motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo- a esses níveis de insensibilidade é o “vezo” politiqueiro de suas atividades. E a palavra politiqueiro precisa ser utilizada em toda sua carga de significado negativo. Pois o que a CUT faz é ação política mal encoberta pela defesa dos interesses de parte do operariado. Não é, porém, política de nível, levando em conta a dinâmica dos interesses em choque, atividade salutar e fundamental num regime democrático que pretenda funcionar a contento. A política praticada pelos sindicalistas da CUT é baixa e define a mesquinhez dos interesses subalternos de pessoas interessadas apenas em poder e promoção pessoais. [...] Esse tipo de atitude mostra, claramente, que o Brasil não consegue adaptar-se à modernidade. É preciso denunciar e combater, como todo o vigor, essa política suicida com que o sindicalismo corporativista da CUT pretende empurrar o Brasil para o sofrimento provocado pelo atraso, pela miséria e pela ignorância de lideranças malformadas.” (“A greve mais cruel”, p. 3, 28 de marzo de 1991).

O Estado de São Paulo hacía referencia al pasado de guerras y de violaciones a las libertades individuales que marcó el siglo XX para construir otro “ya dicho” (Pêcheux, 1999), es decir, outro elemento previo para construir una crítica a los huelguistas. Como la URSS también violó libertades individuales operó basada en el autoritarismo político y acoso de los opositores, la ideología política de los sindicalistas de la CUT pasaría a ser relacionada con este pasado de violento y dictatorial. El editorial “la huelga de los 90 días” demuestra bien este punto cuando el diario afirma que:

“Si el gobierno cede en la confrontación con los petroleros, él habrá admitido que no tiene condiciones de afrontar el contubernio de los burócratas con el militares y las fuerzas de reserva ya que aquellos pisan que pueden cerrar Brasil a las influencias liberalizantes de la última década del siglo, además de que algunos empresarios imaginan que será eterno el disfrute de las situaciones creadas por el nacionalismo oligárquico de los años 50. Si, por lo contrario, el *soviet* de Petrobrás impusiere su voluntad a los directores de la empresa [...], estarán consolidadas las posiciones de la oligarquía, y el proyecto de privatización de las empresas estatales, las cuales, así como en la URSS y en Europa Central, llevaron la economía nacional al casi desastre, habrá naufragado.” (La huelga de los 90 días, 15 de junho de 1990)⁷⁶

La desproporcionalidad del discurso del diario hacia la huelgas es notable y frecuente. Dado que todos los editoriales desde 15 de marzo de 1990 fueron analizados para el propósito de este trabajo, se puede afirmar sencillamente que el número de editoriales escritos para criticar los huelguistas fue significativo. Aquí fueron seleccionados los que tuvieron una argumentación más elaborada en contra del accionar de los sindicatos, aunque fuertemente cargados de un aspecto emocional. El que sigue, trata de un análisis que el diario hace sobre una huelga general organizada por la CUT:

“Este no es el momento [...] para exigir consistencia de un gobierno que demostró no tenerla, sino para advertirle de las graves consecuencias que podrán advenir para el País y la estabilidad institucional si él no supiere afrontar el desafío que fue lanzado por la CUT (y hasta el momento, todavía no por la CGT) en contra de la ejecución del plan “Brasil Nuevo” en lo que se refiere al saneamiento administrativo de las empresas estatales. [...] El gobierno comete un error estratégico al suponer que la huelga general que se articula para el día 6 es en contra los empresarios que despiden a los trabajadores. Estrictamente hablando, la huelga general que está programada (y esperamos que malogre como muchas otras antes) es dirigida no en contra los empresarios como supone el Ejecutivo, sino en contra el plan de estabilización, que trae implícita, en sus premisas, desarrollo y conclusiones, la recesión. Animado por el deseo de normalizar la administración de las empresas estatales, el Ejecutivo se ve forzado a despidos en el sector público, pero se queja del sector privado que no haga lo mismo. En su postura, como todos los que acompañan

76 Traducción props del original: “Se o governo vier a ceder no confronto com os petroleiros, terá admitido que não tem como fazer face ao contubérnio dos burocratas com os militares da reserva e muitos da ativa que pensam possível fechar o Brasil às influências liberalizantes da última década do século, além de com empresários que imaginam que será eterno o desfrute das situações criadas pelo nacionalismo oligárquico dos anos 50. Se, pelo contrário, o *soviet* da Petrobrás vier a impor a sua vontade à direção da empresa [...], estarão consolidadas as posições da oligarquia, e o projeto de privatização das empresas estatais, as quais, aqui como na URSS e na Europa Central, conduziram a economia nacional ao quase desastre, terá naufragado.” (A greve dos 90 dias, 15 de junho de 1990).

la lucha sindical saben muy bien, apuntan para un único camino: el endurecimiento de la CUT en contra de los empresarios para, vía confrontación con la empresa privada, derrotar al plan del gobierno. [...] El Ejecutivo federal, ya impotente, toma el riesgo de perder la autoridad si él no supiere administrar con inteligencia el conflicto y, *sin ceder un milímetro en su determinación de sanear las empresas estatales*, no pudiere poner un fin a la huelga. Las empresas privadas, especialmente las fabricantes de vehículos, blanco de la especial ojeriza gubernamental, están a merced de lo que decidir el Ejecutivo y de lo que hicieren los trabajadores. En una u otra situación, lo que se arriesga es la viabilidad del plan “Brasil Nuevo”. Es necesario que se tome conciencia de que la lucha fue lanzada en contra el gobierno Collor de Mello, y que si él no supiere enfrentar el desafío con la razón y la autoridad que se le dio el electorado, todos los sacrificios hechos hasta ahora habrán sido en vano.[...] Lo fundamental, en este momento, es que el Ejecutivo tenga en cuenta que él no puede volver atrás en su decisión de sanear las estatales.” (“No titubear”. p. 3 27 de mayo de 1990)⁷⁷

Lo más interesante es que, de hecho, la lucha sindical en aquel año no era sólo en contra de los empresarios de forma general, sino en contra del plan Brasil Nuevo (o Plan Collor, ya explicado anteriormente). Como está documentalmente presentado en los registros de las asambleas de la CUT, el objetivo de los paros y huelgas en aquel momento era frenar los impactos del Plan Collor. Para la central obrera:

“Bajo el pretexto de reducir a cero la inflación, el gobierno hizo un paquete económico que redujo los salarios, aumentó el desempleo, secuestró las economías de miles de pequeños ahorristas, violando la democracia y desorganizando la economía. La inflación no acabó y lo que está en vigor es un modelo económico ortodoxo, de inspiración neoliberal, basado en la receta neoliberal.”⁷⁸ (Manifiesto a la clase obrera y a la población, p.1, 1990)

77 Traducción propia del original: “Este não é o momento [...] para cobrar coerência de um governo que demonstrou não tê-la, mas adverti-lo das graves consequências que poderão advir para o País e a estabilidade institucional se não souber enfrentar o desafio que foi lançado pela CUT (e até agora, ainda não pela CGT) contra a execução do plano “Brasil Novo” no que se refere ao saneamento administrativo das empresas estatais. [...] O governo incorre em erro estratégico ao supor que a greve geral que se articula para o dia 6 é contra os empresários que demitem trabalhadores. A rigor, a greve geral que está programada (e que esperamos malogre como muitas outras anteriores) é dirigida não contra os empresários como supõe o Executivo [...], mas contra o plano de estabilização, que traz implícita, em suas premissas, desenvolvimento e conclusões, a recessão. Animado do desejo de normalizar a administração das empresas estatais, o Executivo se vê forçado a demitir no setor público, mas reclama do setor privado que nada faça de semelhante. Essa postura, como todos os que acompanham a luta sindical sabem muito bem, aponta para um único caminho: o endurecimento da CUT contra os empresários para, via confronto com a empresa privada, derrotar o plano do governo. [...] O Executivo federal, já inerme, corre o risco de perder a autoridade se não souber administrar com inteligência o conflito e, *sem ceder um milímetro na sua determinação de sanear as empresas estatais*, não puder colocar fim à greve. As empresas privadas, especialmente as montadoras, alvo da especial ojeriza governamental, estão à mercê do que decidir o Executivo e do que fizerem os trabalhadores. Numa e noutra situação, o que se joga é a viabilidade do plano “Brasil Novo”. É preciso que se tome consciência de que a luta foi lançada contra o governo Collor de Mello, e que se ele não a levantar e souber enfrentar o desafio com a razão e a autoridade que lhe conferiu o eleitorado, todos os sacrificios feitos até agora terão sido em vão. [...] O fundamental, no momento, é que o Executivo tenha presente que não pode voltar atrás em sua decisão de sanear as estatais.” (“Não fraquejar”, p. 3, 27 de mayo de 1990)

78 Traducción propia del original: “Sob o pretexto de zerar a inflação, o governo fez um pacote econômico que arrochou os salarios, aumentou o desemprego e seqüestrou as economias de milhares de pequenos poupadores, violentando a democracia e desorganizando a economia. A inflação não acabou e o que está em vigor é um modelo econômico ortodoxo, de inspiração neoliberal, baseado no receituário do FMI “ (Resoluções da plenária nacional da CUT, 1990)

Cabe decir, sin embargo, que *O Estado de São Paulo* no tenía una perspectiva propiamente más elaborada que el gobierno sobre el conflicto laboral. Una de las razones por la cuales el gobierno tuvo en aquel entonces una postura menos hostil hacia los sindicatos está relacionada con la composición del Congreso nacional tras las elecciones de 1990. Como los partidos de centro (en especial los que fueron creados tras la disolución del MDB, el partido de la democracia) ocuparon un significativo número de bancas, el gobierno fue obligado a negociar una serie de puntos de su programa electoral.

Pese estas restricciones, el gobierno era consciente de que la estrategia de la CUT pasaba por la debilitación de los empresarios en los conflictos locales de cada empresa para imponer una derrota al Plan Collor. *O Estado de São Paulo* también asignaba a la oposición derrotada en las elecciones de 1989 su responsabilidad en las protestas. Esto se dio concretamente el 23 de mayo de 1990, tras dos meses de la asunción de Collor. Según el diario:

“Una huelga ilegal - una más- paraliza el transporte colectivo en la mayor ciudad del País. Resulta que el Brasil no cambia. Modifícase la composición de los gobernantes en todos los niveles y, año tras año, hace mucho tiempo, la población queda a merced de los caprichos de la voluntad de pequeños grupos comprometidos a acosarla, con la intención de llamar la atención y otorgar a sus integrantes importancia política que si no fuera ese tipo de accionar *guerrillero* no tendría importancia mediática [...] Hace mucho tiempo que las huelgas manifiestamente ilegales sólo traen riesgos y perjuicios para el pueblo y recompensan sistemáticamente a los que las organizan, sabiendo inmediatamente que todo será lucro: u obtienen el cumplimiento de sus reclamos programados o vuelven a trabajar, como si nada hubiera pasado. Todo nos hace creer que esta vez no será diferente. Después de todo, el presidente del directorio municipal del PT está involucrado en en movimiento y lo impulsa. (Huelga municipal, en contra el gobierno federal”, p.3, 23 de mayo de 1990)”⁷⁹

O Estado de São Paulo, además, enfatizó que había una relación casi intrínseca entre la central obrera CUT y el Partido de los Trabajadores (derrotado en las elecciones de 1989). En diferentes ocasiones el diario cuestionó si la CUT era la rama sincinal del PT o si el PT era la rama política de la CUT. En una de estas críticas, el diario reclamaba que:

“Los días que se detienen y los patrimonios públicos o privados depredados por los huelguistas de la CUT son, un día más un día menos, siempre cobrados del propio

79 Traducción propia del original: “Uma greve ilegal- mais uma- paralisa o transporte coletivo nesta que é a maior cidade do País. Verifica-se que o Brasil não muda. Altera-se a composição dos quadros governantes em todos os níveis e, ano após ano, há muito tempo, a população fica entregue aos caprichos da vontade de grupelhos empenhados em atazaná-la, no propósito de chamar atenção e conceder a seus integrantes importância política que se não fosse essa espécie de ação *guerrilheira* não seria objeto do noticiário de jornais e emissoras. [...] Não é de hoje que greves manifestamente ilegais só trazem riscos e prejuízos para o povo e premiam sistematicamente os que as empreendem, sabendo desde logo que tudo será lucro: ou obtêm o atendimento das reivindicações programadas ou voltam ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Tudo faz crer que desta vez não será diferente. Afinal, o presidente do Diretório Municipal do PT está envolvido no movimento e o prestigia.” (“Greve municipal, contra o governo federal”, p.3, 23 de mayo de 1990).

trabajador que, cada vez más, principalmente en un momento de crisis económica como la actual, tiene conciencia del volumen de la cuenta que se presentará a sí mismo. La conciencia que la cuenta tendrá, al final, de ser paga por todos y que a nadie interesa venir a hincharse todavía más ciertamente terminará por traer otra certeza al proletariado brasileño: la paz social siempre traerá más beneficios sacados de la fuerza por los movimientos de paros preferidos por la CUT. Después de todo, la propia CUT, involucrada en el juego político clásico como rama sindical del PT, es el único segmento social que saca ventajas de esas huelgas impopulares. [...] La gran mayoría de la población (74% según la encuesta del Ibope [Instituto Brasileño de Opinión pública y Estadística] revelado el mismo día que la central obrera decidió llamar a la huelga general) apoya la política de estabilización de la economía del presidente Fernando Collor de Mello. La opinión pública da al gobierno federal la necesaria fuerza política para el afrontamiento de la eventual huelga general llamada por la CUT de la forma que más le convenga.” (“El neopeleguismo de la CUT”, p.3, 29 de mayo de 1990)⁸⁰

Y continuando por esta línea:

“El Encuentro Nacional de la Central Única de Trabajadores demostró a fondo que la intención de la CUT es radicalizar todavía más el movimiento sindical, hasta crear condiciones favorables para la movilización de la huelga general. [...] La CUT simula defender a los trabajadores de la violencia del gobierno, que según ellos es la reducción salarial. Es curioso, sin embargo, que la CUT enfoca su actuación en los sindicatos que congregan los empleados de empresas estatales y proveedores de servicios públicos. Los efectos nocivos de huelgas en estos sectores recaen directamente sobre la población, nunca exclusivamente sobre los empresarios, porque quien los contrata es el gobierno. Será que este tipo de accionar, cuidadosamente articulado a lo largo del tiempo y que involucra militantes específicamente entrenado, realmente orientado para el tema salarial o tendrá propósitos eminentemente políticos? El líder sindical Luiz Antônio Medeiros garantiza que la inspiración de la CUT es política. Y denuncia la radicalización de la campaña salarial de los trabajadores bancarios, químicos y petroleros como forma de mejorar las posibilidades de los candidato del PT para las elecciones de octubre. El PT, rama política de la CUT- ¿o será la CUT la rama sindical del PT?- recién pasó por una experiencia electoral fracasada. Sus propuestas de transformación radical de los sistemas político y social fueron democráticamente rechazados en las urnas.” (“El rigor que el momento exige”, 21 de agosto de 1990)⁸¹

80 Traducción propia del original: “Os dias parados e os patrimônios públicos ou privados depredados pelos grevistas da CUT são, mais dia menos dia, sempre cobrados do próprio trabalhador, que, cada vez mais, principalmente num momento de crise econômica como o atual, tem consciência do volume da conta a ser apresentada a ele mesmo. A consciência de que a conta terá, no fim, de ser paga por todos e que a ninguém interessa vir ela a se avolumar ainda mais certamente terminará por trazer outra certeza ao proletariado brasileiro: a paz social sempre trará mais benefícios arrancados a fórceps pelos movimentos de paralisação preferidos pela CUT. Afinal, a própria CUT, envolvida no jogo político clássico como braço sindical do PT, é o único segmento social a tirar vantagem dessas greves impopulares. [...] A grande maioria da população (74%, segundo pesquisa do Ibope divulgada no mesmo dia em que a central resolveu convocar a greve geral) apóia a política de estabilização da economia do presidente Fernando Collor de Mello. A opinião pública está dando ao governo federal a necessária força política para o enfrentamento da eventual greve geral convocada pela CUT da forma que melhor lhe convier.” (“O neopeleguismo da CUT”, p. 3, 29 de mayo de 1990)

81 Traducción propia del original: “O Encontro Nacional da Central Única dos Trabalhadores demonstrou cabalmente que o intuito da CUT é radicalizar ainda mais o movimento sindical, até criar condições propícias para a mobilização da greve geral. [...] A CUT simula defender os trabalhadores da violência do governo, que diz ser o arrocho salarial. É curioso, no entanto, que concentre sua atuação nos sindicatos que congregam servidores em empresas estatais e prestadoras de serviços públicos. Os efeitos danosos de greves nesses setores recaem diretamente sobre a população, nunca exclusivamente sobre os empregadores, porque quem

La distancia entre las fechas de un editorial al otro transmite bien esa inquietud de *O Estado de São Paulo* sobre el vínculo entre el Partido de los Trabajadores y de Central Única de los Trabajadores:

“El debate sobre si la CUT es la rama sindical del PT o si el PT es la rama política de la CUT siempre estará abierto. De cualquier manera, las entidades son hermanas siamesas y el crecimiento o caída del prestigio de una hace aumentar o decrecer el de la otra. Este hecho, hace tiempo entrevisto por algunos, hoy es de “dominio público”. El mensaje que la CUT y el PT buscaron transmitir en un tiempo de inflación sin control y de ausencia de autoridad del Ejecutivo federal permitía que la desesperación ocupara el lugar de la convicción en los destinos del País. [...] La derrota del señor Luiz Ignácio Lula da Silva fue un punto de inflexión en el proceso político brasileño, no apenas porque significó el revés de una propuesta política que el mundo socialista rechazaba- y que hoy ni quiere oír hablar de ella-, pero paradójicamente el triunfo del deseo de cambio de las costumbres políticas. Los que votaron a Collor de Mello o Lula da Silva querían que Brasil *cambiara*, para unos tomando el camino de la modernidad, para otros el del perfeccionamiento (como se fuere posible) del populismo estatizante que nos há desgraciado. La CUT no há percibido esse hecho; no aprendió las lecciones de la circunstancia rara de haber 31 millones de votos pro-Lula desaparecido de las calles. En suma, ni la central ni el PT tuvieron la sensibilidad para verificar que, asó como se exigió en las urnas que los métodos políticos fueran alterados, era necesario asignar a la lucha sindical nuevos caminos y utilizar un nuevo lenguaje.” (“El dilema de la CUT”, p.3, 18 de septiembre de 1990)⁸²

Básicamente todos los conflictos laborales que resultaban en paros o huelgas (durante el presente recorte temporal) fueron tratados por el diario como movimientos partidarios para beneficiar el Partido de los Trabajadores, o como una forma de desestabilizar la flamante democracia, o como una pura expresión de apatía del sindicalismo hacia el resto de la

emprega é o governo. Será esse tipo de ação, cuidadosamente articulado ao longo do tempo e que envolve militantes especificamente treinados, realmente voltado para a questão salarial ou terá fins eminentemente políticos? O líder sindical Luiz Antônio Medeiros garante que a inspiração da CUT é política. E denuncia a radicalização da campanha salarial dos bancários, químicos e petroleiros como forma de melhorar as possibilidades dos candidatos do PT às eleições de outubro. O PT, braço político da CUT- ou será a CUT o braço sindical do PT?-, acaba de sair de uma experiência eleitoral frustrada. Suas propostas de transformação radical dos sistemas político e social foram democraticamente rejeitadas nas urnas." (O rigor que a hora exige, p. 3, 21 de agosto de 1990)

82 Traducción propia del original: “Estará sempre aberto o debate para saber se a CUT é o braço sindical do PT ou o partido, o braço político da central sindical. De qualquer maneira, as entidades são irmãs siamesas e o crescimento ou queda do prestígio de uma faz aumentar ou diminuir o da outra. O fato, há tempos vislumbrado por poucos, hoje faz parte do "domínio público". A mensagem que a CUT e o PT procuraram transmitir numa época de inflação sem controle e de ausência de autoridade no Executivo federal permitia que a desesperança ocupasse o lugar da crença nos destinos do País. [...] A derrota do sr. Luiz Ignácio Lula da Silva foi um ponto de inflexão no processo político brasileiro, não apenas porque significou o revés de uma proposta política que o mundo socialista rejeitava-e hoje nem quer ouvir falar dela-, mas paradoxalmente o triunfo do desejo de mudança de costumes políticos. Os que votaram Collor de Mello ou Lula da Silva queriam que o Brasil *mudasse*, para uns tomando o caminho da modernidade, para outros, o do aperfeiçoamento (como se possível fosse) do populismo estatizante que nos desgraçou. A CUT não soube perceber esse fato; não soube tirar as lições da circunstância estranha de os 31 milhões de votos dados ao candidato do PT haverem desaparecido das ruas. Em suma, nem a central nem o PT tiveram sensibilidade para verificar que, assim como se exigiu nas urnas que os métodos políticos fossem alterados, era preciso imprimir à luta sindical novos rumos e usar nova linguagem.” (O dilema da CUT, 18 de septiembre de 1990)

población. No había solamente una expresión de insatisfacción por parte de los huelguistas de diferentes sectores que lograra un abordaje positivo de *O Estado de São Paulo*.

Un caso emblemático fue la huelga de los obreros de la CSN (Compañía Siderúrgica Nacional) en julio de 1990. La empresa estatal, que fue creada durante el gobierno Vargas en los años 1940 para suministrar acero para los aliados durante la Segunda Guerra, es una de las más antiguas del país y fue el escenario de sangrientos enfrentamientos durante la última dictadura militar, a finales de los años 1980.

El escenario de la redemocratización se mostró menos violento para el sindicato, pero no menos desafiante. De acuerdo con Dias y Oliveira (2018), en 1990, durante el gobierno Fernando Collor de Mello, el plan de reestructuración y saneamiento de la empresa (CSN) preveía el despido de 4 mil trabajadores directos y 2 mil trabajadores subcontractados. Como respuesta a la reestructuración de la empresa, los trabajadores convocaron una huelga. Poco tiempo después el diario de los Mesquita había publicado un editorial, según lo cual:

“Esos “guerrilleros” sindicales no son capaces de percibir que los tiempos cambian y que las empresas multinacionales, que ellos ahora atacan además de hacerlas su blanco preferido de acción, son aquellas que buscan introducir en el País un ambiente interno de trabajo que es lo que más se acerca de lo que existe en los países industrializados. Uno tiene la impresión, llevando en cuenta las empresas que la CUT y el PT eligieron para testar su nueva forma de huelga, que los energúmenos y provocadores que están dirigiendo este movimiento desean mostrar a las matrices de las empresas de montaje y de otras que el Brasil no es un país saludable para el capital extranjero. [...] Es comprensible que el señor Luiz Ignácio Lula da Silva, frustrado con su experiencia parlamentaria, herido por su derrota, quiera destruir el Plan Brasil Nuevo por estos medios- las huelgas en la Ford y en la CSN, las tomas de los edificios del Incra [Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria], de tierras etc [...] (“Destruyendo el futuro”, p. 3, 27 de julio de 1990)⁸³

En esta cita, el diario menciona la Ford porque entre junio y julio de 1990, los trabajadores de esta fabricante de automóviles (que entre 1987 y 1996 se fusionó con Volkswagen, tanto en Brasil como en Argentina, resultando en el surgimiento de Autolatina) organizaron una huelga que tardó aproximadamente 50 días y demandaban de la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo reajustes compensatorios de salarios (la CUT

83 Traducción propia del original: “Esses “guerrilheiros” sindicais não são capazes de perceber que os tempos mudaram e que as empresas multinacionais, que eles agora atacam e delas fazem seu alvo predileto de ação, são daqueles que procuram introduzir no País um ambiente interno de trabalho que é o que mais se aproxima do existente nos países industrializados. Tem-se a impressão, tendo em vista as empresas que a CUT e o PT escolheram para testar sua nova forma de greve, de que os energúmenos ou provocadores que estão conduzindo essa parede desejam mostrar às matrizes das montadoras e de outras empresas que o Brasil não é um país saudável para o capital estrangeiro.[...] É compreensível que o sr. Luiz Ignácio Lula da Silva, frustrado com sua experiência parlamentar, magoado com sua derrota, queira destruir o Plano Brasil Novo por esse tipo de expediente- as greves na Ford e na CSN, as ocupações de prédios do Incra, de terras etc[.] (Destruindo o futuro, p. 3, 27 de julho de 1990)

demandaba alrededor de 166,9%⁸⁴, mientras la propuesta de la FIESP era un reajuste de 11,42%).

Visto que el acuerdo no fue atendido, los trabajadores de Ford empezaron a vandalizar la empresa y a ocupar sus instalaciones para forzar una intervención favorable de la Justicia laboral en el conflicto. Desde el inicio del conflicto, *O Estado de São Paulo* no había redactado cualquier editorial sobre el tema. Tras las depredaciones, el diario se manifiesta a través mediante el título “Condescendencia peligrosa” de la siguiente manera:

“En ninguno de los episodios mencionados sus participantes pueden alegar que están ejerciendo su prerrogativa de ciudadanía, pues todos ellos demostraron irrespeto a las normas civilizadas, que necesita ser evitado durante el proceso de construcción de un régimen democrático, tal como ocurre en el Brasil contemporáneo. El derecho de los trabajadores de Ford de hacer huelga para obtener mejores salarios y condiciones de trabajo no puede ser contestado; jamás podrá servir, sin embargo, como justificación para actos de vandalismo, tales como los registrados en la industria. Esos actos de violencia no pueden insertarse en el dominio de la justicia laboral, sino como acciones punidas por el Código Penal y actos sujetos de represión de la policía, ya que significa una amenaza concreta a las vidas humanas y a la integridad patrimonial de la empresa. [...] Ese tipo de condescendencia es perverso para el régimen democrático fuerte y duradero que se pretende implantar em Brasil.”⁸⁵ (“Condescendencia peligrosa”, p. 3, 28 de julio de 1990)

Los raros momentos en que los sindicatos de trabajadores y los patronales se aliaban para lograr algún objetivo que beneficiara ambas partes, como en los casos de sectores amenazados de bancarrota debido a la competencia con el mercado internacional, fueron utilizados discursivamente como una representación ideal de relación capital-trabajo. De esta forma:

“Fue necesario que todo un sector de actividades tuviera su supervivencia cuestionada para que empleados y empresarios tomaran conciencia de que hay, entre ellos, intereses convergentes y coincidentes. Es notable la facilidad con que los oponentes de ayer - enemigos irreconciliables, según la visión de algunos- unieron las manos para afrontar la amenaza de una tercera parte. Pues, en realidad, patrones y empleados se unen debido a la necesidad de solucionar problemas creados por el Plan Brasil Nuevo. Cambia, por lo tanto, la configuración clásica del conflicto social: capital y trabajo olvidan sus desacuerdos naturales y, coligados, tienen al gobierno como oponente común. [...] El pacto que empresarios y sindicalistas

84 Disponible en: “<https://www.cut.org.br/noticias/ha-25-anos-greve-dos-golas-vermelhas-na-ford-mudava-patamar-de-lutas-9199>”

85 Traducción propia del original: “Em nenhum dos episódios citados seus participantes podem alegar estar no exercício de suas prerrogativas de cidadania, pois todos eles revelam desrespeito às normas civilizadas, que precisa ser evitado no processo de construção de um regime democrático, tal como acontece no Brasil contemporâneo. O direito de os trabalhadores da Ford entrarem em greve na luta por melhores salários e condições de trabalho não pode ser contestado; jamais poderá servir, no entanto, como justificativa para atos de vandalismo, tais como os registrados na indústria. Esses atos de violência não se inscrevem na alçada da Justiça trabalhista, mas são ações capituladas ao Código Penal e atos passíveis de repressão policial, por significar ameaça concreta a vidas humanas e à integridade patrimonial da empresa. [...] esse gênero de condescendência só pode ser maléfico ao regime democrático forte e duradouro que se pretende implantar no Brasil.” (“Condescendência perigosa”, p. 3, 28 de julho 1990)

hicieron podrá ser el *turning point* de las relaciones sociales en Brasil. Ajenos a los estímulos pavlovianos con que el gobierno omnipotente suele provocar los actores sociales, estos obreros y patrones mostraron que es posible establecerse bases cooperativas y relaciones mutuamente provechosas, en un ambiente antes marcado por la hostilidad” (União contra o desemprego”, 05 de abril de 1990)⁸⁶

Por lo que se pudo tener acceso en los editoriales los pocos que podrían enfrentar al gobierno con el consentimiento del diario era la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp). Debido a la inflación fuera de control, el gobierno Collor decidió que las medianas y grandes empresas deberían proveer su hoja de costos para justificar los reajustes de precios. La Fiesp rechazó la medida e incumplió con ella. *O Estado de São Paulo* se opuso al gobierno y alivió la postura de desobediencia del sindicato patronal, como sigue:

“La Federación de las Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp) - pese que hace algún tiempo su actual presidente ha sido llamado de Bakunin- no suele pregonar la desobediencia a decisiones del equipo económico del gobierno. Sin embargo, esta vez el gobierno federal ha llegado demasiado lejos por haber pedido a los miembros de la Fiesp informaciones que, además de exigir un trabajo que contradice con la restricción de gastos, representan en realidad una intrusión indebida en las empresas [...] los cristianos nuevos del liberalismo que integran el equipo económico muestran claramente que han cedido a una moda para no contradecir la evolución mundial, pero que no fueron todavía plenamente convertidos, no pasando su adhesión al libre mercado de una puesta en escena engañosa: continúan pensando que la lucha contra la alza de los precios debe pasar por un dirigismo total de la economía, el la cual el gobierno tendrá el derecho de imponer a las empresas sus proveedores, indicando a los clientes, en el marco de un dirigismo de tipo soviético, a quien deben comprar. La economía autoritaria que buscan imponer a los acreedores extranjeros, a los cuales propusieron un modelo por lo cual depende de Brasil decidir lo que debe pagar a los bancos que le proporcionaron recursos para el desarrollo del país, podrá extenderse a todos los empresarios brasileños. [...] Hay que resistir a una filosofía que contradice todo lo que fue anunciado por el candidato Fernando Collor en su campaña electoral. Será a partir de esas pequeñas revueltas contra el arbitrio del gobierno que se logrará fortalecer la democracia en Brasil.” (“La justa revuelta de la Fiesp”, p. 3, 30 de enero de 1991)⁸⁷

86 Traducción propia del original: “Foi preciso que todo um setor de atividades tivesse sua sobrevivência posta em questão para que empregados e empregadores tomassem consciência de que há, entre eles, interesses convergentes e coincidentes. É notável a facilidade como os adversários de ontem- inimigos irreconciliáveis, segundo a visão de alguns- juntaram as mãos para fazer face à ameaça de uma terceira parte. Pois, na verdade, patrões e empregados unem-se premidos pela necessidade de solucionar problemas criados pelo Plano Brasil Novo. Muda, portanto, a configuração clássica do conflito social: capital e trabalho esquecem suas divergências naturais e, coligados, têm no governo o adversário comum. [...] O pacto que empresários e sindicalistas fizeram poderá ser o *turning point* das relações sociais no Brasil. Alheios aos estímulos pavlovianos com que o governo todo-poderoso costuma acicatar os atores sociais, estes operários e patrões mostraram que é possível estabelecer-se bases cooperativas e relações mutuamente proveitosas, num ambiente antes marcado pela hostilidade” (União contra o desemprego”, 5 de abril de 1990)

87 Traducción propia del original: “Não é de costume da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)- ainda que há algum tempo seu atual presidente tivesse sido chamado de Bakunin- pregar desobediência a determinações da equipe econômica do governo. Mas, desta vez, o Planalto foi longe demais, ao pedir a membros da entidade informações que, além de exigir um trabalho que conflita com a contenção das despesas, representam na verdade intromissão indevida nas atividades das empresas. (...) os cristãos-novos do liberalismo que integram a equipe econômica mostram claramente que, ao ceder a um modismo para não contradizer a evolução mundial, não foram ainda plenamente convertidos, não passando sua adesão ao livre mercado de enganosa encenação: continuam pensando que a luta contra a alta dos preços deve passar por um dirigismo total da economia, em que o governo terá o direito de impor às empresas seus

La Fiesp eran una de las pocas organizaciones que *O Estado de São Paulo* respaldaría para desobedecer decisiones legales. Cuando los trabajadores electricistas convocaron una huelga, el Tribunal Superior del Trabajo (TST) la declaró ilegal. Tras la declaración del Tribunal, los huelguistas articularon una asamblea para decidir si iban a obedecer el fallo. *O Estado de São Paulo* afirmó que era inadmisibile la postura de los huelguistas que:

“Desde la asunción del presidente Fernando Collor de Mello, la CUT- que nunca respetó la leyes ni las normas de conducta civilizada- adoptó una línea de acción que lleva al choque violento contra las personas y las propiedades y a la privación de servicios esenciales a la población. [...] Lo que hace falta a la CUT [...] es el respeto a la democracia. Es decir, para la CUT la democracia no es una idea, sino un instrumento cuyo significado cambia dependiendo de las circunstancias y conveniencias. Para los líderes de la CUT, principios fundamentales de la democracia como el respeto a las leyes y la igualdad de todos ante la ley sólo es válida cuando beneficia su causa. Cuando pasa lo contrario, a saber, cuando las leyes impiden la CUT de imponerse por la fuerza contra el Estado y la sociedad, el orden jurídico pasa a ser repudiado como instrumento de represión. La vocación totalitaria de esse movimiento es directamente proporcional a la grosería de los medios que él emplea. Así, ese tipo de sindicalismo intenta trasplantar para el universo político nacional la imitación de una democracia directa que es el asambleísmo, por lo cual intenta sorber legitimidad para sus actos. Reunidos en asambleas poco frecuentadas y muy manipuladas, los líderes del sindicalismo salvaje hacen su propia ley, como si eso fuera bastante para someter la sociedad a su voluntad.” (“El TST contra el huelguismo”, p. 3, 02 de septiembre de 1990)⁸⁸

Con tantos sectores en su contra, el presidente Collor reflexionaba que los sectores principales de la oposición en contra de la política de privatizaciones eran 1) la “oligarquía”, es decir, los miembros tradicionales de la clase política que se aprovechaban de una serie de prerrogativas de las empresas estatales, como cargos y fondos ilegalmente desviados, 2) los partidos de izquierda y centro que creían que no era justo que la venta de las empresas

fornecedores, indicando aos clientes, no quadro de um dirigismo de tipo soviético, a quem devem comprar. A economia autoritária que procuram impor aos credores estrangeiros, aos quais propuseram um modelo em que cabe ao Brasil decidir o que deve pagar aos bancos que lhe proporcionaram recursos para o desenvolvimento do País, poderá se estender a todos os empresários brasileiros. (...) Cumpre resistir a uma filosofia que contradiz tudo o que foi anunciado pelo candidato Fernando Collor em sua campanha eleitoral. Será a partir dessas pequenas revoltas contra o arbítrio do governo que se conseguirá fortalecer a democracia no Brasil.” (“A justa revolta da Fiesp”, p.3, 30 de enero de 1991)

88 Traducción propia del original: “Desde a posse do presidente Fernando Collor de Mello, a CUT- que nunca primou pelo apego às leis e às regras da conduta civilizada- adotou uma linha de ação que leva ao choque violento contra pessoas e propriedades e à privação de serviços essenciais à população. [...] O que falta à CUT [...] é o respeito à democracia. Melhor dizendo, para a CUT a democracia não é uma idéia, mas sim um instrumento cujo significado muda ao sabor das circunstâncias e conveniências. Para os dirigentes da CUT, princípios fundamentais da democracia como o respeito às leis e a igualdade de todos perante a lei só vigem quando beneficiam sua causa. Quando ocorre o contrário, isto é, quando as leis sopitam a vocação da CUT de impor-se pela força ao Estado e à sociedade, o ordenamento jurídico passa a ser repudiano como instrumento de repressão. A vocação totalitária desse movimento é diretamente proporcional à rudeza dos meios que emprega. Assim, esse tipo de sindicalismo tenta transplantar para o universo político nacional o arremedo de democracia direta que é o assembléismo, do qual pretende sorver legitimidade para seus atos. Reunidos em assembléias pouco frequentadas e muito manipuladas, os líderes do sindicalismo selvagem fazem a própria lei, como se isso fosse o bastante para submeter a sociedade à sua vontade.” (O TST contra o grevismo, p. 3, 02 de septiembre de 1990)

estatales fuera de un monto menor que las inversiones recibidas por ellas y 3) el sector militar que, incluso hasta hoy, está en contra de las privatizaciones por considerar que determinadas empresas presentan un carácter estratégico para el Estado.

O Estado de São Paulo, en el editorial *Pontos para a oligarquia* reafirmaba muy directamente la hipótesis del gobierno sobre estos sectores cuando decía:

“Con efecto idéntico al producido por un rayo en el cielo azul, el Ejecutivo descubrió en la última semana que hay fuerzas internas que se oponen al programa del presidente Collor de Mello de realizar la privatización de las empresas estatales. Podrían encontrarse resistencias en tres corrientes principales: la de los miembros de la oligarquía, que no desean en absoluto que el Estado pierda su control sobre la economía (es decir, que ellos pierdan sus posiciones de poder y disfrute de la renta nacional); las de los que afirman que el capital público invertido históricamente en las estatales (deficitarias) no puede ser devaluado en el traspaso para el sector privado; y los que argumentan razones de seguridad nacional” (“Puntos para la oligarquía” p. 3, 02 de abril de 1991)⁸⁹

La complejidad se sitúa, entretanto, en el hecho de que el gobierno también creía que los grandes empresarios, los cuales el diario siempre defendía, también estaban en contra del gobierno (más específicamente en contra del Plan Collor II, continuación del Plan Brasil Nuevo o Plan Collor I). La postura de *O Estado de São Paulo* cambió drásticamente, y la burla pasó a ser un elemento central de la narrativa:

“Los mismos villanos que derribaron el Plan Cruzado- los bancos extranjeros, los oligopolios, los supermercados, los ganaderos y la CUT- están creando problemas ahora. La denunciante [la ministra de la economía, Zelia de Mello] no esconde esta vez su fuente de inspiración (el Plan Cruzado), como tampoco la profundidad de su liberalismo, que se alimenta del odio a los empresarios. Prediciendo su inmolación, ella intenta identificar los verdugos. Las fuerzas ocultas que se esfuerzan para derrotarla están encabezadas por los bancos extranjeros. [...] Pero existen otros villanos. [...] Sin hacer cualquier distinción, la ministra, al apuntar generalmente otros saboteadores de su plan, menciona a los supermercados, aunque ella reconozca que en la mayoría de ellos no hay carestía. [...] Para que se respete la tradición, los ganaderos también están en la lista negra de la ministra, a quien le gustaría, seguramente, enviar la Policía Federal para buscar los bueyes en los pastos. [...] En realidad, lo que la ministra hace es demostrar su odio al régimen de libre mercado y a los empresarios que, según ella, pretenden derribarla.” (“Los villanos del Plan Collor 2”, p. 3, 20 de febrero de 1991)⁹⁰

89 “Traducción própria del original en portugués: “Com efeito idêntico ao produzido por um raio em céu azul, o Executivo descobriu na última semana que há forças internas que se opõem ao programa de presidente Collor de Mello de realizar a privatização das empresas estatais. Poderiam encontrar-se resistências em três correntes principais: a dos membros da oligarquia, que não desejam de forma alguma que o Estado perca seu controle sobre a economia (isto é, que eles percam suas posições de poder e desfrute da renda nacional); a dos que alegam que o capital público investido historicamente nas estatais (deficitárias) não pode ser desvalorizado na passagem para a iniciativa privada; e a dos que alegam razões de segurança nacional. (Pontos para a oligarquia, 2 de abril de 1991)”

90 Traducción propia del original: “Os mesmos vilões que derrubaram o Plano Cruzado- os bancos estrangeiros, os oligopólios, os supermercados, os pecuaristas e a CUT- estão criando problemas agora. A denunciante não esconde desta vez sua fonte de inspiração (O Plano Cruzado), como também a profundidade do seu

Argentina

Bajo el paradigma neoliberal de los años 1990, la Argentina, así como Brasil, avanzaba con la agenda de las reformas estructurantes. Cómo el ritmo de las privatizaciones de las empresas estatales argentina fue intenso, *O Estado de São Paulo*, pese su visión estigmatizante hacia Argentina, escribió un editorial que buscaba incitar a Collor a seguir el ejemplo argentino:

“Aparentemente, la ciencia de los políticos argentinos despertó más temprano que la de los brasileños. El Congreso ya aprobó la privatización de 30 empresas estatales, entre ellas la Entel, ahora vendida para un grupo extranjero, iniciando lo que el ministro de Obras, José Roberto Dromi, clasifica como un camino sin retorno. La decisión, que supera grandes intereses corporativistas, se deriva de la imposibilidad del Estado argentino continuar solventando los perjuicios que se cubrían con emisiones masivas, las cuales llevaron el austral, surgido con tanta esperanza, a devaluarse 700 mil por ciento en cinco años. En el momento que el gobierno brasileño anuncia un bien orientado proyecto de política industrial, fundamentado en la apertura al exterior, y en el que se verifica, como en Argentina, una caída brutal de las inversiones extranjeras, el caso de Entel debería recibir atención especial de la ministra Zélia Cardoso de Mello. ¿Por qué no seguir el correcto ejemplo argentino y empezar también, como se anunció en Buenos Aires, para esta semana, la privatización de la construcción de carreteras? ¿Por qué no pensar en el uso de parte del stock de deuda externa para vender las empresas estatales deficitarias, sobrecargando el Tesoro, presionando el déficit sin proveer servicios? [...] Si queremos realmente privatizar, es necesario aprovechar esta oportunidad de apertura y modernización de la política industrial, [...] y actuar de una vez. Por lo menos esta vez podremos seguir un *buen* ejemplo argentino, principalmente porque supimos tan bien copiar los malos...” (El buen ejemplo argentino, 28 de junio de 1990)⁹¹

liberalismo, que se alimenta do ódio aos empresários. Mas certamente, prevendo sua imolação, tenta identificar os algozes. As forças ocultas que se empenham na sua derrubada são encabeçadas pelos bancos estrangeiros [...] Mas existem outros vilões. [...] Sem fazer nenhuma distinção, a ministra, ao apontar genericamente outros sabotadores do seu plano, faz menção aos supermercados, embora reconhecendo que na maioria deles não existe desabastecimento [...]. Em respeito à tradição, os pecuaristas também figuram na lista negra da titular da Economia, que gostaria, certamente, de enviar a Polícia Federal à caça dos bois nas pastagens. Finalmente, inclui-se a CUT no rol dos vilões, provavelmente por aceitar fazer o jogo de uma multinacional como a Autolatina, como se fosse a única entidade sindical interessada na alteração da lei salarial prevista no atual pacote. Na realidade, o que transparece da catilinária da ministra é apenas o ódio que devota ao regime do livre mercado e aos empresários que, segundo afirma, pretendem derrubá-la” (“Os vilões do Plano Collor 2”, p. 3, 20 de febrero de 1991)

91 Traducción propia del original: “Ao que parece, a consciência dos políticos argentinos acordou mais cedo do que a dos brasileiros. O Congresso já aprovou a privatização de 30 estatais, entre elas a Entel, agora alienada a um grupo estrangeiro, iniciando o que o ministro de Obras, José Roberto Dromi, classifica de caminho sem retorno. A decisão, que supera grandes interesses corporativistas, decorre da impossibilidade de o Estado argentino continuar arcando com prejuízos que vêm sendo cobertos por emissões maciças, as quais levaram o austral, surgido com tanta esperança, a desvalorizar-se 700 mil por cento em cinco anos. No momento em que o governo brasileiro anuncia um bem-orientado projeto de política industrial, fundamentado na abertura ao Exterior, e em que se verifica, como na Argentina, queda brutal dos investimentos externos, o caso da Entel deveria merecer atenção especial da ministra Zélia Cardoso de Mello. Por que não seguir o correto exemplo argentino e começar também, como se anunciou em Buenos Aires, para esta semana, a privatização da construção de estradas? Por que não pensar na utilização de parte do estoque da dívida externa para vender as empresas estatais que aí estão dando prejuízo, onerando o Tesouro, pressionando o déficit sem prestar serviço? [...] Se quisermos realmente privatizar, urge aproveitar esta oportunidade de abertura e modernização da política industrial, [...] e agir de uma vez. Pelo menos desta feita poderemos seguir um *bom* exemplo argentino, mesmo porque soubemos, tão bem, copiar os maus...” (O bom exemplo argentino, 28 de junho de

Por desconocimiento o conveniencia, sin embargo, el diario no mencionaba algunos aspectos que diferencian a la Argentina en el tema de las privatizaciones de empresas estatales, como por ejemplo que la “prestación monopólica [de las empresas de telecomunicaciones] en sus respectivas áreas durante casi diez años permitió a las compañías telefónicas acumular una significativa masa de capital, en parte utilizado, seguramente, para la adquisición de medios” (Aruguete, 2009, p. 143).

Es decir, los medios de prensa hegemónicos, como *O Estado de São Paulo*, estimuló las privatizaciones en el sector de telecomunicaciones a la vez que se situaban en una posición clave para comprar los activos del Estado (fenómeno que pasaría a Brasil años más tarde bajo la administración de Fernando Henrique Cardoso). Entretanto, *O Estado de São Paulo* no consideró para lograr un resultado tan rápido en las privatizaciones, Menem había aprobado la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica, las cuales incrementaron demasiado los poderes del Ejecutivo.

Hay que recordar que la redemocratización argentina, lejos de ser tranquila, sufría las soblevaciones de los militares. Durante uno de los alzamientos carapintadas, el cuarto - para ser más específico, en diciembre de 1990, ya durante el mandato de Carlos Menem, el *Estado de São Paulo* reflexionaba sobre los hechos el día siguiente con un editorial titulado *Los golpistas argentinos*. Lejos de ablandar sus críticas al movimiento golpista, el diario consideraba que:

“Los oficiales golpistas argentinos quizás sean [...] los últimos arquetipos de un género que contribuyó de forma decisiva para el atraso de América Latina, utilizándose siempre el pretexto de mantener o restaurar la dignidad de las instituciones para deponer o prorrogar gobiernos. [...] Los golpistas argentinos supieron elegir el momento cierto para minar las políticas que están siendo llevadas a cabo por el presidente Carlos Menem. Ellos organizaron su puesta en escena recién cuando Menem y Fernando Collor habían firmado el acuerdo de salvaguardias nucleares y en la víspera de la visita programada por el presidente George Bush a Buenos Aires. Menem intenta restablecer una imagen de fiabilidad con el gobierno norte-americano. [...] Con Brasil se trata de consolidar el trabajo de distensión de desconfianzas seculares, proceso iniciado por Sarney y Alfonsín, que incluye la participación decisiva de los militares de los dos países. La agitación de este alzamiento daña la buena voluntad que un ambiente democrático y programas de modernización paralelos propician. Los hechos en Buenos Aires comprueban principalmente que la celebración de elecciones no son suficientes durante los procesos de democratización en nuestro continente. Es necesario acercar las Fuerzas Armadas del proyecto democrático de la sociedad. Cuando el gobierno está decidido a hacer eso, los militares obedecen. Así ocurrió en Alemania de posguerra. ¿Por qué no será así en América Latina?” (Los golpistas argentinos, p. 3, 4 de diciembre de 1990)”⁹²

1990)

El problema con esta condena a los alzamientos, sin embargo, es que la sublevación es considerada por el diario como una acción cuestionable sólo porque perjudicaba la credibilidad del gobierno Menem y de la Argentina (la credibilidad del programa neoliberal) ante los organismos multilaterales de crédito y los países centrales. Si no fuera así, *O Estado de São Paulo* no hubiera apoyado las tomas de poder por parte de los militares en las dictaduras del Cono Sur durante los años 60-80.

Además, el diario presenta esta cuestión de tal forma que es como si los alzamientos en Argentina se hubieran producido porque los militares no se hubieran convencido todavía del proyecto democrático. El análisis empieza por reconocer que las Fuerzas Armadas argentinas intervenían en los gobiernos de turno de modo tutelar, pero ignora completamente que los alzamientos ocurrieron por esta misma creencia institucional de las FFAA que inferioriza a los civiles y a las instituciones burguesas. Al contrario, el diario cree que depende del gobierno acercar las FFAA al proyecto democrático, como si los golpistas no fueran una fuerza en contra de la redemocratización liberal. La comparación entre la Argentina posdictadura militar y Alemania tras el nazismo no hay que profundizar o analizar algo, dado el grosero anacronismo.

Sobre la integración del Argentina y Brasil alrededor del Mercosur, faltando poco menos de un año para la creación formal del Mercosur, *O Estado de São Paulo* ya acompañaba las actividades políticas de Fernando Collor y Carlos Menem alrededor del tema de la integración. Sobre el encuentro, el diario afirmaba que:

“El encuentro de los presidentes Fernando Collor de Mello y Carlos Menem, en Buenos Aires, reabrió perspectivas antes consideradas entrecerradas por las crisis económicas y sociales que presionan las economías de Argentina y de Brasil. La reunión se pasó en el mejor momento y de eso los dos presidentes supieron aprovecharse, estimulando y acelerando un proceso de integración que ya no es visto por los agentes económicos y por los políticos como logro fundamental para el futuro de ambos países. Las acciones de Collor de Mello y Menem y los protocolos que se firmaron son un paso grande para la intensificación de los mercados, meta prevista para 1994. Hasta allá, un proceso gradual eliminará los obstáculos, en un claro estímulo a la producción. La reanudación acelerada del proceso de integración ocurre, como decíamos, en un momento favorable. En Argentina, la crisis

92 Traducción propia del original: “Esses "guerrilheiros" sindicais não são capazes de perceber que os tempos mudaram e que as empresas multinacionais, que eles agora atacam e delas fazem seu alvo predileto de ação, são daqueles que procuram introduzir no País um ambiente interno de trabalho que é o que mais se aproxima do existente nos países industrializados. Tem-se a impressão, tendo em vista as empresas que a CUT e o PT escolheram para testar sua nova forma de greve, de que os energúmenos ou provocadores que estão conduzindo essa parede desejam mostrar às matrizes das montadoras e de outras empresas que o Brasil não é um país saudável para o capital estrangeiro.[...] É compreensível que o sr. Luiz Ignácio Lula da Silva, frustrado com sua experiência parlamentar, magoado com sua derrota, queira destruir o Plano Brasil Novo por esse tipo de expediente- as greves na Ford e na CSN, as ocupações de prédios do Inbra, de terras etc[.] (Destruindo o futuro, p. 3, 27 de julio de 1990)

económica, aunque sigue siendo grave, no más afecta a las instituciones. En Brasil, el gobierno recién aprobó una política industrial y de comercio exterior que proporciona una saludable apertura del país a la competencia internacional, señalando el deseo brasileño de integrarse a los principales flujos de comercio y de las finanzas del mundo industrializado.” (“El mercado común argentino-brasileño”, p. 3, 10 de julio de 1990)⁹³

Las expectativas sobre el Mercado Común del Sur a veces en sus análisis fluctuaban en la medida que los vaivenes de la política interna argentina y brasileña amenazaban la posibilidad de concreción del bloque económico. El inicio del mandato de Collor estuvo marcado por un mayor optimismo cuando el diario declaraba que:

“Hace cinco años, cuando los presidentes Sarney y Alfonsín firmaron los Protocolos de Foz de Iguazu, fueron pocos los que creyeron que la centenaria rivalidad entre Argentina y Brasil pudiera ser superada, en tan poco tiempo, por cualquier forma de cooperación económica. No había duda que la complementariedad económica que existió hasta la década pasada había sido sacudida por la prolongada crisis que afectó el parque industrial argentino. Había duda que la intensificación de los cambios pudiera traer beneficios mutuos, ya que las balanzas comerciales difícilmente podrían ser cumplidas por socios que estaban al borde de la bancarrota cambiaria. Principalmente, se creía que los resentimientos entre los dos países predominaría, acortando el intento de cooperación. La reducción de tarifas y de barreras, sin embargo, acercó lo que había de mejor y de más dinámico en las dos economías [...] y fue este acercamiento que pasó a determinar su relación, antes vista con desconfianza por los sectores políticos y militares de los dos países. Contra este trasfondo, los presidentes Collor de Mello y Menem van a tomar un paso más allá hacia la integración. [...] El juego apenas se inicia.” (“Una política para el Plata”, 03 de julio de 1990)⁹⁴

93 Traducción propia del original: “O encontro dos presidentes Fernando Collor de Mello e Carlos Menem, em Buenos Aires, reabriu perspectivas antes julgadas entrecerradas pelas crises econômicas e sociais que deprimem as economias da Argentina e do Brasil. A reunião aconteceu no melhor momento e disso os dois presidentes souberam tirar partido, revigorando e acelerando um processo de integração que já é visto pelos agentes econômicos e pelos políticos como realização fundamental para o futuro de ambos os países. As ações de Collor de Mello e Menem e os protocolos que foram assinados são passo largo para a intensificação dos mercados, meta prevista para 1994. Até lá, um processo gradual irá eliminando os entraves, num claro estímulo à produção. A retomada, em acelerado, do processo de integração ocorre, como dizíamos, em momento propício. Na Argentina, a crise econômica, embora ainda grave, não mais afeta as instituições. No Brasil, o governo acaba de aprovar uma política industrial e de comércio exterior que proporciona uma saudável abertura do país à concorrência internacional, sinalizando o desejo brasileiro de integrar-se aos principais fluxos do comércio e das finanças do mundo industrializado.” (O mercado comum argentino-brasileiro, 10 de julio de 1990)

94 Traducción propia del original: ““Há cinco anos, quando os presidentes Sarney e Alfonsín assinaram os Protocolos de Foz do Iguaçu, foram poucos os que acreditaram que a centenária rivalidade entre a Argentina e o Brasil pudesse ser superada, em prazo tão curto, por qualquer forma de cooperação econômica. Tinha-se por certo que a complementaridade econômica que existira até uma década antes fora irremediavelmente abalada pela prolongada crise que comprometeu o parque industrial argentino. Duvidava-se que a intensificação das trocas pudesse trazer benefícios mútuos, já que os saldos comerciais difícilmente poderiam ser honrados por parceiros às voltas com a bancarrota cambial. Principalmente, acreditava-se que os ressentimentos que vinham presidindo as relações políticas entre os dois países dariam o tom, abreviando a tentativa de cooperação. A redução das tarifas e das barreiras, entretanto, aproximou o que havia de melhor e de mais dinâmico nas duas economias [...] e foi esta aproximação que passou a determinar o relacionamento, antes visto com desconfiança pelos setores políticos e militares dos dois países. Contra este pano de fundo, os presidentes Collor de Mello e Menem darão um passo adiante na integração. [...] O jogo está apenas começando.”

Una de las razones por las cuales no es equivocado clasificar el apoyo de los medios de prensa analizados en este trabajo como un apoyo al proyecto neoliberal (no importa cual presidente esté dispuesto a implementarlo) y una voluntad activa de derrotar a todos los sectores que se pongan a la oposición de este proyecto, está en el hecho de que las reformas estructurales no deberían nunca afectar a la clase capitalista negativamente. Eso sucedió parcialmente cuando Menem logró invalidar las decisiones judiciales que afectarían el Tesoro argentino. En este sentido, *O Estado de São Paulo* afirmaría que:

“Las medidas económicas adoptadas en Argentina son de extrema gravedad, no apenas por la recesión, que agravan, como también por el hecho de haber eliminado, y creemos que de esta vez para siempre, la confianza de los agentes económicos y de todos los que dependen del Estado en su capacidad de cumplir compromisos. El peronista Carlos Menem practicó durante su corto gobierno tres actos que contribuyeron para esa caída en la credibilidad del público en el Estado, como institución coordinadora- y rectora- de las acciones económicas y sociales. Lo que hizo en realidad el llamado Plan Erman V fue poner fin a la propiedad y hacer con que los contratos sean [hacer con que los contratos y decisiones de la Justicia en contra del Estado resultaran caducados y sin valor, a saber, todo lo que puede impactar el Tesoro Nacional argentino. Con el nuevo plan, el orden jurídico ha dejado de existir completamente: no se pagan las deudas contraídas por el Estado para la prestación de servicios y suministro de bienes [...]. No pienses en ir la corte de justicia: las sentencias judiciales que agobien al Estado- no serán cumplidas. Convenios laborales no serán cumplidos. Los empresarios no tendrán a quien apelar, sólo descapitalizar, si ha acumulado montos en dólares, porque el Banco no puede más comprar dólares; los intereses bancarios están nuevamente prohibitivos para la producción; los trabajadores ya no saben que es la CGT, que realmente no les serviría de nada. Lo que pasa en Argentina concierne a Brasil. Especialmente en dos aspectos, que deben ser considerados antes y no después que las cosas se pasan. En nuestro principal editorial del domingo, advertimos al presidente Collor de Mello para el hecho de que la inesperada alta tasa de inflación en agosto se debía, también, al temor que se pasara en Brasil lo mismo que en Argentina, a saber, una segunda maniobra dirigida a los ahorristas y agentes económicos. [...]. El otro problema es el de la integración entre los dos países. En que condiciones tendrá lugar, si la industria argentina entrar en una profunda recesión e intereses de otros países aprovecharen, *sin la necesidad de agregar cualquier valor en Argentina*, de la caída de las barreras aduaneras para llegar al nivel medio de 20% en pocos años; otra es ver otros países aprovecharen, *sin añadir trabajo nacional*, de tarifas menores que 20% para conquistar mercados brasileños bajo bandera argentina.” (“La crisis argentina y el Brasil”, 05 de septiembre de 1990)⁹⁵

95 Traducción propia del original: “As medidas econômicas adotadas na Argentina são de extrema gravidade, não apenas pela recessão, que agravam, como também pelo fato de haver eliminado, e cremos que desta vez para sempre, a confiança dos agentes econômicos e de todos quantos dependem do Estado na capacidade de ele honrar seus compromissos. O peronista Carlos Menem praticou durante seu curto governo três atos que contribuíram para essa queda de credibilidade do público no Estado, enquanto instituição coordenadora- e norteadora- das ações econômicas e sociais. O que fez na realidade o chamado Plano Erman V foi acabar com a propriedade e tornar os contratos, as decisões da Justiça contra o Estado caducos e sem valor, isto é, tudo aquilo que pode abalar a caixa do Tesouro Nacional argentino. Com o novo plano a ordem jurídica deixou de existir completamente: não se pagam dívidas contraídas pelo Estado por prestação de serviços e fornecimento de bens [...]. Não se pense em recorrer à Justiça: sentenças judiciais que onerem o Estado [...] não serão cumpridas. Dissídios trabalhistas não serão honrados. O empresariado não terá mais a quem recorrer, a não ser descapitalizar-se, se acumulou disponibilidades em dólar, porque o Banco Central não pode mais comprar dólares; os juros bancários estão de novo proibitivos para a produção; os trabalhadores já não sabem o que seja a CGT, que aliás de nada lhes serviria. [...] o que acontece na Argentina diz respeito de perto ao Brasil. Especialmente por dois aspectos, que devem ser considerados antes e não depois que as

Así, la imposibilidad de obtener recursos del Estado vía indemnizaciones podría, en la visión del diario, causar una pérdida de confianza de los agentes económicos en el Estado; Entretanto, la imposibilidad de los trabajadores de obtener reajustes salariales vía huelgas o incluso el uso de fuerzas militares para poner fin a conflictos sociales, no causaría la misma pérdida de confianza de los agentes económicos.

“El presidente Carlos Saul Menem en su discurso de asunción - anticipada por la convulsión económica sin precedentes que la Argentina vivía- garantizó que la amnistía a los militares involucrados en la guerra sucia y condenados por violaciones a los derechos humanos sería decretada en su gobierno por que llegara la hora de “todos los argentinos se unieran”. Tres meses después el presidente indultó a la gran mayoría de los militares acusados, a 64 militantes de izquierda, todos los militares sublevados durante el gobierno Alfonsín y los comandantes de la Guerra de las Malvinas. Fueron excluidos del indulto presidencial los ex-comandantes de las Juntas Militares- en cuya gestión la Justicia argentina reconoció oficialmente 9 mil “desapariciones”. [...] En el último año, el presidente Menem, que tiene el apoyo de 70% de los argentinos, indultó a los entonces excluidos, incluso a los que habían sido extraditados para la Argentina porque habían cometido crímenes comunes. Hay el peligro que la mano extendida de ayer pueda transformarse en puño cerrado mañana. Exactamente porque se confundió indulto con amnistía, la medida, acto de voluntad del presidente y no decisión avalada por la sociedad, no pacificó a la familia argentina. No faltarán pescadores en aguas turbias: si los carapintados se sienten atendidos (siempre exigirá el indulto pleno), es necesario ver que entre los 60 mil manifestantes que protestaron contra el indulto frente a la Casa Rosada ni todos pueden ser definidos como defensores intransigentes de los derechos humanos. Por otro lado, el “alivio institucional” que audazmente el general Videla exigió, tras ser liberado, sorprendió al presidente Menem y puede significar el inicio de una serie de actos de provocación al Poder Civil. Si la memoria de las heridas de sangre no desaparecer, se puede evitar las sangrías nostálgicas. Si políticamente conviene olvidar, por ejemplo, la “noche de los lápices”, en que desaparecieron 15 niños que pedían boleto estudiantil, no debe darse cualquier concesión para que se transforme el indulto en alivio, bajo pena de volver a una guerra interna.” (Que no se reabran las heridas, 03 de enero de 1991)⁹⁶

coisas acontecerem. No nosso principal editorial de domingo, alertávamos o presidente Collor de Mello para o fato de que a inesperada alta da taxa inflacionária em agosto decorria, também, do receio de que se desse no Brasil o que ocorrera na Argentina, isto é, uma segunda manobra destinada a atingir os poupadores e agentes econômicos. [...] O outro problema é o da integração econômica entre os dois países. Em que condições se dará ela, se a indústria argentina se vir precipitada em profunda recessão e interesses de terceiros países se aproveitarem, *sem necessidade de agregar nenhum valor na Argentina*, da queda de barreiras alfandegárias para chegar ao nível médio de 20% em poucos anos; outra é ver terceiros países se aproveitarem, *sem nada acrescentar de trabalho nacional*, de tarifas menores do que 20% para conquistar mercados brasileiros sob bandeira argentina. (A crise argentina e o Brasil, 05 de septiembre de 1990)

96 Traducción propia del original: “O presidente Carlos Saul Menem em seu discurso de posse- antecipada pela convulsão econômica sem precedentes que a Argentina vivia- garantiu que a anistia aos militares envolvidos na guerra suja e condenados por violações dos direitos humanos seria decretada em seu governo porque chegara a hora de “todos os argentinos se darem as mãos”. Três meses depois o presidente indultou a grande maioria dos militares acusados, 64 militantes de esquerda, todos os militares rebelados durante o governo Alfonsín e os comandantes da Guerra das Malvinas. Foram excluídos do perdão presidencial os ex-comandantes das Juntas Militares- em cuja gestão a Justiça argentina reconheceu oficialmente 9 mil “desaparecimentos”. (...) No último dia do ano, o presidente Menem, que conta com a opinião expressa de 70% dos argentinos, indultou os então excluídos, inclusive os que haviam sido extraditados para a Argentina, por haverem praticado crimes comuns. Há o perigo de que a mão estendida de ontem possa transformar-se em punho cerrado amanhã. Exatamente porque se confundiu indulto com anistia, a medida, ato de vontade do

Por lo tanto, se puede definir que este recorte temporal de los editoriales de *O Estado de São Paulo* marcó el apoyo explícito del diario al gobierno de Fernando Collor de Mello, pese las divergencias filosóficas y de análisis social de determinadas políticas. Además demostró que los Mesquita, familia propietaria del diario, tenía un profundo desprecio por todo que concierne a la lucha sindical y sus demandas. Y finalmente que su perspectiva hacia la Argentina fue de un optimismo cauteloso sobre las reformas liberales impulsadas por Carlos Menem y sobre el potencial acuerdo del Mercosur, dado el nuevo paradigma neoliberal que se diseñaba en Argentina y Brasil.

presidente e não decisão referendada pela sociedade, não pacificou a família argentina. Não faltarão pescadores de águas turvas: se os caras-pintadas se sentem atendidos (sempre exigiram o indulto pleno), é de ver que entre os 60 mil manifestantes que protestaram contra o indulto diante da Casa Rosada nem todos podem ser definidos como defensores intransigentes dos direitos humanos. Por outro lado, o “desagravo institucional” que ousadamente o general Videla exigiu, depois de libertado, chocou o presidente Menem e pode significar o início de uma série de atos de provocação ao Poder Civil. Se a memória das feridas de sangue não desaparecer, podem evitar-se muito bem as hemorragias saudosistas. Se politicamente convém esquecer, por exemplo, a “noite dos lápis”, em que desapareceram 15 crianças que pediam passe escolar, nenhuma concessão deve ser feita para que se transforme o indulto em desagravo, sob pena de voltar a guerra intestina.” (Não se reabram as feridas, 03 de enero de 1991)

Conclusión

Argentina y Brasil tienen una fuerte relación histórica y ciertos procesos sincrónicos (Argumedo, 1996) que afectaron a uno también afectaron al otro, aunque nunca de forma idéntica. Ejemplos de eso fueron la colonización europea, los procesos de independencia de sus ex-metrópolis en el siglo XIX, los populismos latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX, la alternación de gobiernos civiles y golpes militares, las dictaduras de los años 60 y 70 y, para el presente estudio, el ascenso del neoliberalismo.

Así como todas las investigaciones, esta no tiene el propósito de agotar el tema propuesto. Al contrario, lo que se propuso fue analizar el rol desempeñado por los diarios *La Nación* y *O Estado de São Paulo*, durante los años 1989-1991, en la legitimación de las políticas neoliberales que fueron llevadas a cabo en Argentina y Brasil. Este tema permite una profundización analítica que seguramente puede ser objeto de otros estudios.

Algunas de las complejidades que este rol de los medios presentó fueron los elementos de la memoria discursiva y de los usos políticos del pasado para lograr la legitimación de un proyecto político gestionado a finales del siglo XX, el neoliberalismo. El mundo en aquel entonces experimentaba un cambio de paradigma político con la caída del Muro de Berlín, la disolución de la URSS, la concepción hegemónica de que el neoliberalismo era la única vía posible para que los países fueran modernos y se desarrollaran.

La Historia como campo de conocimiento se manifiesta justamente en estos cambios de paradigmas. Los cambios y las continuidades están siempre tensionados en la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo. Como fue posible percibir, el cambio que permitió el ascenso neoliberal fue posible también debido a la activación de la memoria discursiva de los diarios trabajados en esta investigación.

En otras palabras, fue la constante alusión al pasado que ofreció herramientas mentales para que *La Nación* y *O Estado de São Paulo* crearan sus enemigos políticos y buscaran combatirlos. Además de los intentos de criminalización de los opositores del flamante proyecto neoliberal y/o del menosprecio de sus reclamos, los diarios persistentemente buscaron lo que había de peor en el pasado de sus países, como las dictaduras y la violencia política que eran vigentes (y esta última todavía no ha cambiado) para inculcar en sus lectores que los(as) ciudadanos(as) que tenían una otra concepción de mundo eran criminales atrasados que querían poner fin a la democracia y volver a la violencia política.

Es fundamental decir que la actitud de estos diarios de criminalizar las protestas y la oposición política se dio en un contexto de institucionalidad democrática. El intento de restringir la pluralidad de ideas se dio también en democracia. Lo que se puso de relieve en esta investigación no fue la complicidad de estos diarios con la última dictadura (aunque sí, esta estuvo presente) sino sobre la complicidad de estos diarios con los gobiernos elegidos en el marco de la democracia liberal.

El tiempo que empezó en 1989 fue visto por estos diarios como el tiempo de la inserción de países como Argentina y Brasil en el llamado Primer Mundo, el tiempo de la modernidad, de la democracia y de las libertades individuales. El problema es que este proyecto fue esencialmente violento y demandó el uso persistente de la fuerza armada del Estado, tanto en Argentina como en Brasil.

La Nación y *O Estado de São Paulo* actuaron desde una rama intelectual del proyecto neoliberal. Es decir, ellos no dispararon balazos contra los manifestantes y huelguistas (como las fuerzas de seguridad) ni implementaron medidas pro-mercado (como el Ejecutivo o el Congreso). Pero sí, a través de la construcción de discursos de legitimación, ellos contribuyeron para que el proyecto neoliberal resultara posible.

Fuentes trabajadas

La Nación

El nuevo gobierno- 08/07/1989
Los bonos sociales- 20/08/1989
La lección de los tiempos difíciles- 21/08/1989
La ley de Reforma del Estado- 24/08/1989
Flexibilidad de la política laboral- 07/09/1989
La ley de emergencia económica- 12/09/1989
Los intereses del Estado- 02/10/1989
Los indultos y el futuro de la República- 10/10/1989
Dos opciones para el Brasil- 22/11/1989
El triunfo de Collor de Mello- 22/12/1989
El público, único perjudicado- 19/01/1990
La Argentina y los no alineados- 26/01/1990
La entrega de los bonos solidarios- 02/02/1990
Los bonos de la discordia- 08/02/1990
Otro paro ferroviario sorpresivo- 10/04/1990
Insólita amenaza sindical- 03/07/1990
Apertura e integración con el Brasil- 13/07/1990
Las recientes manifestaciones populares- 03/12/1990
Otro alzamiento militar inadmisibles- 04/12/1990
Los indultos- 30/12/1990
El tratado de Asunción- 17/04/1991

O Estado de São Paulo

Los dos lados de la crisis- 01/03/1990
Bienvenido, Collor- 15/03/1990
Salvar a las instituciones- 17/03/1990
La primera víctima- 17/03/1990
Quién pagará la cuenta?- 03/04/1990
Unión contra el desempleo- 05/04/1990
Un estado más ágil- 10/04/1990

Un paso más hacia la estatización- 17/05/1990
Ley salarial o demagogía?- 19/05/1990
Huelga municipal, en contra el gobierno federal- 23/05/1990
No titubear- 27/05/1990
El neopeleguismo de la CUT- 29/05/1990
La huelga de los 90 días- 15/06/1990
El bien ejemplo argentino- 28/06/1990
Una política para el Plata- 03/07/1990
El mercado común argentino-brasileño- 10/07/1990
Destruyendo el futuro- 27/07/1990
Condecendencia- 28/07/1990
El rigor que el momento exige, 21/08/1990
Rechazo a los partidarios del caos- 09/09/1990
El dilema de la CUT- 18/09/1990
La marcha hacia el entendimiento- 23/09/1990
El TST contra el huelguismo- 02/09/1990
La crisis argentina y el Brasil- 05/09/1990
Los golpistas argentinos- 04/12/1990
Que no se reabran las heridas- 03/01/1991
La justa revuelta de la Fiesp- 30/01/1991
Los villanos del Plan Collor 2- 20/02/1991
La huelga más cruel- 28/03/1991
Puntos para la oligarquía- 02/04/1991

Bibliografia

Almeida, M. P. (2010). *Reformas Neoliberais no Brasil: A privatização nos governos Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso*. (Tesis de doctorado). Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense: Rio de Janeiro.

_____ (2014). *A mídia impressa e o tricampeonato mundial de futebol: relações entre ufanismo e o obscurantismo*. Recorde: Revista de História do Esporte Artigo volume 7, número 1, p. 1-19.

Argumedo, Alcira (1996). *Los silencios y las voces en América Latina: Notas sobre el pensamiento nacional y popular*. Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional.

Aruguete, N. (2009). *Los medios y la privatización de Entel: el tratamiento noticioso del servicio telefónico argentino antes y después de su transferencia* (agosto de 1990 – enero de 1991). Un estudio exploratorio.

_____ (2011) *Framing*. La perspectiva de las noticias. La trama de la Comunicación, vol. 15, pp. 67-80

Azpiazu, D. (2005). *Las privatizadas (I): ayer, hoy y mañana*. Capital Intelectual: Buenos Aires.

Azpiazu, D., Basualdo, E. M, Khavisse, M., (2004a). *El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80*. Siglo XXI Editores: Buenos Aires.

_____, (2004b). *Las privatizaciones en la Argentina. Genesis, desarrollo y principales impactos estructurales*. FLACSO: Sede Argentina.

Badenes, D. (2018) *Papel de regalo* En: Perycia. Periodismo y Justicia. Disponible en: <https://www.perycia.com/2018/12/papel-de-regalo.html>

Baschetti, R. *El diario La Nación*. (sin año de publicación).

Berger, S. (2010). Comparative History. En: Autor, *Writing History. Theory and Practice*. Bloomsbury Academic: London.

Bissolli, Cinthia (2018). *Como foi noticiada a morte do jornalista Vladimir Herzog pelos jornais: Unidade do Sindicato dos Jornalistas, Folha de S. Paulo e o Estado de São Paulo?*. São Paulo. Tesis de licenciatura.

- Bonnet, A. (2005) *La hegemonía menemista: El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*. Prometeo: Buenos Aires.
- Borrat, H. (1989). *El periódico, actor del sistema político*. En: Anàlisi, nº 12, pp. 67-80.
- Borrelli, M. (2008) “*Una batalla ganada*”: el diario *Clarín* frente a la compra de Papel Prensa por parte de los diarios *La Nación*, *Clarín* y *La Razón* (1976-1978).
- Cadoná, Marco (2016). *Neoliberalismo e capitalismo no Brasil*.
- Canelo, P. V. (2001) *La legitimación del Proceso de Reorganización Nacional y la construcción de la amenaza en el discurso militar*. Argentina, 1976-1981 [en línea]. Sociohistórica, (9-10). Disponible en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2941/pr.2941.pdf
- Capelato, Maria Helena Rolim. (1998) *Multidões em cena*. Propaganda Política no varguismo e no peronismo. Campinas: Papirus.
- Crenzel, E. (2010a) *Políticas de la memoria en Argentina*. La historia del informe *nunca más*. En: Papeles del CEIC #61.
- Crenzel, E. y Born, D. (coordinadores) (2010b) *Los desaparecidos en la Argentina*. Memorias, representaciones e ideas. 1983-2008. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Dias, S. y Oliveira, B. (2018). *Greves e repressão na transição para a democracia: o caso dos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)*. Rio de Janeiro.
- Díaz, M. F. (2007) *El Gran Acuerdo Nacional en La Nación, 1971-1972*. Universidad Nacional de La Plata. En línea: <<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/30379/Documento_completo....pdf?sequence=1>>.
- Di Marco, Graciela (2010). *Los movimientos de mujeres en la Argentina y la emergencia del pueblo feminista*. La Aljaba Segunda época, Volumen XIV, 2010, pp. 51-67.
- Donghi, T. H. (1996). *Mitre y la formulación de una historia nacional para la argentina*. Anuario del IEHS 11.
- Entman, R. (1993). *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*. Journal of Communication. p. 51-58

Fair, H. (2011) *Las relaciones políticas entre el menemismo y las Fuerzas Armadas*. Un análisis histórico-político del período 1989-1995. En: Kairos. Revista de Temas Sociales, año 15, n° 27. Mayo de 2011.

_____. (2016) *Del peronismo nacional-popular al peronismo neoliberal: transformaciones de las identidades políticas en la Argentina menemista*. En: Colombia Internacional, enero-abril 2016, pp. 107-136.

Fausto, Boris (2004). *Brasil e Argentina: Um ensaio de história comparada (1850-2002)*, Editora 34, 2004.

Ferraro, A. R. (2005) *Neoliberalismo e políticas sociais: a naturalização da exclusão*. En: Estudos Teológicos, v. 45, n. 1, pp. 99-117, 2005.

Ferrer, A. *La economía argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI*.

Figueiredo, C. R. (2005) *ESG e Estadão em 1964: limites autoritários do liberalismo*. In: Revista Adusp, maio 2005.

Fontana, J. (1998) *História depois do fim da história*. Bauru: Edusc.

Gasparini, J. (2007). *David Graiver: el banquero de los montoneros*. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

Guilherme, C. (2019). *1989: História da primeira eleição presidencial pós-ditadura*. Jundiaí: Paco editorial.

Iribarren, C. (2016) *Los pueblos originarios y el después de la última dictadura militar en Argentina: silenciamientos, voces y justicia*.

Jelin, E. (1995), "La política de la memoria: el Movimiento de Derechos Humanos y la construcción democrática en la Argentina". En: Jelin, E. *et al. Juicio, Castigos y Memoria. Derechos humanos y justicia en la política argentina*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Kircher, M. (2005). *La prensa escrita: actor social y político, espacio de producción cultural y fuente de información histórica*. En: Revista de História, n° 10.

Koselleck, R. (2002). *The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts*. Stanford University Press: Stanford.

_____. (2004). *Futures Past: on the semantics of historical time*. Columbia University Press: New York.

Laque, Roberto (2010). *Pedro e os lobos*. São Paulo: Ava Editorial.

Llanos, M. (1998). “El presidente, el congreso y la política de privatizaciones en la Argentina (1989-1997)” En: *Desarrollo Económico*, vol. 38, n° 151.

Levitsky, S. (2005) *La transformación del justicialismo*. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999. Buenos Aires: Siglo XXI.

Löwy, M. (2010) *Ideologias e ciencia social: elementos para una análise marxista*. São Paulo: Cortez.

Martinelli, G. (2014). “Una propuesta de análisis textual. Reflexiones metodológicas sobre el uso del análisis del discurso en el campo historiográfico” En: *Historia y metodología: aproximaciones al análisis del discurso*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Medeiros, Rogério; Netto, Marcelo (2012). *Memórias de uma guerra suja*. Rio de Janeiro: Topbooks.

McCombs, M. (1996) “Influencia de las noticias sobre nuestras imágenes del mundo”. En: Bryant, J., Zillman, D. (comp.) *Los efectos de los medios de comunicación: investigaciones y teorías*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Motta, R. *A ditadura nas representações verbais e visuais da grande imprensa: 1964-1969*. TOPOI, v. 14, n. 26, jan./ jun. 2013, p.62-85.

Nava, M. (2017) *A imagem de Lula construída pelos editoriais do jornal O Estado de S.Paulo durante as campanhas presidenciais de 1989 a 2006*. Curitiba. Tesis de maestría.

Nicolau, J. *Partidos na República de 1946: Velhas Teses, Novos Dados*. En: DADOS—Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 47, no 1, 2004, pp. 85-129.

Nievas, F. y Bonavena, P. (2012) *Una guerra inesperada: el combate por Malvinas en 1982*. En: Cuadernos de Marte, año 2, n° 3, julio 2012.

Ocampo et al (2014). *La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Ortiz, R., Schorr, M. (2006) “La economía política del gobierno Alfonsín: creciente subordinación al poder económico durante la “década perdida” ” En: Pucciarelli, A. *Los años de Alfonsín*. El poder de la democracia o la democracia del poder. Buenos Aires: Siglo XXI.

Parga, J. S. (2006) *¿Qué cooperación internacional para qué desarrollo? un paradigma neocolonial*. En: III Congreso Universidad, Cooperación y Desarrollo, Madrid, abril 2006.

Pêcheux, M. (1999). *O papel da memória*. São Paulo: Pontes.

Pérez, D. *et al.* (2007). *Estado actual y evolución de la productividad del cultivo de caña de azúcar en Tucumán y el noroeste argentino en el período 1990-2007*. En: EEAOC, Tucumán, Publicación especial 34, diciembre de 2007.

Pérez-Liñán, A. (2007) *Presidential impeachment and the new political instability in Latin America*. New York: Cambridge University Press.

Pesce, J. “La gestión del ministro Grinspun en un contexto de transición democrática. Errores de diagnóstico y subestimación del poder económico local e internacional”. En: VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004.

Pollack, M. *Memória, esquecimento, silêncio*. En: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15.

Pucciarelli, A. (Ed). (2011). *Los años de Menem: la construcción del orden neoliberal*. Siglo XXI Editores: Buenos Aires.

RESOLUÇÕES DA PLENÁRIA NACIONAL DA CUT 17, 18 e 19 de agosto de 1990
Escola Sindical 7 de Outubro - Belo Horizonte -MG.

Reyna Izaguirre, C. (2000) *La anunciación de Fujimori*. Alán García 1985-1990. Lima: Desco.

Rius, A. A, Eraso, E. A. (2007) *Fuerzas Armadas y transición democrática*. Argentina, 1983-1989. En: HAOL, nº 13, primavera, 2007, 89-97.

Rosa, Rodrigo (2008). *Regulação da radiodifusão: controle social versus desregulamentação*. : Brasília: Publicações do Senado Federal.

Saborido, J., Borelli, M. (2012). *Voces y silencios: la prensa argentina y la dictadura militar 1976-1983*

Saiz, M. D. (1996) “Nuevas fuentes historiográficas”. En: Historia y Comunicación Social, I. Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, Madrid.

Santacárgelo, J. (2017) *La reforma financiera de 1977 como pilar del endeudamiento externo*. En: Revista del Plan Fénix, año 8, nº 64, agosto de 2017.

Saraiva, M. G. (2008) *As diferentes percepções na Argentina sobre o Mercosul*. Em: Contexto Internacional. Rio de Janeiro, vol. 30, nº 3, setembro/dezembro 2008, p. 735-775.

Saul, Vicente (2009). ESTADO DE S. PAULO, O. Disponible en: <https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/ESTADO%20DE%20S.%20PAULO,%20O.pdf>

Sidicaro, R. *Consideraciones a propósito de las ideas del diario La Nación*.

Skidmore, Thomas (1994). “Vergas e Perón: as dimensões econômicas do populismo no Brasil e na Argentina”, em *O Brasil visto de fora*, Rio de Janeiro, Paz e Terra.

Souza, E. E. S. (2007). A arquitetura de una crise: história e política econômica na Argentina, 1989- 2002. (Tesis de doctorado). Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo: São Paulo.

Swampa, M. (2005) *Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.

Torrado, S. (2010) *El costo social del ajuste (Argentina 1976-2002)*. Tomo I. Buenos Aires: Edhasa.

Tussie, D. (2015) *La Concertación de Deudores*: las negociaciones financieras en América Latina. En: *Análisis*, vol. 20, enero-abril 2015.